



**UNIVERSIDAD DE LA HABANA  
FACULTAD DE DERECHO  
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS BÁSICOS**

**TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN AL TÍTULO ACADÉMICO DE MÁSTER EN  
DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO**

***EL DERECHO AL HONOR FRENTE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  
PRESUPUESTOS PARA SU PROTECCIÓN EN CUBA***

**Autor: Lic. Alie Pérez Véliz**

**La Habana  
2017**



**UNIVERSIDAD DE LA HABANA  
FACULTAD DE DERECHO  
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS BÁSICOS**

**TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN AL TÍTULO ACADÉMICO DE MÁSTER EN  
DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO**

***EL DERECHO AL HONOR FRENTE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  
PRESUPUESTOS PARA SU PROTECCIÓN EN CUBA***

Autor: Lic. Alie Pérez Véliz  
Tutora: Dra.C. Martha Prieto Valdés

**La Habana  
2017**

## ***Dedicatoria***

*A mis hijos **Manuel Antonio** y **María Regina**.*

*A mi esposa **Olga Lisbeth**, apoyo indispensable.*

*A mi **familia**.*

## ***Agradecimientos***

*A mi tutora, la Doctora Martha Prieto Valdés, guía imprescindible en esta investigación.*

*A los profesores de la Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, por sus enseñanzas.*

*A Olga Lisbeth, mi esposa, por su paciente ayuda y el amor con que me regaló sus horas de desvelos.*

*A mis compañeros de trabajo, por su colaboración y apoyo.*

*A todos los que me ayudaron incondicionalmente.*

*“Sin honor no hay hombre...”*

José Martí

*“Como lo que se recuerda es, naturalmente, la obra periodística irresponsable, a causa de sus funestas consecuencias, pocas gentes saben apreciar que la responsabilidad del periodista es mucho mayor que la del sabio...”*

Max Weber

## **SÍNTESIS**

El hombre, desde tiempos inmemoriales, se ha preocupado por la consideración y estima que recibe de la sociedad, así como de su autoestima; estas proyecciones de su personalidad conforman su honor. Históricamente, la protección del derecho al honor se ha regulado en la rama penal, pero en tiempos recientes se ha plasmado en las Constituciones como un derecho fundamental. El despliegue de los derechos asociados a los medios de comunicación (libertad de prensa y expresión, y derecho a la información), y el desarrollo tecnológico de dichos medios, ha posibilitado la divulgación masiva de informaciones y opiniones, que cuando son erradas o no contrastadas, tienden a vulnerar el derecho al honor de personas e instituciones, contribuyendo a formar sobre éstas estados de opinión socialmente reprobables.

Esta situación de colisión de derechos se puede manifestar de manera particular en Cuba, país que no posee ley de prensa, ley de responsabilidad de medios, ni ley de protección civil al honor; por lo que no existe a nivel legislativo una adecuada previsión de colisiones o conflictos entre el derecho al honor y los derechos asociados a los medios de comunicación. Esta investigación propone la plasmación constitucional del derecho al honor, y los derechos adscritos de respuesta y rectificación como garantías, basados en su eficacia directa, vinculación de todos los órganos y organismos de poder del Estado, reserva de ley, indisponibilidad legislativa para la regresión, contenido esencial mínimo intocable, tutela judicial efectiva, y control de constitucionalidad, lo que posibilita una adecuada protección del derecho al honor frente a posibles vulneraciones de los medios de comunicación.

## ÍNDICE

	<b>Pág.</b>
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1: EL DERECHO AL HONOR FRENTE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: REFERENTES HISTÓRICOS Y DOCTRINALES	8
1.1 Referentes históricos y doctrinales del derecho al honor	8
1.1.1 El derecho al honor en su perspectiva histórica	8
1.1.2 Referentes doctrinales del derecho al honor	14
1.2 Referentes histórico-doctrinales de los medios de comunicación	21
1.2.1 Los medios de comunicación masiva, la libertad de prensa y el derecho a la información	21
1.3 Posibles colisiones entre el derecho al honor y los derechos asociados a los medios de comunicación: los derechos de respuesta y rectificación	30
Conclusiones parciales del capítulo 1	38
CAPÍTULO 2: PRESUPUESTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL HONOR ANTE LAS ACTUACIONES LESIVAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CUBA	40
2.1 El derecho al honor en Cuba y su relación con los medios de comunicación: mirada histórica y valoración legislativa	40
2.1.2 El derecho al honor en Cuba y su relación con los medios de comunicación: mirada histórica	40
2.2 El derecho al honor en el actual ordenamiento jurídico cubano y su relación con los medios de comunicación: valoraciones	53
2.3 El derecho fundamental al honor: presupuestos para su garantía en Cuba	63
2.4 Los derechos de respuesta y rectificación, y la ponderación: presupuestos específicos para garantizar el derecho al honor frente a los medios de comunicación	71
Conclusiones parciales del capítulo 2	77
CONCLUSIONES FINALES	79
RECOMENDACIONES	80

BIBLIOGRAFÍA

-

ANEXOS

-



## INTRODUCCIÓN

Desde tiempos inmemoriales el hombre se ha preocupado por su convivencia social. La capacidad de socialización humana ha suplido, en gran medida, las insuficiencias de adaptación al medio natural. La cooperación, cuya base es la sociabilidad, permite que los grupos humanos coordinen acciones para controlar las fuerzas de la naturaleza, y pongan estas a disposición de satisfacer sus necesidades individuales y colectivas.

La convivencia requiere de un orden, un modo de comportamiento del individuo, que haga sus conductas aceptables a los demás; permitiéndole un nivel de realización personal que no entre en contradicción con las metas del grupo. En el inicio de los tiempos históricos el hombre establecía normas, cuyas fuentes eran la costumbre inveterada y el consenso societario. Estas normas eran de naturaleza social, pues los sujetos se percibían como seres iguales con actividades incidentalmente diferenciadas.

Las normas sociales fueron sustituidas o complementadas por normas jurídicas, cuya observancia se respalda en la protección coactiva del Estado. Sin embargo, bajo esta nueva realidad, el hombre continuó necesitando de la aceptación social a sus conductas. La desaprobación implica una sanción, que puede ser de naturaleza moral o incluso jurídica, en casos de alta peligrosidad para la conservación y reproducción del orden existente.

A pesar de esta evolución, se ha mantenido relativamente intacto el interés por tutelar la consideración y estima a que es acreedor el hombre, es decir, su honor; pues de este depende, en gran medida, la aceptación de la sociedad, y derivado de ello, los comportamientos de los miembros de ésta hacia su persona.

El contenido concreto de aquellas conductas que generan consideración y estima cambia de una época y de un contexto geográfico a otro, pero hay un contenido general y abstracto para la aceptación social: la consideración y estima en sí mismas. Los hechos que pueden determinar una elevada aceptación social en un escenario y momento determinado pueden ser motivo de rechazo público en otro, pero la aspiración humana a la aceptación es una constante para las personas.

Una rápida mirada a la historia del Derecho permite percibir la preocupación persistente por la protección al honor personal, con los cambios comprensibles en cada época y cultura. Éste ha sido fuente de méritos y riquezas para unos, y de pobreza y escarnio para otros, en diferentes etapas de la historia universal.

De tal modo, la sociedad se proyecta hacia el individuo según éste cumpla sus patrones de comportamiento; en correspondencia con ello suministra castigos o premios. Estos castigos o

premios contribuyen a conformar una valoración del individuo por la sociedad, lo que lo hace acreedor o no de un buen concepto público.

El desarrollo tecnológico, que permitió al ser humano la reproducción masiva de soportes contentivos de información, hizo potencialmente vulnerable la protección del honor personal. Técnicas como la imprenta, los medios de transportes autopropulsados, las nuevas vías y medios de comunicación, la radio, la televisión y el internet han hecho del acto de comunicar un proceso cada vez más masivo e inmediato. Los efectos<sup>1</sup> de una información u opinión contentivos de datos, características o juicios que perjudiquen el honor de una persona son prácticamente irreversibles en esas condiciones.

En tal sentido, la protección del derecho al honor, y la progresiva aparición de las libertades de prensa y expresión, y del derecho a la información, ha generado situaciones de colisión de derechos en los ordenamientos jurídicos, principalmente con la transición del Estado Liberal decimonónico al Estado Constitucional de Derecho, en los siglos XX y XXI.

La regulación, con rango constitucional, de ambos “tipos” de derechos, y su progresiva fundamentalización, tutela judicial efectiva incluida, ha obligado a jueces, abogados y teóricos del derecho a proponer soluciones como los métodos y técnicas de ponderación, de inaplicación y de armonización de normas.<sup>2</sup>

En el plano teórico, en relación al derecho al honor, y a los derechos asociados a los medios de comunicación<sup>3</sup>, han aparecido y se han desarrollado un amplio número de teorías. En cuanto al primero, éstas se han centrado en dos grandes grupos: uno atendiendo a la dimensión subjetiva u objetiva del derecho<sup>4</sup>; el otro, atendiendo a la titularidad del derecho al honor, dividiéndose este grupo en individualistas y dualistas.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Teoría de los efectos de los medios de comunicación, sostenida o estudiada en sus diversos matices por McQuail, Rowland, Axelrod, Sorice, entre otros.

<sup>2</sup> Principalmente Robert Alexy, en su *Teoría de los derechos fundamentales de la Ley Fundamental*.

<sup>3</sup> A los efectos de esta investigación se entienden como derechos asociados a los medios de comunicación la libertad de prensa, de expresión y el derecho a la información, lo que se fundamentará más adelante.

<sup>4</sup> Según Tomás Vidal Marín: “En su sentido subjetivo, el honor sería el resultado de la valoración que cada hombre hace de sus propias cualidades, en tanto que en sentido objetivo el honor sería el resultado de la valoración que los demás hacen de nuestras cualidades, es decir, sería el aprecio o la estima que una persona recibe en la sociedad en la que vive.” *Derecho al honor, persona jurídica y tribunal constitucional*, en Revista para el análisis del Derecho, No. 1 de 2007, Barcelona, p. 403. Este criterio es concordante con las ideas de Enzo Musco y María Luisa Balaguer Callejón.

<sup>5</sup> Los individualistas consideran que por la naturaleza subjetiva y personalísima de los derechos fundamentales solo son susceptibles de titularidad las personas jurídicas naturales; mientras que los dualistas consideran que tanto estas como determinadas personas jurídicas colectivas pueden ser titulares de ciertos derechos fundamentales. Nota del autor.

Por otra parte, las teorías sobre los medios de comunicación y los derechos asociados a ellos se dividen en tres grandes grupos: el grupo de teorías normativas, el grupo de teorías sobre las relaciones entre medios, cultura y sociedad, y el grupo de teorías sobre las audiencias<sup>6</sup>. A los efectos de la presente investigación sólo se abordarán el primero y el último grupo de teorías, pues son las que refieren las diferentes posiciones sobre los efectos de los medios y como configurar su regulación.

También, amparados en la doctrina de la progresión de los derechos fundamentales, los legisladores de diversas latitudes sustentan la protección del honor mediante nuevos derechos adscriptos. Uno de estos derechos es el de respuesta o rectificación, sobre el que Analía Eliades plantea: "...representa la reparación de los perjuicios morales sufridos en la honra, reputación o legítimos sentimientos de la persona afectada por la información falsa, inexacta o difamatoria. Se une a ese principio, la potencia multiplicadora del agravio y la difusión pública, por un medio de información o comunicación social..."<sup>7</sup>

Cuba no ha estado al margen de esta realidad. En su evolución legislativa, jurisprudencial y doctrinal se ha apreciado la existencia de situaciones potenciales o reales de colisión entre el derecho al honor y las libertades y derechos asociados al desempeño de los medios de comunicación.

Especialmente compleja se torna la realidad cubana, en un contexto signado por la insuficiente regulación constitucional de ambos "tipos"<sup>8</sup> de derecho; una casi nula regulación infraconstitucional del derecho al honor, salvo en materia penal; una ausencia total de ley de prensa o de responsabilidad de medios; y pocas garantías formales a los derechos fundamentales; lo que hace de su exigibilidad judicial un camino difícil para abogados, fiscales y jueces. Todo ello sin que existan las disposiciones jurídicas que obliguen al órgano de prensa o al periodista a observar determinadas conductas de objetividad, o de publicación de rectificación y respuestas.

---

<sup>6</sup> Martínez Terrero, José: *Teorías de comunicación*, Universidad Católica "Andrés Bello", Ciudad Guayana, 2006.

<sup>7</sup> Eliades, Analía: *El derecho de rectificación o respuesta en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación*. Consultado en internet el 20 de diciembre de 2016 en: [http://file:///D:/Maestría%20en%20Derecho%20Constitucional%20Alie/El%20Derecho%20al%20honor%20materiales%20junio%202015/Derechos%20de%20respuesta%20y%20rectificación/eliades\\_rectificacion.pdf](http://file:///D:/Maestría%20en%20Derecho%20Constitucional%20Alie/El%20Derecho%20al%20honor%20materiales%20junio%202015/Derechos%20de%20respuesta%20y%20rectificación/eliades_rectificacion.pdf)

<sup>8</sup> Tipos de derechos se emplea aquí en el sentido de agrupar el derecho al honor y sus asociados (derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen) de un lado, y los derechos asociados a los medios de comunicación (libertad de palabra y prensa, libertad de expresión y derecho a la información) del otro. Ambos tipos o "familias" de derecho se encuentran escasamente reguladas en el ordenamiento jurídico cubano, o lo están de manera incorrecta, según las más avanzadas doctrinas existentes sobre la materia. Nota del autor.

Las características de los nuevos soportes mediáticos, con efectos casi incontrolables sobre la opinión pública, y la estimulación por las autoridades dirigida a que se empleen de forma más “activa” los medios de comunicación en el ejercicio de la crítica, obliga a repensar en Cuba la relación entre la protección del derecho al honor y el respeto de los derechos asociados a los medios de comunicación.

En el marco de este análisis, en Cuba debe plantearse que los medios de comunicación son tecnologías cuya finalidad es transmitir mensajes a un público receptor. Estos mensajes pueden ser informaciones u opiniones. Las informaciones refieren datos sobre hechos de la realidad: sucesos, personas, procesos, generalmente de interés público; mientras que las opiniones son los juicios de valor que hacen las personas sobre esos sucesos, personas o procesos.

Las informaciones y las opiniones transmitidas por los medios contribuyen a la formación de estados de opinión en los públicos. En la medida que los públicos tengan acceso a mayor cantidad y calidad de información se formarán una opinión más objetiva de los hechos y sus significados, para ello la información debe ser cada vez más veraz, mientras que las opiniones deben ser contrastadas.

Las características de inmediatez de información de los medios, en Cuba como en el resto del mundo, puede generar la circulación de datos incompletos, imprecisos, inexactos, incluso erróneos, sobre hechos y personas a ellos vinculados. Además, los medios de comunicación tienen la característica de la masividad: llegan a un público amplio y diverso en poco tiempo.

Como se ha planteado, los datos divulgados a nivel mediático contribuyen a la formación de estados de opinión que pueden generar rechazo, o valoraciones injustas sobre los sujetos implicados, condenándolos a la pérdida de la consideración y estima a la que son acreedores. Otro supuesto, frecuente en la práctica del periodismo, es la emisión de opiniones unilaterales sobre hechos y personas a ellos asociados. Estas opiniones usualmente representan el punto de vista del periodista o de un directivo del medio; o peor aún, de un funcionario que ejerce cierta influencia sobre dicho medio.

Esta emisión tiene como fin formar un estado de opinión sobre determinada persona o institución, sometiéndolas a la pérdida de la consideración y estima social, y por ello de su honor; “... todo lo cual justifica la necesidad de que la persona ofendida tenga la posibilidad de dar a conocer, de

inmediato, sus explicaciones o su versión de los hechos, en el mismo medio y en las mismas condiciones en las que se ha emitido y difundido el agravio...”<sup>9</sup>

En ambos casos los afectados en su honor deben contar con medios adecuados para su protección. Las garantías jurídicas que se instrumenten deben caracterizarse por la inmediatez y publicidad suficientes para contrarrestar los efectos de intromisiones injustas en el honor, así como los límites inherentes al ejercicio de cualquier derecho; para evitar abusos igualmente injustos.

Las actuaciones mediáticas señaladas generalmente se utilizan para justificar futuras decisiones políticas o administrativas, afectando de manera irreparable el honor de los sujetos implicados, incluso en supuestos en que se demuestra posteriormente la inexactitud de la información o la injusticia de las opiniones emitidas.

A tales efectos, esta obra se plantea el siguiente **problema de investigación**:

¿Qué presupuestos teórico jurídicos deben sustentar la protección del derecho al honor frente a la actuación lesiva de los medios de comunicación en Cuba?

Derivado del cual se formula la siguiente **hipótesis de investigación**:

El derecho al honor, para su protección, frente a la actuación lesiva de los medios de comunicación en Cuba, debe concebirse como derecho fundamental, sustentado en la teoría de los derechos adscriptos de respuesta y rectificación.

Para orientar la investigación se ha trazado el siguiente **objetivo general**:

Fundamentar los presupuestos teórico jurídicos que deben sustentar la protección del derecho al honor, frente a la actuación lesiva de los medios de comunicación en Cuba.

Del objetivo general se derivan los siguientes **objetivos específicos**:

1. Analizar desde una perspectiva histórica y doctrinal los referentes que sustentan la protección del derecho al honor frente a la actuación lesiva de los medios de comunicación.
2. Valorar las actuaciones de los medios de comunicación que pueden ser lesivas del derecho al honor.
3. Argumentar los presupuestos teórico jurídicos que deben sustentar la protección del derecho al honor frente a la actuación lesiva de los medios de comunicación en Cuba.

---

<sup>9</sup> Eliades, Analía: *El derecho de rectificación o respuesta en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación*. Consultado en internet el 20 de diciembre de 2016 en: [http://file:///D:/Maestría%20en%20Derecho%20Constitucional%20Alie/El%20Derecho%20al%20honor%20materiales%20junio%202015/Derechos%20de%20respuesta%20y%20rectificación/eliades\\_rectificacion.pdf](http://file:///D:/Maestría%20en%20Derecho%20Constitucional%20Alie/El%20Derecho%20al%20honor%20materiales%20junio%202015/Derechos%20de%20respuesta%20y%20rectificación/eliades_rectificacion.pdf)

En la investigación se emplea el **método histórico jurídico**, el que permitió indagar en los antecedentes del derecho al honor a escala internacional y nacional, así como en las teorías de los medios de comunicación y los derechos asociados. Este abordaje permitió identificar tendencias regulatorias y doctrinales.

Además, se utiliza el **método de análisis jurídico doctrinal**, el que posibilitó determinar las teorías que sustentan la protección del derecho al honor frente a las actuaciones lesivas de los medios de comunicación. Este método tiene implícito los procedimientos racionales de análisis, síntesis, abstracción, y generalización, que posibilitan descomponer el objeto de investigación en sus partes.

El capítulo uno se titula “El derecho al honor frente a los medios de comunicación: referentes históricos y doctrinales”. En él se abordan la historia del derecho al honor y las teorías asociadas a los medios de comunicación, así como los derechos asociados a estos: libertad de prensa y expresión, y derecho a la información. Finaliza con el análisis de la colisión de derechos y los derechos adscriptos de respuesta y rectificación, como garantías de protección al honor.

En el capítulo dos, titulado “Presupuestos para la protección del derecho al honor frente las actuaciones lesivas de los medios de comunicación en Cuba”, se contextualiza a Cuba la evolución del derecho al honor y su relación con los medios de comunicación. Se fundamenta además la concepción del derecho al honor como derecho fundamental, así como su protección frente a las conductas vulneradoras de los medios de comunicación, mediante los derechos adscriptos de respuesta y rectificación. También se fundamentan los requisitos de la ponderación para la solución de las colisiones entre el derecho al honor y aquellos derechos asociados a los medios de comunicación.

Se realizan conclusiones; así como recomendaciones que van dirigidas a futuras profundizaciones investigativas al objeto de estudio, desde otras aristas; éstas incluyen tener en cuenta la obra en caso de instrumentación de propuestas legislativas relacionadas con la materia de análisis. Se plasma la bibliografía que incluye textos teóricos sobre los derechos fundamentales, el derecho al honor, los medios de comunicación y los derechos a ellos asociados. Además, se relacionan los textos constitucionales y las disposiciones jurídicas de inferior jerarquía que fueron empleadas en los análisis.

De esta investigación se derivaron varias publicaciones, las que incluyeron un artículo titulado *El derecho al honor en Cuba. Fundamentos para su reforma*, en el número 35 (junio-diciembre de 2016) de Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. También se publicó un artículo titulado *Antecedentes históricos del derecho al honor: especial referencia al*

*caso cubano*, el que se incluyó en el libro *Estudios Jurídicos. Homenaje al profesor doctor Eurípides Valdés Lobán*, coordinado por el Dr. Andry Matilla Correa y por el propio autor de la tesis. Además, el autor publicó un libro en coautoría titulado *Democracia y derechos fundamentales. Aproximaciones críticas desde Cuba*, el que se editó por Editorial Letra Viva, de Coral Gables, Florida, en julio de 2016.

Junto a lo anterior, se han presentado los resultados de investigación en el VII Encuentro Nacional y I Internacional de Derecho Administrativo, efectuado en La Habana del 4 al 6 de noviembre de 2015; en el VIII Encuentro Nacional de Derecho Administrativo, desarrollado en Santiago de Cuba, los días 3 y 4 de noviembre de 2016. También los resultados de la investigación fueron socializados en el IX Encuentro Internacional: Constitución, Democracia y Sistemas Políticos, desarrollado en La Habana del 22 al 24 de febrero de 2017.

# **CAPÍTULO 1: EL DERECHO AL HONOR FRENTE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: REFERENTES HISTÓRICOS Y DOCTRINALES**

## **1.1 Referentes históricos y doctrinales del derecho al honor**

Se impone realizar un análisis con perspectiva histórica sobre la regulación jurídica y tratamiento doctrinal del derecho al honor. Lo anterior permitiría hallar la definición del honor, así como analizar la regulación actual y doctrinas asociadas a este derecho, con el fin de determinar regularidades y tendencias.

### **1.1.1 El derecho al honor en su perspectiva histórica**

Desde el establecimiento de los primeros códigos de la humanidad se formularon normas dirigidas a proteger el honor de las personas, considerando como tal a aquellos que no tenían la condición de esclavos, pues estos eran para el Derecho objetos parlantes, y no sujetos de plenos derechos.

En el Código de Shulgi o de Ur-Nammu (aproximadamente entre 2100-2050 a. C.), joya del Derecho mesopotámico antiguo, ya se regulaban sanciones pecuniarias para quienes atentaran contra el honor de una persona. En la Ley trece de dicho Código se establece: “Si un hombre acusa a (otro) hombre de brujería (y) al dios-Río lo ha llevado, (y si) el dios-Río lo declara inocente, el hombre que ha llevado (al otro al dios-Río) pesará tres GÍN de plata.”<sup>10</sup>

En el supuesto se propone la prueba de la ordalía fluvial, considerada una variante del juicio de Dios; la práctica de este medio de prueba ayudaría a establecer mediante la intervención de la voluntad divina la veracidad o no de la acusación. De ser falsa la acusación se sentenciará al culpable al pago de una multa. La disposición en este caso va dirigida a prohibir la falsa acusación, y aunque este es el delito que se configura, el bien jurídico protegido es el honor y la reputación de quien ha sido falsamente acusado.

La Ley catorce del propio Código regula que “Si un hombre acusa a una mujer casada de que ha tenido relaciones (sexuales) con ella (y si) el Río la ha declarado inocente, el hombre que (injustamente) la ha acusado pe[sará] un tercio [de mina de plata].”<sup>11</sup>

El supuesto narrado en esta Ley es similar al anterior en cuanto a su estructura, pero debe señalarse que el honor que se protege aquí es el de la mujer casada, e indirectamente el de su esposo. La prueba de inocencia o culpabilidad que se práctica, es igualmente la de la ordalía fluvial, bastante extendida en ese momento.

---

<sup>10</sup> Lara Peinado, Federico y Lara González, Federico: *Los primeros Códigos de la humanidad*, Editorial TECNOS, Madrid, 2001, p. 65.

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 65.



La otra Ley del Código de Shulgi o de Ur-Nammu con enfoque a la defensa del honor es la quince, que compensa al futuro yerno en su dignidad, si el futuro suegro decidía casar a su hija con otro pretendiente. Dicha Ley obligaba al padre de la novia a devolver el doble de lo que había recibido en concepto de futuro matrimonio por parte del novio. Debe recordarse que este Código antecedió en trescientos años al de Hammurabi.

En otros documentos sumerios, que se elaboraban con el fin de familiarizar a los futuros escribas con el lenguaje jurídico, y que eran una especie de libros de textos de Derecho, como es el caso de la serie Ana Ittishu, aparecían redactadas normas típicas que estipulaban cierta protección al honor de las doncellas. En este caso es válido señalar la serie siete y ocho del referido libro, que imitaba una norma que obligaba al hombre violador de una doncella a contraer con estas nupcias, en satisfacción del honor de sus padres y de la propia joven.

Lo expuesto evidencia como desde el origen de la sociedad y del Derecho ya se muestra una intención de proteger el honor de las personas, por lo menos de aquellas que eran consideradas como tal por su condición humana. Estas características se repiten en otras normas escritas y tradiciones de los Estados antiguos, tanto orientales como occidentales.

En la Ley romana de las XII Tablas, que data del 451 antes de nuestra era, eran sancionados con severidad los delitos contra el honor. En la tabla VIII, de materia penal, que castigaba pocos delitos con la pena de muerte, los decenviros deciden aplicarla para quien “...cantase o compusiera una canción que produjera la infamia o la deshonra de otro.”<sup>12</sup>

En las reglas 3 y 4 de la propia Tabla VIII se establecía la pena de multa de veinticinco ases contra el que injuriare a otro. Es interesante resaltar que en la regla 22 de la mencionada Tabla se castigaba con la deshonra a quien fuera testigo o sostuviera la balanza en el rito emancipatorio y no otorgara el testimonio; se incluía como sanción accesoria para este caso la incapacitación para ser testigo y para castigar.

Los tres ejemplos señalados muestran la alta consideración que alcanza en el Derecho Romano el honor, siendo protegido como bien jurídico contra los delitos de infamia e injuria. La estimación del honor y del derecho a ostentarlo era tal que la deshonra, muy asociada a este, se consideró en sí misma una forma de sanción.

Más cercano en el tiempo, el derecho musulmán, reguló la protección del honor de las personas mediante el castigo del delito de calumnia, el cual consistía en la falsa imputación de un delito de fornicación o adulterio. Obsérvese que en sus orígenes esta figura penal era similar a la actual

---

<sup>12</sup> Ley de las XII Tablas, Editorial TECNOS, Madrid S.A., p. 21.

calumnia, pero la sencillez de procedimientos para estos casos fue complejizándose con la evolución del Derecho musulmánico.

En la Edad Media el honor estuvo en el contenido de todos los códigos de caballería, creándose incluso las llamadas Órdenes de los Códigos de Caballería, después de las Cruzadas. En la Partida Segunda, Ley XII, Título XXI, de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio se estableció como formas de acceder a la hidalguía, y por tanto al honor y la consideración social, el saber expresado en el conocimiento y la práctica de las Ciencias y Artes Liberales, y la bondad de las costumbres<sup>13</sup>. Esta fue la forma en que se transfirió de las normas morales a las jurídicas el derecho al honor en el Medievo español.

Pero el concepto de honor en el Medievo español era expansivo, pues abarcaba casi todas las conductas de los sujetos; al respecto refiere Sánchez Albornoz "...en las múltiples cuestiones de honor que podían y solían suscitarse triunfaba una rigidez sin tolerancias ni condescendencias, firme, plena y a las veces bárbara e inhumana. En ella no había lugar para el perdón. Era necesaria e implacable la venganza privada..."<sup>14</sup>

En este mismo período aparece probablemente, con matiz cuasi jurídico, el antecedente más lejano de los derechos de respuesta y rectificación contra las vulneraciones al honor: el desafío de caballeros.<sup>15</sup> Al igual que las contemporáneas respuesta y rectificación, el desafío de caballeros implicaba la posibilidad, para el ofendido, de recibir enmiendas de parte del ofensor.<sup>16</sup>

Con la subida al poder de la burguesía el honor se asoció a la consideración que ofrecía la propiedad y las riquezas, aunque no se limitaba a esto. La moral burguesa mantuvo incólume regulaciones tradicionales sobre el honor y la dignidad en el derecho de familia, obligando a la mujer a una conducta debida ante la sociedad, la cual debía mostrar fidelidad y obediencia al esposo para conservar su honor<sup>17</sup>.

Con el surgimiento de los Estados nacionales, y los modernos ordenamientos burgueses, la regulación del honor como derecho se fue expandiendo a varias ramas o materias, entre las que se

---

<sup>13</sup> Alfonso X el Sabio: *Las Siete Partidas (El Libro del Fuero de las Leyes)*, Edición Real-versión digital-, Madrid, 1807, pp.291 y 292.

<sup>14</sup> Sánchez de Albornoz, Claudio: *España: un enigma histórico*, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1957, p. 637.

<sup>15</sup> Serra Ruíz, Rafael: *Honor, honra e injuria en el Derecho medieval español*, Universidad de Murcia, Murcia, 1999, p.49.

<sup>16</sup> Serra Ruíz, Rafael: *Honor, honra e injuria en el Derecho medieval español*, Universidad de Murcia, Murcia, 1999, p.49.

<sup>17</sup> Novoa Monreal, Eduardo: *Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de derechos*, Siglo XXI Editores, México, 1989, pp. 74 y 75.

encuentran el moderno derecho constitucional; y adquirió nuevos contenidos en las reformulaciones del derecho penal, civil y de familia.

La regulación del derecho al honor tiene una amplia presencia en las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo típico es la Ley Fundamental de Bonn, de 23 de mayo de 1949, que postula en su artículo cinco, segundo acápite, luego de consagrar el derecho a la libertad de expresión “Estos derechos tienen sus límites en las disposiciones de las leyes generales, las disposiciones legales adoptadas para protección de la juventud, y el derecho al honor personal.”<sup>18</sup>

La norma constitucional alemana refleja el derecho fundamental al honor como límite al ejercicio del derecho de expresión. Aunque se plasma de una forma indirecta, se recoge en la parte que corresponde del texto constitucional, la relativa a los derechos fundamentales; además se deja claro que el honor es un derecho, y se soluciona el posible conflicto entre este y la libertad de expresión a favor del primero.

Otra Constitución que regula de forma explícita el derecho al honor es la española de 1978, que plasma en su artículo 18):

- “1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.”<sup>19</sup>

De la letra del texto y de su forma de redacción se aprecia que el derecho al honor es concebido no solo como un derecho fundamental, sino que complementa y se complementa con otros derechos de igual naturaleza: por ejemplo, el Código Civil español acoge medios de protección para la reclamación en favor del honor, mientras que para fortalecer este derecho en sede Civil se aprobó el 5 de mayo de 1982 la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esta transferencia de protección del honor de la materia Penal a la Civil deriva de la posibilidad que ofrece esta última de emitir sentencias reparadoras, satisfactorias del interés del demandante, lo que no siempre es posible en sede Penal.

---

<sup>18</sup> Prieto Valdés, Martha: *Selección de textos constitucionales. Primera Parte*, ENPSES, La Habana, 1991, p. 91.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 233.

En el ámbito latinoamericano algunos textos constitucionales marcan la diferencia con Cuba en cuanto a reconocer el derecho al honor de las personas de manera explícita. La Constitución de la República de Chile, a pesar de haber sido proclamada en 1980, en las condiciones excepcionales de ese país para la fecha, estipula en su artículo 19, acápite cuatro, que la Carta Magna asegura a toda persona “El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia.”<sup>20</sup>

La Constitución Política de la República de Guatemala, de 31 de mayo de 1985, plasma en su artículo cuatro que “...En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos...”<sup>21</sup> Como puede apreciarse en este caso se utiliza el término dignidad, similar en su contenido al de honor, por lo que el autor considera que el constituyente está protegiendo el derecho al honor, definiendo con rango constitucional el reconocimiento y protección al bien jurídico patrimonio moral.

La Constitución de la Nación Argentina, de 22 de agosto de 1994, plasma en su artículo 43 el reconocimiento del derecho a ejercer acción contra cualquier forma de discriminación, siendo una vía indirecta de reconocimiento del derecho al honor. Es evidente que en este caso el constituyente plasmó un reconocimiento indirecto al patrimonio moral de las personas, al impedir cualquier forma de discriminación.

La Constitución Política de Colombia, de 7 de julio de 1991, plantea en su artículo 15 que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlo y hacerlo respetar...”<sup>22</sup> Este es un caso que contiene de manera implícita el reconocimiento del derecho al honor, y por extensión la protección al patrimonio moral.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 20 de diciembre de 1999, reconoce y regula con gran amplitud el derecho al honor de las personas, aunque para ello emplea otros términos. En su artículo 46 estipula que “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral...”<sup>23</sup> Seguidamente el artículo relaciona con gran amplitud la forma en que esto se garantizará por el Estado, incluyendo la prohibición por parte de los funcionarios públicos de aplicar tratos crueles, inhumanos o degradantes; reconociendo el derecho

---

<sup>20</sup> Villabella Armengol, Carlos M.: *Selección de Constituciones Iberoamericanas*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2002, p. 59.

<sup>21</sup> *Ibíd*em, p. 101.

<sup>22</sup> *Ibíd*em, p. 204.

<sup>23</sup> *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*, (Reimpresión en los Talleres Gráficos de la Asamblea Nacional), 2005, p. 100.

de los detenidos al respeto de su dignidad, entre otros. La idea del respeto a la dignidad se reitera en otros artículos.

En este período, con la firma de los tratados internacionales y la constitución de la Organización de las Naciones Unidas, se fueron incorporando a estos instrumentos del Derecho Internacional Público la regulación del derecho al honor, a la dignidad humana y a la propia imagen. Un ejemplo de lo expresado se aprecia en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se expresa:

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”<sup>24</sup>

En instrumentos regionales como La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, se plasma un acuerdo similar, al estipular en su artículo 11 sobre “Protección de la honra y de la dignidad”:

- “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”<sup>25</sup>

Debe concluirse que en su evolución histórica el honor ha transitado de ser considerado una institución social de contenido variable y naturaleza moral, a ser configurado como un derecho humano en el ordenamiento internacional, designado indistintamente como honor, honra, o dignidad. En su configuración jurídica, ha prevalecido la regulación penal, orientada a la protección tanto del honor subjetivo como del objetivo. Su contenido expansivo penetra muchas esferas de las relaciones sociales, pero con tendencia a acotar cada vez más su ámbito de protección.

Debe señalarse, sin embargo, que después de la Segunda Guerra Mundial el derecho al honor tiende a regularse, con diferentes denominaciones, en las Constituciones, como derecho fundamental de eficacia directa y límite a los derechos asociados a los medios de comunicación.

---

<sup>24</sup> «Declaración Universal de los Derechos Humanos», en *Instrumentos Jurídicos Internacionales*, t. I, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1991, p. 162.

<sup>25</sup> «Convención Americana de Derechos Humanos-Pacto de San José-», consultado en: [https://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_b-32\\_convencion\\_americana\\_sobre\\_derechos\\_humanos.htm](https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm), el 14 de junio de 2017.

Igualmente se ha impuesto la instrumentación de la protección civil al honor, con vista a lograr en el afectado una justicia reparadora, que no siempre alcanza la jurisdicción penal.

Luego de la exploración de la regulación del derecho al honor en la historia de la Humanidad se impone su análisis doctrinal. Para ello se tendrá en cuenta los principales planteamientos y teorías formuladas por constitucionalistas y otros juristas, así como fallos de tribunales que han sentado doctrina en la materia.

### **1.1.2 Referentes doctrinales del derecho al honor**

La dignidad humana y el honor son contenidos de las relaciones sociales que han estado presentes desde el origen de la humanidad. Ambas categorías tienen una fuerte trascendencia tanto para la moral como para el Derecho; desde sus primeras manifestaciones se trataba de normas morales que llegaron a tener efecto jurídico. Esto se valida porque el honor se refiere a un modo de conducta que, de corresponderse con las exigencias sociales, se retribuye mediante la adquisición de determinados derechos, siendo el más común el derecho al buen nombre.

Cuando alguien se refiere al honor de una persona, generalmente, hace alusión al reconocimiento o estimación social del que ésta goza. La sociedad impone determinadas normas o exigencias sociales a sus miembros, y a través de la valoración social e individual enjuicia permanentemente la conducta de los sujetos, premiándolos con la aceptación o sancionándolos con el rechazo.

El Diccionario Filosófico de M. Rosental y P. Iudin define el honor como “Categoría moral; que expresa el reconocimiento, por parte de la sociedad, de todo cuanto merece una alta estimación en la manera de actuar de un individuo, de una colectividad, de una institución...”<sup>26</sup> y luego, asumiendo a juicio del autor una posición reduccionista, identifica al linaje como causa del honor en el feudalismo, a la posesión de riquezas como causa del honor en el capitalismo, y a los méritos ante el pueblo como causa de honor en el socialismo. Si este planteamiento tiene algo de veraz, no es toda la verdad, pues las absolutizaciones son negativas para cualquier pretensión científica.

El honor también es definido como una cualidad moral vinculada al cumplimiento del deber, la virtud, el mérito y el heroísmo. Se manifiesta en el ámbito familiar, laboral y social a través de la fama, la gloria o simplemente mediante la buena opinión de la que se disfruta. Generalmente el honor es visto como un factor para obtener de la sociedad favores materiales o espirituales, como buenos empleos, riqueza personal o estatus social.

---

<sup>26</sup> M. Rosental, P. Iudin: *Diccionario Filosófico*, Editora Política, La Habana, 1981, p. 223.

El honor suele vincular a las personas con elementos que conforman la estructura de la sociedad, o por lo menos con ramas de la actividad humana y con los oficios y profesiones. En este sentido se reconoce la existencia del honor profesional, comercial, científico u otros.

Para algunos autores<sup>27</sup> la dignidad humana es vista como la suma de caracteres o cualidades que configuran ante las personas la existencia de un determinado ser y no otro, como identidad de dicho ser entre los hombres; como un conjunto de rasgos que sumados unos a otros confirmarían la pertenencia de un ser dado a la especie humana. Por lo tanto, la dignidad humana se encuentra en el fundamento del derecho al honor.

Para el constitucionalista Eduardo Espín “El honor, en tanto que aprecio y estima que una persona recibe en la sociedad en la que vive, es un derecho fundamental que afecta íntimamente la dignidad de la persona.”<sup>28</sup> Obsérvese que en esta definición sobresalen los términos aprecio y estima, entendidos como consideración que tiene la sociedad de una persona en un sentido objetivo, a la vez que manifiesta una vinculación de estas categorías con la dignidad de la persona.

De lo expresado se desprende que el derecho al honor sería como una derivación, como emanación de la dignidad humana, entendido por ello como derecho a ser respetado por las demás personas. Sin embargo, el derecho al honor tiene un carácter autónomo e independiente de otros similares como el derecho a la intimidad y a la propia imagen, aunque erradamente se les confiera el mismo tratamiento jurídico por los autores y las normas del derecho positivo.

Autores especializados en las Ciencias Penales<sup>29</sup> han logrado identificar la diferencia sustancial entre la intimidad y el honor por vía de la determinación del bien jurídico que se protege en cada caso. El bien jurídico intimidad lo definen como libertad potenciada en el ámbito de lo íntimo, constituida por las costumbres, hábitos y modos privados de asumir la convivencia humana, en lo personal y familiar, en su índole cultural y espiritual; es la libertad personal de asumir la vida fuera de las obligaciones sociales. Mientras que el bien jurídico conformado por el derecho al honor lo definen como el patrimonio moral que le corresponde a cada persona.

Otros autores enfatizan en la relación cuasi conflictual que se puede establecer entre los derechos al honor y la dignidad, y el derecho a la libertad de expresión. Al respecto plantean Blas Guerrero y García Cotarelo:

---

<sup>27</sup> Para los italianos Enzo Musco y Ettore Gallo, entre otros.

<sup>28</sup> Espín, Eduardo: *Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*, en López Guerra, Luis y otros: *Derecho Constitucional. Volumen I. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 146.

<sup>29</sup> Enzo Musco y Giovanni Fiandaca, idea defendida en: Fiandaca, Giovanni y Musco, Enzo: *Derecho Penal. Parte Especial - Delitos contra la persona-*, Vol I, Libro I, III edición, Wadsworth Publishing, Bologna, 2011.

“El derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen constituyen un claro límite a la libertad de expresión...Se estima en todo caso que esa protección no cubrirá los hechos de dominio público, aquellas circunstancias personales que el interesado, a través de su comportamiento, no considerada de naturaleza reservada o cuando los hechos objeto de información...afectan exclusivamente a actividades que tengan relación directa con las causas de proyección pública de la persona afectada.”<sup>30</sup>

Reflexionando sobre la naturaleza jurídica del concepto honor se puede apreciar dos dimensiones del mismo: la que lo concibe desde un punto de vista subjetivo, refiriéndose a la autoestima producto de la autovaloración que tiene una persona sobre sí misma; y la objetiva, que refiere a la consideración que tiene la sociedad sobre una persona, a partir de valorar su conducta, o el cumplimiento de las normas establecidas a nivel social.

Al respecto plantea Sonia Calaza López que el derecho al honor es “...como un derecho derivado directamente de la «dignidad humana», que se refleja tanto en la consideración que de la misma tengan los demás, como en el sentimiento de consideración propia de esta persona; siendo por tanto dos aspectos a destacar uno el objetivo, y el otro el subjetivo, o lo que viene a ser lo mismo uno externo o social, y otro interno o personal.”<sup>31</sup>

También se ha establecido un fuerte debate doctrinal sobre la titularidad del derecho al honor en favor de las personas jurídicas. Al respecto autores como Manuel Aragón Reyes sostiene la posibilidad de que determinadas personas jurídicas sean titulares del derecho al honor, siempre que dicha titularidad sea inherente al cumplimiento de los fines para los que dichas personas fueron constituidas.<sup>32</sup>

La posición anterior es sostenida por el Tribunal Constitucional de España, el que en su Sentencia 139/95 de 1995 establece “resulta evidente, pues, que, a través de los fines para los que cada persona jurídica privada ha sido creada, puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad y en dos sentidos distintos: tanto para proteger su identidad cuando desarrolla sus fines como para proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, bajo las que recaería el derecho al honor. En tanto que ello es así, la persona jurídica también puede ver lesionado su derecho al

---

<sup>30</sup> Blas Guerrero, Andrés y García Cotarelo, Ramón: *Teoría del Estado y Sistemas Políticos. Parte General Teoría del Estado (I)*, s/f, p. 209.

<sup>31</sup> Calaza López, Zonia: *Delimitación de la protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen*, en Revista de Derecho UNED, No. 9, 2011, Madrid, p. 49.

<sup>32</sup> Aragón Reyes, Manuel: *El derecho al honor de las personas jurídicas y sus posibles colisiones con el derecho de información*, consultado de <https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/5568>, el 16 de junio de 2017.



honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena.”<sup>33</sup>

Otra arista interesante es analizar qué tratamiento han dado las diferentes ramas o materias del Derecho al honor. Se percibe en este sentido una expresión trilateral o tridimensional del referido derecho: en la materia constitucional se concibe como derecho fundamental; en el Derecho Civil como derecho subjetivo de la personalidad, y en Derecho Penal como bien jurídico.

Basados en los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, no sería irracional que en ramas diferentes del ordenamiento jurídico el derecho al honor se regule de manera diferente, atendiendo a las particularidades de dichas ramas; pero esto debe hacerse respetando las disposiciones de rango constitucional en la materia, lo que no parece prevalecer en las prácticas legislativas contemporáneas.

La expresión trilateral del derecho al honor en un ordenamiento jurídico puede crear relaciones contradictorias, si no se respeta la Constitución y las leyes. Esto puede apreciarse en la declaración en materia constitucional del carácter irrenunciable de los derechos fundamentales, y la posibilidad en sede penal de renunciar a iniciar un proceso por la vulneración del referido derecho por parte de su titular, en virtud de que dichos delitos son perseguibles a instancia de la parte afectada. Estas contradicciones pueden evidenciar situaciones de falta de unidad regulatoria, de integridad y de sistematicidad en un ordenamiento jurídico determinado.

La complejidad para designar al repertorio de derechos dentro del que se considera el derecho al honor es tal, que incluso, en el Derecho Constitucional y en los tratados internacionales aparecen otras designaciones como derechos humanos, libertades individuales y derechos del hombre.

El constitucionalista español Pérez Tremps atribuye esta diversidad de designaciones en el Derecho Constitucional a varios motivos, que van desde la perspectiva metodológica con que se analiza una misma realidad jurídica, pasando por la dimensión histórica, hasta llegar a la estructura interna de los distintos derechos.

A pesar de esta diversidad de designaciones, el autor coincide con Pérez Tremps cuando plantea “...desde el punto de vista constitucional, el concepto de «derechos fundamentales» resulta el más adecuado; ello porque, por otra parte, la expresión «derechos fundamentales» sirve para poner de manifiesto la naturaleza especial que dichos derechos poseen: su consideración como elemento

---

<sup>33</sup> Sentencia 139/95 del Tribunal Constitucional de España, de 1995.

básico y preeminente del ordenamiento, frente a la naturaleza «ordinaria» que los demás derechos subjetivos poseen.”<sup>34</sup>

También debe considerarse que la doctrina y la legislación constitucional emplean el término derechos fundamentales en dos sentidos: uno amplio, y considerado técnicamente incorrecto por algunos autores<sup>35</sup>, que le atribuye tal calificativo a cualquier derecho plasmado en la Constitución; y uno estricto, reservado para aquellos derechos que conforman el núcleo central del estatus jurídico del individuo. Estos derechos son los que en Constituciones como la española manifiestan una especial rigidez exigida para su reforma, y gozan de un reforzado sistema de garantías normativas en las leyes de desarrollo.

Autores como el español Pérez Luño definen los derechos fundamentales como “el conjunto de facultades, instituciones y prerrogativas que en cada momento histórico concretan la exigencia de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos...”<sup>36</sup>

Sin embargo, estos autores asumen posiciones ambiguas, pues hacen depender la consideración de derecho fundamental de tales derechos a su ubicación lógico formal dentro del cuerpo de la Constitución, negándole tal condición a los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Así desestiman el fundamento que atribuye a dichos derechos el núcleo central del estatus jurídico del individuo, como derechos inherentes a la personalidad, independientemente de su positivación, dándose en la práctica argumentativa una contradicción de posturas.

A los efectos de la presente investigación resultan de trascendental importancia los aportes de la constitucionalista española María Luisa Balaguer Callejón, quien en su obra *El derecho fundamental al honor*, argumenta la fundamentalidad de ese derecho amparada en una posición intermedia entre iusnaturalismo y positivismo jurídico. Lo trascendente de sus argumentos es que se separa, relativamente, de la tradicional postura de los constitucionalistas españoles, que condicionan el reconocimiento de fundamental a un derecho a su ubicación dentro de la Constitución.

Balaguer Callejón plantea que el derecho fundamental al honor es tal por su especial protección dentro del ordenamiento jurídico, pero que deriva el carácter fundamental de tales derechos de su condición de inherentes a la dignidad humana, y del estatus personal del ciudadano frente al

---

<sup>34</sup> López Guerra, Luis y otros: *Derecho Constitucional. Volumen I. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

<sup>35</sup> Pérez Tremps, Pérez Luño, Balaguer Callejón, entre otros.

<sup>36</sup> Pérez Luño, A. Enríque: *Los Derechos Fundamentales*, Editorial TECNOS, Madrid, 1994, p. 44.

Estado y a terceros; siendo su progresión garantista resultado de la evolución histórica de la humanidad y particularmente de las conquistas políticas y jurídicas del hombre como colectividad universal<sup>37</sup>.

La autora propone un sistema general de garantías para la protección de los derechos fundamentales, a la vez que unas garantías especiales para la protección del derecho fundamental al honor. Dentro de las primeras, y coincidiendo con Pérez Royo<sup>38</sup> plantea que estos derechos deben gozar de:

- 1) Eficacia directa: significa que los derechos fundamentales tienen una eficacia a partir de la propia Constitución, y que no es necesaria, en consecuencia, una intervención del legislador para que los ciudadanos puedan ejercerlos. Sin embargo refieren ambos autores que sería muy conveniente para la seguridad jurídica en la protección del derecho los referidos desarrollos legislativos.<sup>39</sup>
- 2) Reserva de Ley: plantea que la regulación de los derechos fundamentales solo puede estipularse por Ley, al amparo de decisiones emanadas del máximo órgano con funciones legislativas; evitando con ello las posibles intromisiones arbitrarias de los órganos administrativos por vía de reglamentos o disposiciones de inferior jerarquía, que vulneren los derechos. Esto implica también una alta cuota de legitimidad a la regulación de los derechos fundamentales.<sup>40</sup>
- 3) Contenido esencial mínimo: estipula que existe un núcleo esencial de protección de los derechos fundamentales que, bajo cualquier circunstancia, incluso en las situaciones más extremas, debe ser protegido. Ese contenido no puede estar sujeto a afectación.<sup>41</sup>
- 4) Tutela judicial efectiva: esta garantía supone que todos los derechos fundamentales deben poder reclamarse ante un órgano jurisdiccional, ya sea especializado u ordinario, pero en cumplimiento de todos los principios procesales más avanzados en la materia: un procedimiento especial caracterizado por las notas de preferencia y sumariedad ante los tribunales ordinarios.<sup>42</sup>
- 5) Control de constitucionalidad: significa que todas las leyes y reglamentos deben estar sujetos previamente, y con posterioridad a su promulgación, a ser controlados y

---

<sup>37</sup> Balaguer Callejón, María Luisa: *El derecho fundamental al honor*, Editorial Tecnos S.A. , Madrid, 1992.

<sup>38</sup> Pérez Royo, Javier: *Curso de Derecho Constitucional*, MACIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES S.A., (cuarta edición), Madrid, 1997, pp. 345 y 346.

<sup>39</sup> Balaguer Callejón, María Luisa: *El derecho fundamental al honor*, Editorial Tecnos S.A. , Madrid, 1992, p. 86.

<sup>40</sup> *Ibidem*, p. 87.

<sup>41</sup> *Ibidem*, p. 87.

<sup>42</sup> *Ibidem*, p. 88 y 89.

armonizados con la Constitución, para evitar contenidos vulneradores de los derechos fundamentales. Esto supone la posibilidad posterior de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante un órgano político o jurisdiccional, ordinario o especializado, que tenga facultades para derogar u ordenar inaplicar una disposición del rango que sea, si su contenido vulnera algún derecho fundamental.<sup>43</sup>

Junto a estas garantías generales, configurables para cualquier derecho fundamental, la constitucionalista Balaguer callejón propone dos garantías especiales de protección del derecho fundamental al honor, en el caso particular de colisiones potenciales con los derechos asociados a los medios de comunicación. Según ella, los derechos de respuesta y rectificación cumplen de manera adecuada esa función de garantizar el derecho al honor frente a los medios masivos.<sup>44</sup> Esta postura es compartida por Carmona Díaz de León<sup>45</sup>, y se abordará más adelante.

La autora, que reconoce el carácter limitado de cualquier derecho fundamental, fundamenta que en el caso particular de los medios de comunicación estos deben evitar una publicidad ilícita, considerando como tal toda aquella que:

“...atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores o derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer. La engañosa, la desleal, la subliminal, y la que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios.”<sup>46</sup>

Este autor asume parcialmente los planteamientos de Balaguer Callejón, fundamentalmente en lo relativo a la posición intermedia en cuanto a considerar el derecho al honor como un derecho fundamental; así como las garantías generales y especiales que se proponen para una adecuada protección del derecho al honor frente a los medios de comunicación. Estas ideas serán retomadas, ampliadas y contextualizadas a la realidad cubana, como presupuestos para la protección efectiva del derecho al honor frente a los medios de comunicación en Cuba.

De las teorías analizadas se puede deducir que el derecho al honor es la facultad que todo ser humano tiene de ser considerado y estimado por la sociedad (sentido objetivo), así como de

---

<sup>43</sup> *Ibidem*, p. 89.

<sup>44</sup> *Ibidem*, p. 93.

<sup>45</sup> Carmona Díaz de León, Eugenia Paola: *El derecho de rectificación en México*, Tesis presentada para obtener el grado de Doctora en Derecho, México, UNAM, 2010.

<sup>46</sup> Balaguer Callejón, María Luisa: *La regulación de los Consejos Audiovisuales en el ordenamiento jurídico español*, en Revista Teoría y Realidad Constitucional, No. 25, Primer semestre 2010, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, UNED, Madrid, 2010, p. 288.

autoestimarse a sí mismo (sentido subjetivo), lo cual es inherente a la condición humana, así como a aquellas personas jurídicas que se justifique conforme a sus fines. Este es un producto del progreso de la humanidad, y aunque su positivación no es un requisito previo de existencia, es una de las formas más seguras para garantizar este derecho.

## **1.2 Referentes histórico-doctrinales de los medios de comunicación**

### **1.2.1 Los medios de comunicación masiva, la libertad de prensa y el derecho a la información**

Desde la antigüedad el hombre ha sentido la necesidad de comunicarse, para ello ha creado sus propios medios, utilizando en los inicios los que le ofrecía la naturaleza, y luego construyendo otros más sofisticados, derivados de su desarrollo intelectual. Primero se utilizaban los mensajeros humanos, así como a los animales domesticados; luego se emplearon el fuego, el humo y el reflejo de la luz solar, para crear señales visibles a grandes distancias. La construcción de barcos, carruajes, y el empleo de caballos y otros animales de tracción permitieron alargar las distancias, ampliar los contactos, así como acelerar flujos comunicativos.

Pero no se puede hablar todavía de medios de comunicación masiva hasta la creación de la imprenta moderna por Johannes Gutenberg, en 1440, técnica que permitió masificar los destinatarios del mensaje. Por ello, los medios de comunicación masiva se basan en inventos de la modernidad; además de la imprenta, se desarrollan con la construcción de modernas vías, la autopropulsión del transporte, y las nuevas tecnologías para la transmisión de mensajes.

Danis McQuail define a los medios de comunicación de masas como “las tecnologías organizadas que posibilitan la comunicación de masas.”<sup>47</sup> En su definición es fundamental la dimensión tecnológica, el carácter organizado, su papel de condición material para producir mensajes, y el carácter masivo de los destinatarios.

Para dicho autor los medios de comunicación de masas se concretan en la prensa escrita, la radio y la televisión; y su trascendencia consiste en que estos se constituyen en recursos de poder, pues son instrumentos potenciales de influencia, control e innovación en la sociedad. También son ámbito o esfera de desarrollo de la vida nacional e internacional; son una fuente importante de definiciones e imágenes; fuente primaria de la fama; y el origen de un sistema de significados.<sup>48</sup>

Debe destacarse el importante papel que se le reconoce a los medios como fuente primaria de fama, que McQuail atribuye a los famosos, pero hay que señalar, a los efectos de esta

---

<sup>47</sup> McQuail, Danis: *Introducción a la teoría de la comunicación de masas*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1985, p.26.

<sup>48</sup> *Ibidem*, pp. 27 y 28.

investigación, que es extensivo a cualquier sujeto, pues la fama es resultado o efecto de la propia publicidad que produce el medio. En otro sentido, la fama es un concepto neutral, pues puede ser de valor socialmente positivo o socialmente negativo.

Esta potencialidad de los medios de producir fama (positiva o negativa), es la que fundamenta que el honor, entendido como derecho a la autoestima y a la consideración y estima de la sociedad, debe protegerse ante las actuaciones lesivas de los medios de comunicación; es decir, debe evitarse acciones de comunicación masiva que afecten injustamente la expectativa que cada cual tiene de ser considerado y estimado por los demás y por sí mismo.

Uno de los significados que atribuye McQuail a la comunicación de masas es que “...se puede considerar uno de los diversos procesos de comunicación a escala de toda una sociedad, que se encuentra en el vértice de una distribución piramidal de todos los procesos de comunicación.”<sup>49</sup>

La definición aporta tres interesantes elementos: la comunicación de masas es un proceso, que ocurre a nivel de toda la sociedad, y en su forma de expresión más general está por encima de otros procesos de comunicación a escala menor, y a la vez los contiene. Estas tres características o particularidades de la comunicación de masas revelan el efecto masivo que puede tener una actuación mediática lesiva al honor, y por lo tanto al derecho que todos tienen a ser considerados y estimados socialmente.

García Fajardo, por su parte, entiende por medios masivos a las instituciones que intervienen en el proceso de interacción entre un emisor único (o comunicador) y un receptor masivo (o audiencia); un grupo numeroso de personas que cumpla simultáneamente con tres condiciones: ser grande, ser heterogéneo y ser anónimo.<sup>50</sup>

El propio McQuail, superando su definición tecnológica de los medios de comunicación de masas, reconoce su dimensión institucional. Al respecto plantea que un medio masivo:

“Consiste, a grandes rasgos, en el conjunto de las organizaciones y actividades mediáticas junto con sus normas, formales e informales, de funcionamiento y, ocasionalmente, los requisitos legales y éticos establecidos por la sociedad...”<sup>51</sup>

Esta definición enfatiza en el papel de las normas, siendo trascendente para el objeto de la investigación en curso las formales; así como el ámbito de los requisitos legales para el funcionamiento institucional de los medios masivos. Este constituye uno de los principales aportes de las llamadas teorías normativas sobre los medios de comunicación.

---

<sup>49</sup> McQuail, Danis: *Introducción a la teoría de la comunicación de masas*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1985, pp. 35.

<sup>50</sup> García Fajardo, J.C.: *Comunicación de masas y pensamiento político*, Editorial TECNOS, S.A., Madrid, 1992, p. 23.

<sup>51</sup> McQuail, Danis: *Introducción a la teoría de la comunicación de masas*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1985, pp. 42.

En el sentido señalado McQuail enfatiza como característica de los medios que:

“La institución mediática se encuentra en la esfera pública, lo que significa, en particular, que está abierta a todos, como emisores o receptores; los medios tratan asuntos públicos con fines públicos, sobre todo cuestiones susceptibles de influir en la formación de la opinión pública; los medios son responsables de sus actividades ante la sociedad (esta responsabilidad se expresa mediante leyes, regulaciones y presiones por parte del Estado y de la sociedad).”<sup>52</sup>

Este planteamiento expresa dos características de especial incidencia para el derecho al honor frente a los medios de comunicación: el carácter abierto de los medios a los emisores y receptores, y su capacidad para influir en la formación de la opinión pública.

Los planteamientos de McQuail son expresión de la integración de las teorías de los efectos y las teorías normativas sobre los medios de comunicación (de “responsabilidad”, “democrática” y “de participación comunitaria”), las cuales postulan que los medios de comunicación tienen efectos inmediatos y masivos sobre los públicos, por lo que requieren de una regulación sustentada en la responsabilidad, así como la participación de dichos públicos en el control de los mensajes. Especialmente sensible es ese control si contribuye a la formación de una opinión pública veraz y contrastada.

Para la doctrina liberal<sup>53</sup>, según plantea Martínez Terrero, la libertad de prensa es concebida como el conjunto de garantías que permite a los ciudadanos ejercer el derecho de organizarse para fundar medios de comunicación, cuyos contenidos, en principio, no estén controlados ni censurados por el Estado.<sup>54</sup> Con el tiempo el concepto ha extendido esta restricción de censura y control a otros actores políticos y de la sociedad civil, a la vez que se ha suscitado el debate sobre la pertinencia de establecer límites y restricciones a dicha libertad.

En general, el término libertad tiene diferentes definiciones en la doctrina jurídica, sin embargo, también se aprecian grandes puntos de coincidencia: una inhibición de la actuación del Estado frente a los particulares, que implica un dejar hacer, pero bajo protección estatal, en caso de ser necesario.

Para Esteban Echevarría libertad significa “...el derecho que cada hombre tiene para emplear sin traba alguna sus facultades en el conseguimiento de su bienestar, y para elegir los medios que

---

<sup>52</sup> *Ibidem*, pp. 42 y 43.

<sup>53</sup> John Milton, John Stuart Mill, Thomas Paine, Alexis de Tocqueville y John Merrill. El planteamiento más difundido de esta doctrina en material de libertad de prensa es que ésta debe comportarse como un mercado libre de ideas, donde cada cual escoja la más conveniente a sus fines, con fundamento en la libertad de elegir.

<sup>54</sup> Martínez Terrero, José: *Teorías de la comunicación*, Universidad Católica Andrés Bello, Guayana, 2006, p. 8.

puedan servirle a este objeto.”<sup>55</sup> No obstante, este autor reconoce un límite universal a dichos derechos: el derecho de los demás.

Juan Bautista Alberdi señalaba que “...la libertad es el poder de que cada hombre está dotado por su naturaleza para ejercer todas las facultades de su ser. Es la libertad social. Pero la condición de vida de la libertad de cada hombre es la libertad de los demás... la libertad es el respeto del hombre al hombre. La libertad es poder, autoridad. Respetar la libertad de cada hombre es respetar el poder, la autoridad de cada hombre. Respetar la autoridad unida o colectiva de todos los hombres que forman una sociedad es respetar la libertad de cada uno. El que no sabe obedecer no sabe ser libre.”<sup>56</sup> Este planteamiento, aunque de clara inspiración iusnaturalista, encierra un matiz de limitación social o estatista a los derechos de libertad.

El legislador y profesor argentino Alfredo Lorenzo Palacios expresó que “la libertad no es un don que se recibe como beneficio gratuito, sino un deber que se cumple. Hemos de saber que la libertad que sólo da derechos, es absurda y peligrosa. La libertad está preñada de deberes, y para conquistar el orden, hay que establecer el equilibrio entre la autoridad y la libertad.”<sup>57</sup> Esta postura cuestiona la libertad como mera inacción del Estado, e introduce tempranamente la concepción de la interdependencia entre derechos fundamentales y deberes ciudadanos.

Para Gregorio Badeni: “La libertad es una idea global comprensiva de la actividad humana que se desenvuelve en el ámbito privado y social. Es, sustancialmente, un concepto individual que se traduce en una fuerza, en una energía que dispone el hombre para crear y ejecutar sus ideas con absoluta independencia. Para colmar sus aspiraciones y el logro de su personalidad de acuerdo con las metas establecidas en su pensamiento.”<sup>58</sup>

Esta definición, con acentuada influencia idealista, encierra un conjunto de categorías de amplio contenido axiológico. Especial mención requieren los términos “fuerza” y “energía” para “crear” y “ejecutar sus ideas”. La propia naturaleza de dichos conceptos, jurídicamente indeterminados, expresa no obstante una intencionalidad ética e ideológica, de claro sabor liberal, en cuanto a contención de una intervención estatal no deseable.

Pero el propio autor matiza su posicionamiento inicial con las siguientes expresiones:

“Ese concepto individual se proyecta sobre la vida social generando las libertades civiles y políticas que, al desenvolverse en un marco de convivencia, están sujetas a una reglamentación

---

<sup>55</sup> Echevarría Espinosa, Esteban: *Dogma Socialista*, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 1940, p. 165.

<sup>56</sup> Alberdi Aráoz, Juan Bautista: *Obras selectas*, t.XVII, p. 230.

<sup>57</sup> Palacios, Alfredo: *El delito de opinión y la tradición argentina*, Buenos Aires, 1939, p. 163.

<sup>58</sup> Badeni, Gregorio: *Tratado de Derecho Constitucional*, Tomo 1, 2da. Edición, La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 442.



razonable emanada del poder político. El concepto individual de libertad se traduce así en un valor jurídico social que la organización política debe preservar y coordinar.

Ese valor jurídico social presupone un orden normativo y una seguridad. Un orden normativo que diseñe los amplios espacios para el desarrollo armónico de las libertades individuales, y una seguridad jurídica traducida en las garantías tutelares de la actividad del ser humano.”<sup>59</sup>

Hay en la segunda parte de la reflexión de Badeni una especie de conciliación entre iusnaturalismo y positivismo jurídico, pues reconoce el papel del Estado en el establecimiento de los límites a las libertades civiles y políticas, como requisito para un adecuado desenvolvimiento del hombre en su convivencia. Aquí la seguridad jurídica y las garantías tuteladas por el poder público político evidentemente vienen de la mano de su positivación normativa.

Hay que entender cómo concibe la doctrina liberal el término libertad, incluso en sus formas teóricas más avanzadas. Al respecto refiere Robert Alexy “...para la creación de una situación de libertad jurídica, se requiere tan solo una omisión del Estado, es decir una acción negativa. Para asegurar la libertad jurídica no se requiere ningún derecho a prestaciones sino un derecho de defensa.”<sup>60</sup> Esta idea encierra dentro de sí una sutil contradicción, pues supone que la libertad solo se enmarca en la directa relación entre el ciudadano como titular del derecho-libertad y el Estado como sujeto de poder, jurídicamente obligado a la inacción y potencialmente vulnerador.

Esta tradicional división entre derechos de libertad y derechos de prestación, considera los primeros como esfera de abstención de intervención del Estado, exigibles judicialmente; mientras que los segundos son declaraciones políticas realizables según las posibilidades económicas de cada país, y nunca exigibles judicialmente. Para autores como Henry Shue y Von Hoof esta división es ficticia, y en su lugar proponen cuatro niveles de obligaciones estatales en el plexo de derechos fundamentales: una obligación de respetar, una obligación de proteger, una obligación de garantizar y una obligación de promover el derecho en cuestión.

Como plantean Abramovich y Curtis “Ninguno de estos niveles puede caracterizarse únicamente a través de las distinciones obligaciones negativas/obligaciones positivas, u obligaciones de resultado/obligaciones de medio, aunque ciertamente las obligaciones de proteger, asegurar y promover parecen envolver un mayor activismo estatal, y por ende, un número mayor de obligaciones positivas o de conducta.”<sup>61</sup> La idea planteada por los autores se centra en la unidad

---

<sup>59</sup> *Ibidem*, p. 442.

<sup>60</sup> Alexy, Robert: *Teoría de los derechos fundamentales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 215.

<sup>61</sup> Abramovich, Víctor y Curtis, Christian: *Los derechos sociales como derechos exigibles*, 2da edición, Trotta, Madrid, 2004, p. 123.

entre los llamados derechos civiles y políticos (o derechos de libertad) y los derechos económicos, sociales y culturales (o derechos de prestación).

El autor de esta investigación asume la posición que relativiza la clásica división entre derechos de libertad y derechos de prestación, pues considera que todos los derechos están relacionados entre sí, y todos requieren de una intervención del Estado, aunque con grados diferentes de intensidad. En unos debe realizar una prestación directa para que se garantice el derecho, en otros debe crear condiciones para que los derechos se puedan realizar sin trabas, o incluso intervenir con sus órganos cuando hay vulneraciones ilegítimas.

La vulneración de la libertad puede venir de cualquier órgano del Estado, individualmente considerado, o de un tercero, sea persona natural o jurídica. En este caso la libertad, para que se concrete como derecho-libertad debe suponer garantías para su titular, y estas garantías se consiguen generalmente mediante la intervención de algún “órgano de poder” del Estado, igual o diferente al ente vulnerador. De tal modo que la libertad no es solo un derecho a inhibir la intervención de ciertos poderes del Estado en una esfera particular de actuación, sino también la garantía de exigir a determinados órganos del Estado (Tribunales, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, etc.) su intervención para que otros órganos del Estado, o los terceros, dejen de intervenir en la esfera de libertad de la que se es titular.

Hay autores que han propuesto subdivisiones muy interesantes, a la hora de abordar las libertades como derechos. Manuel García-Pelayo, retomando los criterios básicos de Carl Schmitt habla de:

“Garantías de la esfera de la libertad individualista, que se dividen a su vez en: Derechos de libertad del individuo aislado; por ejemplo, la libertad de conciencia, la libertad personal, la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio. Derechos de libertad del individuo en relación con otros, como por ejemplo, la libre manifestación de opiniones, la libertad de discusión, la libertad de prensa, etc...”<sup>62</sup>

El planteamiento de García-Pelayo supone, para los derechos de libertad del individuo en relación con otros, una expresión o esfera concreta del derecho de libertad en que este no se manifiesta en una simple relación bilateral ciudadano-Estado; sino en un complejo de relaciones en que existen por lo menos tres extremos: en uno el titular del derecho-libertad de prensa, en otro un sujeto vulnerador (puede ser un órgano del Estado, una persona natural, o una persona colectiva no estatal) y en el tercero el Estado actuando a través del órgano garante del ejercicio efectivo del

---

<sup>62</sup> García-Pelayo, Manuel: *Derecho constitucional comparado*, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1984, p. 153.

derecho de libertad. Esta es una relación mínimamente triádica entre el titular del derecho de libertad-sujeto vulnerador-sujeto garante.

En este caso la libertad de prensa sería vista como una expresión de la libertad del individuo frente al Estado en su relación con terceros. Es la posibilidad que tiene el individuo en su calidad de ciudadano para hacer uso de las tecnologías de reproducción, en la producción y divulgación de informaciones y opiniones, permitidas por las autoridades y recibidas por el público. Pero la realidad mostraría rápidamente para quien es en realidad esa libertad ¿para el ciudadano común y corriente o para el ciudadano empresario en medios de comunicación de masas?

Desde posiciones más progresistas se ha criticado el hecho de que la supuesta libertad de prensa se limita a libertad de iniciativa empresarial periodística para los dueños de medios, lo que no se expresa necesariamente en la libertad de expresión y derecho de información para todos los actores de la sociedad. Este planteamiento introduce en el debate la relación entre libertad de prensa formal y libertad de prensa material, así como la potencialidad real de que la libertad de prensa propicie el desarrollo de la libertad de expresión, y por lo tanto de una sociedad verdaderamente plural e informada.

En línea con la anterior postura, María López de Ramón define la libertad de prensa como “la facultad de propagar libremente las informaciones y opiniones a través de los periódicos...”<sup>63</sup> Es significativo destacar que dicha autora concibe la libertad de prensa como un derecho fundamental, con la trascendencia que supone para el ordenamiento jurídico esta clasificación. Su definición no se concentra en la libertad empresarial para establecer periódicos, sino en la función social de estos en la difusión de información y opiniones.

Sin embargo, la propia definición de la libertad como derecho o facultad de hacer no supone un uso abusivo por su titular; la propia autora, refiriéndose al papel de los Estados en el establecimiento de los límites al ejercicio de este derecho plantea: “pese a ser plenamente reconocido por el gobierno correspondiente, en ningún caso supone un obstáculo para que éste imponga a sus ciudadanos determinadas restricciones con el fin de mantener la seguridad y el orden público fundamentales para garantizar la convivencia entre todos.”<sup>64</sup>

Lo anterior se esclarece con el doble contenido que supone la libertad de prensa como condición para que pueda desarrollarse el derecho a la información. En tal sentido expresa Javier Pérez Royo: “es un derecho doble: a comunicar libremente información y a recibir libremente

---

<sup>63</sup> López de Ramón, María: *La construcción histórica de la libertad de prensa*, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2014, p. 11.

<sup>64</sup> *Ibidem*, p.11.

información. Se trata, por tanto, de un derecho del que son titulares los diferentes medios de comunicación, es decir, los propietarios y trabajadores de los mismos, pero también todos los ciudadanos sin excepción...”<sup>65</sup> Seguidamente señala que dicha libertad es el derecho de los propietarios de los medios y sus trabajadores a comunicar libremente información, y el de los ciudadanos a recibir dicha información, también de manera libre.

Para otros autores como Carmona Díaz de León el derecho a la información comienza a configurarse después de la segunda guerra mundial, y es expresión de la evolución de la libertad de prensa, la libertad de expresión, y el reconocimiento de los derechos de los periodistas. El derecho a la información es un paso de avance, pues en realidad contiene tres tipos de derecho de naturaleza diferente: dos asociados a los sujetos que intervienen en el proceso de informar, y otro relativo al acto en sí mismo.<sup>66</sup>

En cuanto a los sujetos, el derecho a la información, en su expresión plural, contiene el derecho de los informadores, que consiste en:

“...el derecho a que su trabajo no sea censurado; a investigar y a difundir la información u opinión que tenga; a contar con instrumentos técnicos para llevar al cabo su actividad; a la transmisión íntegra de su mensaje; a tener acceso a sus fuentes; al secreto profesional; y a la cláusula de conciencia.”<sup>67</sup>

Según dicha autora, este derecho genérico contiene además, el derecho específico de los informados, consistente en el “derecho a recibir información; a seleccionar los medios por los cuales desea que esa información le sea transmitida; a la veracidad en la información; a preservar la honra y la intimidad; a requerir la imposición de responsabilidades legales; y al derecho de rectificación o respuesta.”<sup>68</sup>

Obsérvese que la autora relaciona el derecho a la información, desde la perspectiva de los informados, con el derecho a la preservación de la honra, y asociado a ello los derechos de rectificación o respuesta. Se considera correcta esta postura, pues los derechos fundamentales expresan una interrelación y progresión, de lo que se deriva que unos ayudan a configurar a otros, limitándolos, desarrollándolos o ambas cosas a la vez.

---

<sup>65</sup> Pérez Royo, Javier: *Curso de Derecho Constitucional*, MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES S.A. (Cuarta Edición), Madrid, 1997, p. 301.

<sup>66</sup> Carmona Díaz de León, Eugenia Paola: *El derecho de rectificación en México*, Tesis presentada para obtener el grado de Doctora en Derecho, México, UNAM, 2010, pp. 17 y 18.

<sup>67</sup> *Ibidem*, p. 18.

<sup>68</sup> *Ibidem*, p. 18.

Por último, la referida autora habla de los derechos asociados al acto de informar, el cual tiene carácter jurídico, e implica tanto derechos como obligaciones de periodistas y directivos de los medios. Lo anterior supone que “...en el supuesto de que se distorsione la realidad, estos sujetos están obligados a reparar los daños causados, lo que sitúa al afectado en la posición de solicitarles la aplicación de las responsabilidades ulteriores que entre otras, pueden incluir al derecho de rectificación o respuesta.”<sup>69</sup>

En el contenido de los derechos asociados al acto de comunicar, como parte del derecho a la información, se reitera el carácter configurador y por ello delimitador de los derechos de rectificación o respuesta. El planteamiento evidencia la tendencia doctrinal a considerar dichos derechos como adscriptos, es decir, derechos que surgen y se instrumentan para garantizar otros derechos.

Otro elemento a considerar es que la información que propague el medio debe cumplir un requisito: ser razonablemente veraz, pues como afirma el Tribunal Constitucional español:

“Cuando la Constitución requiere que la información sea veraz no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas, o sencillamente no probadas en juicio, cuanto estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador a quien se pueda y se deba exigir que lo que transmita como hechos haya sido contrastado con datos objetivos, privando así de la garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la comunicación, actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado. El ordenamiento no presta su tutela a tal conducta negligente ni menos a quien comunica como hechos simples rumores, o lo que es peor, meras insinuaciones insidiosas.”<sup>70</sup>

La referida sentencia (Anexo No. 1) enuncia varios elementos para considerar la existencia o no de una veracidad razonable en la información propagada por el medio: a saber, un deber de diligencia por parte del que comunica, es decir, agotar razonablemente todos los recursos y medios disponibles a su alcance para llegar a la verdad; buscar, siempre que sea posible, datos objetivos; contrastar la información con esos datos objetivos para decantar la información que pueda ser falsa.

Este deber de diligencia trata de evitar la propagación de informaciones falsas, erróneas o imprecisas; dichas informaciones, cuando se refieren a cualidades o características de las personas sobre las que se informa, pueden provocar vulneraciones ilegítimas al honor de las miasmas; y por

---

<sup>69</sup> *Ibidem*, p. 18.

<sup>70</sup> Sentencia 15/93 del Tribunal Constitucional de España, de 1993.

el impacto inmediato y masivo del medio, generar efectos irreversibles en cuanto a la consideración y estima a la que tienen derechos como ciudadanos.

También los medios difunden opiniones sobre hechos y personas, las que expresan juicios de valor sobre sus cualidades y características. Si no se garantiza que estas u otras personas presenten una opinión diferente sobre los criterios emitidos, con la misma inmediatez y masividad que garantiza el medio de comunicación, el punto de vista difundido será sesgado, y a la vez que se vulnera el honor de las personas implicadas se afecta el derecho a la información de los receptores, pues recibirán una información parcializada y no contrastada.

Los dos supuestos anteriores son típicas posibilidades de contradicción entre el derecho al honor y la libertad de prensa, en que el derecho a la información juega un papel configurador y delimitador de otros derechos. Una vez que no se ha garantizado la ponderación previa de los posibles derechos en colisión, desde previsiones pre conflictuales, se impone la solución en la vía judicial como última ratio. En ella los tribunales juegan un papel fundamental para garantizar el equilibrio entre derecho al honor y los derechos asociados a los medios de comunicación (libertad de prensa, libertad de expresión y derecho a la información), y con ello, su mayor realización posible.

### **1.3 Posibles colisiones entre el derecho al honor y los derechos asociados a los medios de comunicación: los derechos de respuesta y rectificación**

Uno de los problemas fundamentales que se presenta en la realización de los derechos fundamentales es la colisión entre conductas que expresan la materialización de un derecho y la materialización de otro; cuyo despliegue implicaría una tensión entre valores jurídicos contrapuestos, y en cuya solución uno de los dos derechos debe ceder ante el otro.

Un caso típico de colisión es el que se presenta entre el derecho al honor y los derechos asociados a los medios de comunicación, principalmente la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información.<sup>71</sup> Pero ¿Qué conductas de los medios de comunicación masiva son las que más frecuentemente provocan dicha colisión?

A los efectos de la presente investigación estos supuestos se circunscriben a aquellas situaciones en las que intervienen los medios de comunicación, como principal vehículo o soporte de divulgación de las expresiones, informaciones u opiniones potencialmente vulneradoras del honor.

---

<sup>71</sup> Balaguer Callejón, María Luisa: *El derecho fundamental al honor*, Editorial Tecnos S.A. , Madrid, 1992.

De tal manera, haciendo una deducción lógica de los supuestos generales y su integración a las características ya estudiadas de los medios masivos de comunicación, se pueden identificar tres formas concretas de vulneración o intervenciones ilegítimas en el honor:

1-la divulgación mediática de expresiones potencialmente deshonrosas,

2-la divulgación mediática de informaciones potencialmente deshonrosas, y

3-la divulgación mediática de opiniones potencialmente deshonrosas.

La resolución de estas contradicciones o colisiones depende de la postura teórica que se asuma al respecto. Para autores como Robert Alexy el análisis está sujeto a considerar si los derechos contrapuestos se encuentran regulados en una norma regla, una norma principio o una norma valor.

El autor significa una diferencia cualitativa entre reglas y principios. En cuanto a la falta de coherencia en los ordenamientos jurídicos, en el caso de los últimos, se aprecia la llamada colisión de principios, mientras que para las primeras se constata un conflicto de reglas. El método o procedimiento de solución en ambos casos es bien diferente.

Para Alexy, el conflicto de reglas solo puede ser solucionado introduciendo una cláusula de excepción, que elimina el conflicto, o declarando no válida una de las reglas<sup>72</sup>. Estas son las únicas formas mediante las cuales se puede eliminar unos juicios de deber ser contradictorios, que expresan consecuencias jurídicas diferentes, confrontadas entre sí, para un mismo supuesto jurídico, ya sea de hecho o de derecho.

Para los principios el profesor de Kiel propone otro método de solución, el cual expone de la siguiente manera:

“... Cuando dos principios entran en colisión —tal como es el caso cuando según un principio algo está prohibido y, según otro principio, está permitido— uno de los dos principios tiene que ceder ante el otro. Pero, esto no significa declarar inválido al principio desplazado ni que en el principio desplazado haya que introducir una cláusula de excepción. Más bien lo que sucede es que bajo ciertas circunstancias uno de los principios precede al otro. Bajo otras circunstancias, la cuestión de la precedencia puede ser solucionada de manera inversa. Esto es lo que se quiere decir cuando se afirma que en los casos concretos los principios tienen diferente peso y que prima el principio con mayor peso.”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Alexy, Robert: *Teoría de los derechos fundamentales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 88.

<sup>73</sup> *Ibidem*, p. 88.

Esto le permite afirmar que los conflictos de reglas se llevan a cabo y se solucionan mediante la determinación de la validez; mientras que la colisión de principios se resuelve en la dimensión del peso, es decir, determinando el de mayor peso para el caso concreto, siendo este el que debe prevalecer para dicha situación particular.

La solución en la colisión de principios viene dada por lo que Robert Alexy llama ponderación de bienes, sustentada en la “Ley de colisión”<sup>74</sup>. Esta solución se define como “...un enunciado de preferencia condicionado que, de acuerdo con la Ley de colisión, surge de una regla diferenciada de decisión”<sup>75</sup>. La colisión de principios se expresa como una relación de tensión entre intereses opuestos, y su solución consiste en ponderar cuál de los intereses, abstractamente del mismo rango, posee mayor peso en el caso concreto.

La denominada “Ley” supone el establecimiento de una relación de precedencia condicionada entre los principios en colisión. Como propone Alexy: “La determinación de la relación de precedencia condicionada consiste en que, tomando en cuenta el caso, se indican las condiciones bajo las cuales un principio precede al otro. Bajo otras condiciones, la cuestión de la precedencia puede ser solucionada inversamente.”<sup>76</sup>

El planteamiento en sí es complejo para el caso de la colisión del derecho al honor con la libertad de expresión. Si se entendiera el derecho fundamental al honor como norma principio, una de las posibilidades que da el profesor de Kiel para los derechos fundamentales, se estaría en una situación excepcional de precedencia incondicionada, siempre que el honor se conciba en el ámbito de la dignidad humana.

Alexy plantea que para todos los supuestos de determinación de la relación de precedencia deben establecerse las condiciones que determinan la regla de ponderación, lo que permite hallar la norma principio que debe prevalecer para ese caso concreto; sin embargo, advierte que la única excepción a la aplicación de la regla de ponderación es cuando uno de los principios en colisión es la dignidad humana. Esto provocaría una precedencia absoluta o incondicionada que haría prevalecer siempre cualquier derecho asociado a la dignidad humana, si es uno de los que entra en colisión.

De lo planteado se concluye que, en una colisión o conflicto de normas, en que una de las normas proteja el derecho al honor, se podrían dar tres soluciones teóricas diferentes: primero, que el derecho fundamental al honor sea considerado una norma regla de derecho fundamental, y que por

---

<sup>74</sup> *Ibidem*, p. 90.

<sup>75</sup> *Ibidem*, p. 166.

<sup>76</sup> *Ibidem*, p. 92.



lo tanto lo que pueda apreciarse sea un conflicto de reglas, que se soluciona introduciendo una cláusula de excepción, que elimina el conflicto, o declarando no válida una de las reglas.

El segundo supuesto es un conflicto o colisión de normas de derecho fundamental en que una de las normas sea de derecho al honor, y que el derecho fundamental al honor se considere una norma principio de derecho fundamental con identidad propia, no asociada a la dignidad humana. En este caso la solución sería establecer una relación de precedencia condicionada, mediante una ponderación de derechos en conflicto, para determinar qué derecho debe prevalecer en el caso concreto. Aquí son importantes las condiciones en que se desarrolla el conflicto, para la aplicación de la “Ley de ponderación”.

El tercer supuesto es un conflicto o colisión de normas de derecho fundamental en que una de las normas protege el derecho al honor, y que el derecho fundamental al honor se considere una norma principio de derecho fundamental dependiente o asociada a la dignidad humana. En este caso el principio de la dignidad humana es considerado una excepción, por lo que no se sujeta a la regla de la relación de precedencia condicionada, sino a la de precedencia incondicionada<sup>77</sup>. En este caso particular siempre el principio que debe prevalecer es el asociado a la dignidad humana. Aquí las condiciones en que se desarrolla el conflicto no son importantes, pues el principio que debe prevalecer está predeterminado.

Una apreciación integral de la regulación y protección efectiva del derecho al honor supone una visión transversal de este derecho para todo el ordenamiento jurídico, partiendo de la Constitución e irradiando a las demás ramas del Derecho. Esta visión propone que el derecho fundamental al honor pueda gozar de un desarrollo tal que se exprese en las diferentes ramas del Derecho como norma regla, como norma principio relativamente independiente y como norma principio asociada a la dignidad humana.

Sin embargo, las reglas de ponderación e inaplicación, como métodos de resolución de las colisiones de derechos tienen una limitación: son aplicables solo a colisiones en curso, en casos concretos, en que generalmente interviene el órgano jurisdiccional en la fase final del conflicto iusfundamental. Por consiguiente, su eficacia para prevenir conflictos potenciales es cuestionable.

La previsión de colisiones entre el derecho al honor y los derechos asociados a los medios de comunicación (libertad de prensa, de expresión y más recientemente el derecho a la información)

---

<sup>77</sup> *Ibidem*, p. 92.

se orienta más a estipular ciertas garantías en los ordenamientos jurídicos, mediante la instrumentación de derechos adscriptos<sup>78</sup>, en particular los derechos de respuesta y rectificación.

Pero ¿Cómo aparecen estos derechos y qué finalidad persiguen? Para algunos autores<sup>79</sup> los antecedentes hay que buscarlos en el proyecto francés de Ley de prensa de 1789, así como en las leyes de prensa francesas de 22 de marzo de 1822, de 29 de julio de 1881, y de 29 de julio de 1982, relativa a los medios audiovisuales.

Desde el punto de vista del derecho internacional el derecho de rectificación aparece, con identidad propia, en la Convención del Derecho Internacional de Rectificación de la ONU, de 16 de diciembre de 1952, y que entró en vigor el 24 de agosto de 1962. Ésta tiene como fin evitar que la difamación de personas o Estados ponga en peligro la paz y la colaboración internacional.

En tal sentido, el artículo 2.1 de dicho tratado expresa:

“...Los Estados Contratantes convienen en que, cuando un Estado Contratante alegue que determinado despacho informativo, capaz de perjudicar sus relaciones con otros Estados o su prestigio o dignidad nacionales, es falso o tergiversado y tal despacho informativo haya sido transmitido de un país a otro por corresponsales o agencias de información de un Estado Contratante o no contratante, y publicado y difundido en el extranjero, aquel Estado podrá presentar su versión de los hechos (denominada en adelante "comunicado") a los Estados Contratantes en cuyos territorios haya sido publicado o difundido. Al mismo tiempo, se enviará un ejemplar del comunicado al corresponsal o a la agencia de información interesados, a fin de que tal corresponsal o agencia de información pueda rectificar el despacho informativo de que se trate.”<sup>80</sup>

Como puede apreciarse, se trata de una variante de rectificación que trasciende a las relaciones entre los Estados, en la que intervienen agencias informativas, personas y al menos un Estado reclamante.

Autores como Carmona Díaz de León critican el carácter limitado de esta Convención, en lo relativo a las sanciones a aplicar a los Estados que no acojan la reclamación: estar sujetos a un tratamiento recíproco del Estado reclamante, estar sujetos a la elevación de un informe crítico ante

---

<sup>78</sup> Derechos que se instrumentan en el ordenamiento jurídico para garantizar otros derechos, surgen producto del desarrollo de los derechos en base al principio de progresión. Se sustenta en la teoría de los derechos fundamentales de la Ley Fundamental, de Robert Alexy.

<sup>79</sup> *Ibidem*.

<sup>80</sup> *Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación.*  
[www.unhcr.ch/spanish/html/menu3/b/i\\_ilocor\\_sp.htm](http://www.unhcr.ch/spanish/html/menu3/b/i_ilocor_sp.htm)

el Secretario General de la ONU por parte del Estado reclamante, y estar sujetos a que se tramite una demanda ante la Corte Internacional de Justicia.<sup>81</sup>

Debe destacarse que en el contexto hemisférico el primer documento que recoge de manera explícita el derecho de rectificación es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se adoptó el 22 de noviembre de 1969, y que entró en vigor el 18 de julio de 1978. Esta estipula en su artículo 14:

“1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

“2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades, legales en que se hubiese incurrido.

“3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión, tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades, ni disponga de fuero especial.”<sup>82</sup>

Los derechos de respuesta y rectificación contribuyen a prevenir posibles colisiones, o a anticipar la solución del conflicto, sin que éste tenga que llegar a la vía judicial para su resolución, como sí ocurre con las reglas de ponderación e inaplicación. Esto se debe fundamentalmente al efecto inhibitorio que puede causar en los actores de los medios conocer que existen tales derechos, y que pueden ser ejercidos contra la divulgación de informaciones falsas o imprecisas, o de opiniones no contrastadas.

De esta manera los derechos adscriptos de respuesta y rectificación se convierten en límites garantistas, ante posibles vulneraciones del honor, provocadas por abusos en el ejercicio de los derechos asociados a los medios de comunicación. El límite en este caso estaría configurado por sus enunciados efectos inhibitorios sobre la conducta de los periodistas, directivos y demás actores de los medios.

Para autores como Aguirre Nieto el derecho de rectificación es la facultad que tiene toda persona de solicitar la rectificación de hechos u opiniones que la aludan, por considerarlos inexactos y que puedan perjudicarla. Por la importancia del derecho lesionado, la inmediatez y la certidumbre son

---

<sup>81</sup> Carmona Díaz de León, Eugenia Paola: *El derecho de rectificación en México*, Tesis presentada para obtener el grado de Doctora en Derecho, UNAM, México, 2010, P. 185 y 186.

<sup>82</sup> Convención Americana Sobre Derechos Humanos. [https://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_b-32\\_convencion\\_americana\\_sobre\\_derechos\\_humanos.htm](https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm)

una exigencia por lo que se ha impuesto como visión más avanzada que la rectificación se hará en el mismo medio de comunicación, de manera gratuita para el que la solicita, y se realizará en el número o emisión más próxima y posterior a aquella que ha generado el ejercicio del derecho.<sup>83</sup>

Desde el punto de vista teórico, la tradición francesa<sup>84</sup> introduce una disquisición que todavía no se ha resuelto del todo. Ellos abordan un concepto genérico de rectificación, que luego se concreta en un derecho específico de rectificación (*droit de rectification*) y un derecho de réplica (*droit de réponse*).

El primero contiene la obligación del medio de publicar las rectificaciones hechas por los funcionarios públicos derivadas de un acto de su función; mientras que segundo es el derecho que tiene toda persona nombrada en un periódico a que se inserte su respuesta en lo referido a dicha alusión. Estas inserciones deben ser gratuitas y hacerse con la mayor celeridad. Cabe señalar que la doctrina y la legislación francesas<sup>85</sup>, para la instrumentación y ejercicio de estos derechos, no distingue entre hechos y opiniones, y sí en quienes ejercen el derecho: si es un sujeto general o un funcionario público.

La doctrina española, sin embargo, si distingue entre hechos y opiniones para determinar si se trata de una rectificación o de una réplica.<sup>86</sup> Para dichos autores, derecho de rectificación procede cuando se trata de intentar reducir la narración de los hechos a la exactitud de lo ocurrido; mientras la réplica procede cuando se intenta argüir algo contra los argumentos o las respuestas del otro.<sup>87</sup>

Esta disquisición sobre si pueden separarse o no hechos y opiniones emitidas por los medios obedece a dos posiciones teóricas: el grupo de teorías monistas, que considera inseparable hechos y opiniones, y las teorías dualistas, que consideran separable los hechos de las opiniones. Se considera el segundo grupo de teorías más adecuado al objeto que se investiga, pues permite un correcto tratamiento teórico y legal al honor, frente a posibles vulneraciones de los medios de comunicación.

---

<sup>83</sup> Aguirre Nieto, Marisa: *El derecho a la información como ciencia*, en *Derecho a la información*. Bel Mallen, Ignacio, Loreto Carredoira y Alfonso (coordinadores), Ariel, Madrid, 2003, p. 56 y 57.

<sup>84</sup> Eugene Portalis, Louis Favoreu y Olivier Beaud.

<sup>85</sup> Ley de 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa y la Ley No. 82-652 de 29 de julio de 1982 Sobre la comunicación audiovisual de la República Francesa.

<sup>86</sup> Gutiérrez Goñi, Luis: *Derecho de rectificación y libertad de información (contenidos constitucional, sustantivo y procesal de la LO 2/84 de 26 de marzo)*, J.M. Bosch Editor, Madrid, 2003, pp. 53 y 54.

<sup>87</sup> Carmona Díaz de León, Eugenia Paola: *El derecho de rectificación en México*, Tesis presentada para obtener el grado de Doctora en Derecho, UNAM, México, 2010, P. 23.

Este abordaje dualista concibe que los hechos informados por los medios deben ser veraces. A tal efecto, Apreza Salgado, coincidiendo con el Tribunal Constitucional español,<sup>88</sup> expresa que la veracidad es una cualidad de la información y, por tanto:

“...requiere que el emisor de la información compruebe la información con prudente diligencia, contrastándola con datos objetivos, de tal forma que la veracidad es sinónimo de mínimo cuidado y diligencia en la búsqueda de lo cierto, privando de la garantía constitucional al emisor que actúe con menosprecio a la veracidad o falsedad de lo comunicado, debido a que el derecho constitucional no ampara ni la información que se sabe inexacta por quien la transmite ni la difundida sin contraste alguno con los datos objetivos, evitando que el emisor transmita como hechos verdaderos simples rumores carentes de toda constatación, meras invenciones o insinuaciones.”<sup>89</sup>

Sin embargo, en el caso de las opiniones se exige que sean contrastadas, no tanto con la verdad material como con otros puntos de vista; pues aquí de lo que se trata no es tanto de la objetividad o veracidad de lo informado, como de la posibilidad de recibir otros juicios de valor, otros puntos de vista sobre la opinión publicada.

La cualidad de contrastación de las opiniones incide considerablemente en la calidad de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, pues la participación democrática “...dependerá de la información que tengan a su disposición -a fin de estar en la posibilidad de ponderar opiniones diversas y aún contrapuestas-, la cual contribuye de manera libre a la formación de un criterio propio.”<sup>90</sup> Por ello mismo, esta es una forma legítima de formarse opiniones, incluso sobre el honor de personas e instituciones.

El carácter abierto de los medios expresa una posibilidad de acceso potencialmente ilimitado de la población a la información publicada, lo que a su vez implica la irreversibilidad de un efecto mediático lesivo al honor. Esta posibilidad requiere de una garantía de respuesta rápida para atenuar tales efectos, que implica publicar con la mayor celeridad posible una respuesta a la publicación lesiva, que a su vez garantice un público similar.

La respuesta, como garantía del derecho al honor frente a los medios de comunicación, debe implicar la oportunidad de ofrecer un punto de vista diferente sobre la opinión emitida por el

---

<sup>88</sup> Sentencia 15/93 del Tribunal Constitucional de España, de 1993.

<sup>89</sup> Apreza Salgado, Socorro: *Veracidad y pluralismo informativo en el medio televisivo: una tarea pendiente*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1994. p. 27.

<sup>90</sup> *Ibidem*, p. 27.

medio, y que contribuyó o pudo contribuir a la formación de una opinión pública lesiva al honor de alguna persona o grupo de personas.

En el sentido antes señalado, el derecho a la información implica el derecho que tienen los receptores del mensaje a contar con una opinión diferente, con otro punto de vista o juicio de valor, desde la perspectiva del o de los sujetos cuyo honor fue vulnerado; así como el derecho del sujeto o sujetos, cuyo honor está en juego, a emitir su punto de vista discrepante sobre el punto controvertido, en las condiciones en que lo hizo previamente el medio. Este es el caso típico en que está presente el derecho de respuesta.

Pero el desarrollo de los medios de comunicación ha tenido un impacto significativo en los avances de la legislación y de las teorías jurídicas que fundamentan su existencia. Particular importancia reviste la aparición y posterior evolución de la libertad de prensa. La consolidación de dicha libertad marcha al paralelo, incluso en ocasiones a mayor “velocidad”, que el referido derecho al honor; como se ha dicho, ambos derechos muestran en su despliegue una especial potencialidad para entrar en contradicción.

### **Conclusiones parciales del capítulo 1**

-El derecho al honor es una institución de carácter histórico y de significado variable, que ha estado asociada al derecho que todo ser humano tiene a su consideración, estima, fama, dignidad, reconocimiento y respeto personal y social. Ha sido considerado como derecho fundamental, configurándose como honor objetivo (estima y consideración que la sociedad tiene de uno) y como honor subjetivo (estima y consideración que uno tiene de sí mismo)

-Las teorías de los efectos y las teorías normativas de los medios de comunicación llamadas de “responsabilidad”, “democrática” y “de participación comunitaria”, que han sido las más trascendentes al estudio de este objeto, justifican una regulación de los efectos lesivos de los medios, mediante la creación de límites formales, como garantías.

-El despliegue de los derechos asociados a los medios de comunicación (libertad de expresión y prensa, y derecho a la información) ha creado, históricamente, situaciones de colisión con el derecho al honor, propiciando vulneraciones a este, como la divulgación mediática de expresiones potencialmente deshonrosas, la divulgación mediática de informaciones potencialmente deshonrosas, y la divulgación mediática de opiniones potencialmente deshonrosas (derivadas de vicios de veracidad o de no contrastación), contribuyendo a formar estados de opinión injustamente lesivos al honor de personas e instituciones.

-La colisión entre el derecho al honor y los derechos asociados a los medios de comunicación se ha resuelto mediante reglas de ponderación e inaplicación, en la vía judicial, luego de la aparición del conflicto; y a través de garantías previsoras, como la instrumentación de los derechos adscriptos de respuesta y rectificación.

## **CAPÍTULO 2: PRESUPUESTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL HONOR FRENTE A LAS ACTUACIONES LESIVAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CUBA**

### **2.1 El derecho al honor en Cuba y su relación con los medios de comunicación: mirada histórica y valoración legislativa**

#### **2.1.2 El derecho al honor en Cuba y su relación con los medios de comunicación: mirada histórica**

Los antecedentes más remotos del derecho al honor en el ordenamiento jurídico cubano se remontan a los méritos que debían exhibir los primeros colonizadores para recibir a cambio derechos de posesión sobre tierras, minas e indios. El mérito, y por conducto de este el honor personal, garantizaban la adquisición de riquezas, existiendo una fuerte interdependencia entre derecho al honor y derecho de propiedad, típico de una sociedad donde convivían la tradición feudal y los nuevos valores burgueses.

Para América en general y para Cuba en particular, el descubrimiento, la conquista y la colonización significaron una segunda oportunidad para los hijos desheredados y para los representantes de las clases desposeídas de la Madre Patria. Durante la Edad Media el honor se recibía por herencia de sangre, mientras la conquista y colonización creó nuevas posibilidades para obtener victorias contra los indios y los europeos de potencias rivales, con lo que venía la fama, y con ella el engrandecimiento del honor personal, los títulos nobiliarios adquiridos y los derechos correspondientes.

En la Real cédula del repartidor de indios de 8 de mayo de 1513, emitida por el Rey de España, y que concedía a Diego Velázquez la facultad para repartir indios entre los conquistadores, se estipula la prelación en el reparto. Se favorece en orden sucesivo a los oficiales que hay en la Isla, después a los primeros pobladores y descubridores españoles, posteriormente a los que tuvieren cédulas reales de reparto, y finalmente “...á los que á vos mejor paresciere e bien visto fuere que merescen los dichos indios (sic)...”<sup>91</sup>

Como puede apreciarse en esta norma se deja a consideración del Adelantado estimar los méritos personales para el reparto de indios, luego de listar aquellas categorías de personas que la Corona desea sean priorizadas. La vinculación entre mérito personal, honor y retribución económica, a lo largo del período, va a ser una característica que trasciende la etapa colonial en Cuba.

---

<sup>91</sup> Pichardo Viñals, Hortensia: *Documentos para la Historia de Cuba. Tomo I*, Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 2000, p. 55.



En las Ordenanzas de Alonso de Cáseres, que datan de 1573, se estipulaba exponer, mediante exhibición en la picota, el honor de las personas como forma de castigar los delitos menores. Este instrumento de administración de justicia consistía en una columna erigida en lugares céntricos de las villas donde los sentenciados, tras ser azotados, eran expuestos a pública vergüenza.

La ordenanza número 40 de dicho instrumento jurídico sentenciaba: “Que el que pesare con peso ó medida falsa, por primera vez pague tres ducados, la tercera parte para el denunciador y juez, y las dos para el arca del consejo y se quiebre y ponga en la picota; y por la segunda sea esta pena doblada y esté en la cárcel diez días y por la tercera sea dado por falso (sic.)”<sup>92</sup>

En la ordenanza 59 se habla de la calumnia, pero en el sentido de eximir de responsabilidad, y por ello de la aplicación de tal pena o castigo, al estanciero o mayoral que aprehenda a “cualquier negro cimarrón ó fugitivo”, siempre que dé cuenta a las autoridades y a su verdadero amo.

Ambos ejemplos, que datan de los primeros cien años de la colonia, muestran cómo se estimaba el honor en la esfera del Derecho: primero por vía del mérito para obtener fama y riquezas; y segundo como forma de castigo, para provocar la humillación y la vergüenza, mediante el azote y la exposición pública.

En el primer proyecto de Constitución para la Isla de Cuba (1812), de Joaquín Infante, se hace alusión en reiteradas ocasiones al honor o a alguno de sus atributos esenciales, aunque esto sea de forma indirecta. En este sentido se expresan los artículos 53 y 64; el primero, en lo relativo al procedimiento para enjuiciar a los funcionarios públicos de los principales ramos del Estado y del culto, que estipulaba para iniciar proceso la necesidad de “...á lo menos quatro testigos contextes de buena reputación (sic.) ...”<sup>93</sup>

En el mismo sentido se proyecta la redacción del mencionado artículo 64, cuando regula los requisitos a cumplir por los vecinos para formar parte del jurado para iniciar causas criminales. Entre los mencionados requisitos se encuentra tener “...treinta años de edad, exéntos de crímenes, y que sean de buena fama, y sana razon (sic.)”<sup>94</sup>

En los dos artículos se aprecian formas de exteriorización del honor, verificadas en la buena reputación y la buena fama; son expresiones del honor y consideración del que goza una persona en el orden objetivo, en la esfera de las relaciones sociales. En este caso se trata del honor

---

<sup>92</sup> *Ibidem*, p. 55.

<sup>93</sup> Matilla Correa, Andry (compilador): *El Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba de Joaquín Infante. Aproximaciones histórico-jurídicas a propósito de su bicentenario*, Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y Archivo Nacional de la República de Cuba, La Habana, 2012, p. 85.

<sup>94</sup> *Ibidem*, pp. 86 y 87.

manifiesto, como requisito o condición para formar testimonio o ser miembro de un órgano de enjuiciamiento criminal. Es otra variante de como se ha recepcionado en el tracto histórico del ordenamiento jurídico cubano el honor, pero no como derecho, sino como condición necesaria o requisito procesal.

Una interesante regulación establecida en la Constitución de Infante, y que hoy es debatida e incorporada a las llamadas leyes de medios en América Latina, es la relativa a la responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente por parte de la prensa, estipulándose que en su uso no se ofenda el dogma religioso y la moral, el sistema de Gobierno, ni a los ciudadanos en particular. Esta Constitución protege, mediante una limitación al ejercicio del derecho de opinión, el derecho al honor, tanto de las personas como de las instituciones.

En el mismo proyecto de Carta Magna, en su artículo 98, se declaran “...abolidas las penas crueles é ignominiosas, sin que dexé de imponerse la de infamia en las acciones alevosas y rastreras, que subsistirá hasta rehabilitación á vuelta de una amelioracion de conducta (sic.)...”<sup>95</sup>

Este artículo estipula la prohibición de la aplicación de normas denigrantes para el honor de las personas, excepto aquellas previstas para sancionar acciones alevosas y rastreras. Se aprecia en la norma cierta sobrevivencia de la Ley del Talión o del principio de justicia retributiva, imponiendo un castigo al sujeto comisor que se identificaba con el crimen cometido; era una forma de menguar el honor de quién ofendía el honor de otro.

En la tradición constitucional cubana, a partir de 1869, también se plasman de alguna manera normas relativas al honor de las personas. En un sentido restrictivo, para evitar excesos derivados de concesiones amparadas en el honor, y en el sentido de reforzar el principio de igualdad ante la Ley, el artículo 26 de la Constitución de Guáimaro estipulaba que “La República no reconoce dignidades, honores especiales, ni privilegio alguno.”<sup>96</sup>

El derecho al honor es enfocado aquí desde la perspectiva del límite en su ejercicio; de determinar que no podía invocarse un honor especial recibido para ser acreedor de un tratamiento distinguido por parte de la Ley, que privilegiara a un ciudadano por este motivo y lo diferenciara de los demás. Esta es una exigencia para cualquier país que transite de ser colonia de una potencia monárquica a ser una república igualitaria, al menos en su expresión formal.

Fuera del ordenamiento jurídico mambí y del campo del Derecho Constitucional, el Código Penal español, extensivo a Cuba el 23 de mayo de 1879, introduce en la rama del Derecho Penal cubano

---

<sup>95</sup> *Ibidem*, p. 94.

<sup>96</sup> Pichardo Viñals, Hortensia: *Documentos para la Historia de Cuba. Tomo I*, Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana 2000, p. 390.

los delitos contra el honor. Se trata de delitos contra el honor de los funcionarios públicos, protegiéndose a través de ellos la reputación y dignidad, no tanto del funcionario como persona particular, como de la dignidad o función pública que éste representa. En este caso la especialidad del sujeto no está en quien cometió el delito, sino en el sujeto pasivo del mismo.

Aquí el bien jurídico que se protege es el desempeño adecuado de funciones públicas, en el ámbito de la administración y la jurisdicción. Ello se aprecia de la redacción del artículo 262, el que estipula que cometen desacato:

“Los que, hallándose un Secretario del Despacho ó una Autoridad en el ejercicio de sus funcione, ó con ocasión de éstas, los calumniaren, injuriaren ó insultaren de hecho ó de palabra en su presencia ó en escrito que les dirigieren, ó los amenazare”<sup>97</sup>

Es criterio del autor<sup>98</sup> del comentario al referido Código Penal, que el desacato en este artículo es una forma específica de los delitos de calumnia, injuria o amenazas, constituidos para él en razón de la persona ofendida. Luego de la emisión por el Gobernador Militar de la Orden 213 de 1900, en que se despojaba la injuria de ser perseguida de oficio, para convertirse en cuasi pública, se sucedieron dos sentencias del Tribunal Supremo aparentemente contradictorias.

La primera de dichas sentencias data del 28 de marzo de 1904. En la misma el máximo órgano jurisdiccional declaró que con la Orden Militar 213 había dejado de existir el hecho punible de la injuria contra la autoridad, que era una de las conductas que constituía el delito de desacato. La otra sentencia, de 6 de marzo de 1919, por el contrario, no encuentra abolida la injuria contra funcionario público como delito, sino que la ve regulada en el artículo 48 de la Orden Militar 213.

Los artículos del 263 al 266, del referido Código, regulan unos supuestos que muestran un agravamiento de la pena por manifestación de figuras delictivas derivadas de la forma básica. Se aprecia que lo ocurrido fue que se sacó de la regulación del desacato la figura que califica como injuria, y ésta se trasladó, luego de ser reformada la norma penal, al artículo 486, en las Disposiciones generales, quedando así:

“Nadie será penado por calumnia ó injuria, sino á virtud de querella de la parte ofendida, cuando la ofensa se dirija contra particulares, ó por denuncia de la misma si se dirige contra la Autoridad pública, corporaciones ó clases determinadas del Estado...En el primer caso el perdón de la parte ofendida extinguirá la acción penal ó pena si ya se hubiere impuesto al culpable.”<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup>Betancourt, Ángel C.: *Código Penal*, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Co., Habana, 1922, p. 176.

<sup>98</sup> Ángel C. Betancourt.

<sup>99</sup> Betancourt, Ángel C.: *Código Penal*, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Co., Habana, 1922, pp. 264 y 265.

Pero es en el Título X “De los delitos contra el honor” del referido Código Penal español, donde por primera vez y en forma sistémica se le da protección jurídica al honor y al patrimonio moral de las personas como bien jurídico. En dieciséis artículos se establecen los elementos constitutivos de los delitos de calumnia e injuria, así como las disposiciones y sanciones aplicables a cada caso.

La calumnia es definida en el artículo 471 como la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio. El delito de calumnia tiende a deshonar y desacreditar al ofendido, al igual que la injuria, pero la imputación no se origina solo por la frase empleada, ni por la intención con que ésta sea proferida o escrita, sino del hecho que concretamente se impute al ofendido, siempre que aquel sea falso y la imputación solo tenga por objeto el desacreditarlo o deshonorarlo, o tienda a ese fin.

Como afirma Ángel C. Betancourt “...para que exista calumnia no es bastante que se emplee una denominación genérica y vaga del delito imputado, sino que es preciso que se concrete y especifique cual es el hecho constitutivo del delito que se atribuye al calumniado...y que este hecho constituya un delito perseguible de oficio...y no cualquier delito...”<sup>100</sup>

Hay una particularidad en cuanto a la calumnia, cuando la imputación que se hace por el presunto calumniador consiste en acusación ante funcionario obligado por los deberes de su cargo a perseguir dicho delito. En este caso en realidad no se configura o tipifica un delito de calumnia, sino de falsa acusación, lo cual quedó refrendado por vía jurisprudencial en los fallos de 3 de junio de 1901 y de 13 de julio de 1903 del Tribunal Supremo de la República de Cuba.

El artículo 472 del Código *ut supra* mencionado regula los rangos penales aplicables en los supuestos de propagación por escrito y con publicidad, estableciendo en este caso prisión correccional en grado mínimo y medio y multas de 250 a 2 500 pesos cuando se imputare un delito grave; y de arresto mayor y multa de 125 a 1 250 pesos, si se imputare un delito menos grave.

El artículo 473 concibe una atenuación de la pena cuando no exista propagación por escrito y con publicidad de la calumnia. En este caso se estipula un rango que oscila entre arresto mayor en su grado máximo y multa de 125 a 1 250 pesos, en caso de imputación de un delito grave. Si el delito imputado es menos grave el rango penal oscila entre arresto mayor en su grado mínimo y multa de 65 a 650 pesos. La unidad de medida de los pagos previstos en estas sanciones es la actualizada luego de las reformas hechas al inicio de la República.

---

<sup>100</sup> *Ibidem*, p. 260.

La gradación de las sanciones, teniendo en cuenta la propagación y publicidad de la calumnia, y la gravedad del delito imputado, demuestra la intención del legislador de adecuar la pena al grado de afectación en el honor del calumniado. Es una manera relativamente adecuada de protección del derecho al honor, en el sentido de que prevé una aplicación ponderada del principio de proporcionalidad entre el daño causado y la pena infligida.

El artículo 474 estipula una exención de pena para el acusado de calumnia en caso de que el hecho imputado se demostrare como cierto. La norma concibe una variante de satisfacción moral para quién sea víctima de calumnia, ésta consiste en la publicación de la sentencia del tribunal actuante en caso de que el calumniado así lo pidiera. Es claro que corresponde en primer lugar al ofendido estimar la forma de reparación más adecuada a su honor, y por conducto de este a su patrimonio moral. Obsérvese que aquí se expresa un antecedente lejano del derecho de respuesta y rectificación, aunque anclado al resultado de un proceso penal, ámbito casi exclusivo de protección del derecho al honor en la historia legislativa de Cuba.

El Capítulo II, del Título X, del Código Penal que estuvo vigente en Cuba de 1879 a 1938, regula el delito de injurias; como otra figura protectora del derecho al honor en la rama del Derecho Penal. Los elementos constitutivos del delito se conforman por “...toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.”<sup>101</sup>

La propia norma enuncia taxativamente como injurias graves la imputación de un delito de los que no dan lugar a procedimiento de oficio; la de un vicio o falta de moralidad, cuyas consecuencias puedan perjudicar considerablemente la fama, crédito o interés del agraviado; las injurias que por su naturaleza, ocasión o circunstancias fueren tenidas en el concepto público por afrentosas; las que racionalmente merezcan la calificación de graves, atendiendo el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor.

El artículo 477 establece la gradación de la pena para las injurias graves hechas por escrito y con publicidad, las cuales serán castigadas con la pena de destierro en sus grados medio y máximo, y multas de 625 a 6 250 pesetas. El 478 establece una atenuación de la sanción para los casos de injurias leves, en cuyo supuesto la pena suministrada puede ser arresto mayor en su grado mínimo y multa de 325 a 3 250 pesetas.

Al igual que en el supuesto de calumnia se establece, para estos artículos, una aplicación ponderada del principio de proporcionalidad entre el daño causado y la pena infligida. Se percibe que la protección del bien jurídico patrimonio moral, y como parte especial de él el derecho al

---

<sup>101</sup> *Ibidem*, p. 261.

honor, se configuran a partir de delitos específicos con características diferenciadoras, pero que a la vez comparten semejanzas, tanto en sus elementos constitutivos, como en la forma en que se grada la pena atendiendo el grado de afectación provocado.

La norma realiza una interesante distinción en su artículo 479, al no admitir en el caso de la injuria las pruebas que confirmen la veracidad de la imputación; pero con vista a la protección del ejercicio honorable de los cargos públicos hace la excepción de admitir prueba de veracidad en caso de una imputación contra un empleado público, siempre que esta sea sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo. En este caso el acusado será absuelto si probare las imputaciones realizadas.

Esta norma refiere una especie de límite al ejercicio del derecho al honor, consistente en la protección al honor del cargo o ejercicio de funciones públicas. Se estaría, para algunos autores, en un supuesto de conflicto entre interés público e interés privado, en cuyo caso el legislador se pronunció a favor del interés público.

El Capítulo Tercero del Código plasma unas disposiciones generales que amplían los medios y formas de comisión, tanto del delito de calumnia como de la injuria. El artículo 480 incluye entre los medios de comisión de ambos delitos las alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones. El penalista español Luis Jiménez de Asúa califica la comisión de los mismos por dichos medios como “calumnia e injuria encubiertas.”<sup>102</sup>

El artículo 481 especifica cuando se considerarán realizadas por escrito y con publicidad la calumnia y la injuria: cuando se propagaren por medio de papeles impresos, litografiados o grabados, por carteles o pasquines fijados en los sitios públicos, o por papeles manuscritos comunicados a más de diez personas.

Es interesante significar que en el artículo 483 se establece una especie de antecedente de Ley de medios, que impone determinada regulación de carácter obligatorio para los directores o editores de los periódicos en que se hubiera propagado la calumnia o injurias. En este caso dichos directivos son personalmente responsables de insertar, dentro del término que establezca la Ley o decida el Tribunal actuante, la satisfacción o sentencia condenatoria, si lo reclamare el ofendido.

En el artículo 484 se establece la legitimación activa de ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos del difunto agraviado, siempre que la calumnia o las injurias trascendieren a ellos. También se establece que los herederos están legitimados para ejercer la acción penal. La Ley

---

<sup>102</sup> Jiménez De Asúa, Luis: *Derecho Penal*, Editorial Reus (S.A.), Madrid, 1924, p. 371.

también permite el ejercicio de la acción cuando la calumnia o las injurias se hayan hecho en una nación extranjera.

El último artículo del Título X determina algunos requisitos procedimentales especiales para que inicie y se extinga el proceso, incluyendo que en todo caso, cuando se trata de personas particulares, el mismo se haga mediante querrela, y que se extinguirá la acción penal o la pena si mediare perdón del ofendido para el culpable.

En el caso de que la parte ofendida sea una autoridad pública, corporación u otra persona jurídica, el proceso iniciará por medio de denuncia ante el funcionario competente; en este supuesto se considerará público el delito, por lo que solo procederá para extinguir la acción el indulto del Gobierno, o declaración, mediante auto, de extinción de la acción penal por la autoridad judicial.

Se aprecia un significativo paso de avance en el reconocimiento del derecho al honor, por la vía de su protección en sede penal. Hasta ese momento, en que dicho derecho no aparece de manera explícita recogido en ninguna norma constitucional, el derecho penal de indias tampoco lo había regulado, por lo que el Estado español en Cuba no había ejercido el *ius puniendi* contra quienes atacaban el bien jurídico “patrimonio moral” de las personas; quedando la solución de los conflictos de esta naturaleza en el plano privado, o bajo el arbitrio de autoridad administrativa, con los excesos que estas soluciones generalmente provocan.

No es hasta la Constitución de Leonardo Wood, de 20 de octubre de 1898, y puesta en vigor para regir en Santiago de Cuba y sus territorios aledaños, que se vuelve a hacer alusión al honor; en esta ocasión para estipular en su artículo segundo que nadie, por su creencia religiosa, podría ser privado de ocupar cargos de honor. El término se emplea de una forma ambigua, y este autor considera que se hizo con la intención de denotar el sentido honorable de los cargos públicos, más allá de la condición personal de la honorabilidad.

La Constitución de 21 de febrero de 1901 solo se refiere en su artículo siete al honor, cuando relaciona las causas por las que se podía perder la ciudadanía cubana, siendo una de ellas recibir empleo u honores de otro gobierno. Aquí el término honor hace alusión al recibimiento de reconocimientos, títulos nobiliarios o condecoraciones; y la prohibición se limita a que dichos honores fueran autorizados por el Senado de Cuba.

Un salto cualitativo en la protección jurídico penal al honor de las personas lo constituyó el Código de Defensa Social, de 10 de febrero de 1936. En el Título XII “Delitos contra el honor”, en tres capítulos, donde se regulan la calumnia y la injuria, se hace nuevos aportes en cuando a adecuar la protección del bien jurídico “patrimonio moral” a las nuevas condiciones de desarrollo

del Derecho Penal y de los medios de comunicación. Esto demuestra que durante mucho tiempo la protección del derecho al honor se desarrolló más en la rama penal que en otros campos del Derecho.

El artículo 506, del Código de Defensa Social, define, similar al anterior Código Penal español, que la calumnia “...es la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio.”<sup>103</sup>

Los acápites B, C y D del mencionado artículo hacen una gradación de la pena teniendo en cuenta el nivel de afectación provocado al patrimonio moral del ofendido, y particularmente a su honor. El primero de los acápites establece que si es probada la publicidad de la calumnia será sancionado el culpable con penas que oscilan entre seis meses y un día y dos años, adicionándose a ello multas de cien a trescientas cuotas.

Se establece en el acápite C que, si no se puede probar la publicidad, y por ello la afectación del derecho al honor es menor, el rango de la pena se rebaja de tres meses a un año, y multas de noventa a doscientas cuotas. El acápite D concibe una exención de responsabilidad del acusado si este puede probar la veracidad de la imputación que ha realizado.

El Capítulo II del Título XII regula el delito de injuria, definiéndolo como toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Para constatar la existencia de un delito de injuria, y por ello el ataque al honor de otra persona por esta vía, no debe tenerse en cuenta solo el significado gramatical de las palabras o frases aisladas empleadas, sino también el sentido de las mismas dentro de la conversación o escrito que se suponga injurioso.

El acápite B del artículo 507 define como injurias graves la imputación de un delito de los que no dan lugar a procedimiento de oficio; la de un vicio o falta de moralidad que pueda perjudicar considerablemente la fama o crédito social o económico del agraviado; las expresiones o acciones que por su naturaleza, ocasión o circunstancias sean tenidas en el concepto público por afrentosas; las demás expresiones o acciones que racionalmente merezcan la calificación de injurias graves, atendiendo al estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor.

Se utiliza la definición de injurias leves, mediante el método de exclusión, para todas las otras expresiones proferidas o ejecutadas en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona, y que no estén comprendidas en el listado de supuestos del acápite B del artículo 507.

---

<sup>103</sup> Martínez, José Agustín: *Código de Defensa Social vigente en la República de Cuba*, Jesús Montero Editor, La Habana, 1939, p. 390.



Los artículos 508 y 509 establecen los marcos penales para las injurias graves y leves. Las injurias graves hechas con publicidad se sancionarán con privación de libertad de un mes y un día hasta seis meses, y con destierro de un mes y un día a seis meses; y con multas que oscilan entre treinta y una y ciento ochenta cuotas. El acápite B del propio artículo estipula una atenuación de la pena si las injurias graves se causaren sin publicidad.

En cuanto a las injurias leves, cuando se causaren con publicidad, el marco sancionador es puramente económico, con multas que van de treinta y una a ciento ochenta cuotas. Las injurias leves causadas sin publicidad se sancionan en este Código con multas de cinco a sesenta cuotas.

El artículo 510 regula que al acusado de injurias no se le admitirá prueba alguna sobre la verdad o notoriedad de la misma, pero el mismo artículo establece como excepciones los casos en que la injuria se dirija contra un funcionario público, siempre que el hecho que se le atribuya se refiera al ejercicio de sus funciones; o si el injuriado demanda que el juicio se extienda a comprobar la verdad o falsedad del hecho que se le atribuya, entre otros supuestos. En estos supuestos excepcionales el acusado será absuelto si se comprueba la veracidad de las imputaciones.

Donde hace un aporte el Código de Defensa Social con relación al anterior Código Penal español (extensivo a Cuba), es en lo relativo a definir los medios de propagación de la calumnia o la injuria, definiendo entre estos "...papeles impresos, litografías, grabados o por cualquier otro procedimiento mecánico de reproducción o difusión, por carteles o pasquines fijados en los lugares públicos, por papeles escritos dirigidos a varias personas, o si se comentan ante un concurso de personas por medio de discursos pronunciados o de gritos lanzados en reuniones públicas en circunstancias que faciliten su propagación, o por medio de la prensa o de la radio.”<sup>104</sup>

Obsérvese en este caso que se incluyen en la regulación nuevos medios de propagación de la información, que no existían al momento de aprobar el anterior Código Penal, como es el caso de la radio; a la vez que el legislador utiliza fórmulas con suficiente nivel de generalidad y predicción como para que pueda preverse la aparición de nuevos aparatos tecnológicos de difusión.

El legislador del Código de Defensa social además incluye conductas que podían existir con anterioridad, pero que en las condiciones de la colonia no se manifestaban, por las limitaciones que existían a las actividades políticas y sociales de la población: es el caso de los discursos en actividades públicas.

Otra novedad de Código de Defensa Social es que reconoce la posibilidad de la vulneración al honor de entidades y personas jurídicas, algo que no estipulaba el anterior Código. En este caso se

---

<sup>104</sup> *Ibidem*, p. 392.

acoge la idea, prevaleciente en la doctrina más avanzada del momento, de que las personas jurídicas tienen todos los atributos de la personalidad jurídica, incluido el derecho al honor. Correlativamente se incluye la posibilidad de que las personas jurídicas cometan delitos de calumnia e injuria, contra las cuales el artículo 512 supone la aplicación de una sanción de clausura temporal de dichas entidades, cuyo tiempo puede oscilar entre diez y sesenta días.

El nuevo Código amplía la responsabilidad de los medios de comunicación, con la reparación del daño moral causado y el menoscabo del honor, al que tienen derecho todas las personas, ya sean naturales o jurídicas. En este sentido, si la calumnia o injuria se hubiera proferido en un periódico, los propietarios, gerentes o editores del mismo vendrán obligados a insertar, dentro del término que señale el Tribunal, y en el propio lugar y caracteres en que apareció la ofensa, la rectificación que el tribunal ordenare.

Se está garantizando con esto que el lector habitual del medio, que había leído la frase o frases calumniadoras o injuriosas, y que pudo haber bajado en su estima el honor y el patrimonio moral del calumniado, tenga la posibilidad de rectificar el criterio que falsamente se ha formado, constituyendo una especie de reparación moral del agraviado, así como una especie de tacha para la credibilidad del calumniador o injurioso.

El acápite C del artículo 513 estipula, en una ampliación de la responsabilidad de los medios de comunicación a sus directores o jefes de redacción. Al respecto el texto legal plantea:

“En los delitos de injuria o calumnia cometidos por medio de la prensa o de la radio cuando no fueren conocidos los autores, o estuvieren estos amparados por la inmunidad parlamentaria, derecho de extraterritorialidad o cualquier otro fuero, que impida su persecución, será estimado responsable el director del periódico o el jefe de redacción en su defecto, y el propietario y los operadores de la estación radiotransmisora.”<sup>105</sup>

La norma muestra la intención del legislador de superar el abuso del derecho a la libertad de prensa y a la inmunidad. En este caso particular se configura como un dique de contención contra la vulneración del honor personal y el daño al patrimonio moral, estableciendo una corresponsabilidad de los directivos de los medios en los supuestos señalados por Ley.

En el propio artículo se prevé, en caso de inmunidad del director del medio, la posibilidad de que el Tribunal actuante disponga la clausura del periódico o la estación, por un período no menor de treinta días ni mayor de un año. Al decretar tal medida el Tribunal tendrá en cuenta la

---

<sup>105</sup> *Ibidem*, p. 393.

periodicidad de la publicación, al efecto de computar como días de clausura los de la publicación únicamente.

Los artículos 514 y 515 establecen determinados requisitos que deben ser observados en los procesos por calumnias e injurias. Dentro de estos se estipula la obligación del sancionado, a cualquiera de ambos delitos, de prestar caución de no reproducir la calumnia o la injuria objeto de la sentencia dictada por el tribunal.

Se estipula, al igual que en el anterior Código, que solo procede iniciar proceso por cualquiera de los dos delitos si media una querella de la parte ofendida; que si muere durante el proceso la parte ofendida, o es víctima de estos delitos un fallecido, su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y herederos tienen legitimación activa para iniciar o continuar el proceso. A diferencia del Código Penal español, en el Código de Defensa Social, la legitimación de familiares y herederos no está limitada por la condición de que la calumnia o la injuria trasciendan al legitimado para actuar.

Otra novedad que tiene la norma es que se legitima para iniciar la querella a quien detenta la representación legal de la entidad ofendida, en el caso de las personas jurídicas perjudicadas en su honor. Esta regla complementa y sobre todo completa la cobertura y protección al patrimonio moral de las entidades, lo cual constituye un significativo paso de avance.

Otras particularidades procesales de los delitos contra el honor, al amparo de este Código, tienen que ver con que en causa criminal no se autorizará el procedimiento de calumnia o injuria hasta tanto el Tribunal no haya dictado sentencia firme, o auto de sobreseimiento libre, también firme, o de sobreseimiento provisional o de abstención.

Similar al anterior Código, se acoge un proceso de calumnia o injuria, aunque las frases proferidas o escritas se divulguen o publiquen en el exterior. Sin embargo, este tiene la particularidad de regular que para poder ser querellante tiene que tratarse de personas o entidades que residan en Cuba o que tenga aquí negocios. También se regula que la remisión de la sanción impuesta en los delitos de calumnia e injuria se configura en caso de perdón expreso del ofendido.

El Código de Defensa Social de 1936, bajo redacción y ponencia de José Agustín Martínez, consolidó en materia penal la defensa del derecho al honor, poniendo a Cuba entre las primeras naciones del momento. En esencia mantuvo la anterior regulación de los delitos contra el patrimonio moral de las personas, a través de la calumnia y la injuria, a la vez que introdujo importantes modificaciones, como considerar a las personas jurídicas como sujetos activos y pasivos de los referidos delitos. También amplió la descripción de los posibles medios de

propagación y publicidad de la ofensa, a la vez que consolidó la protección contra la vulneración al honor de los medios masivos de comunicación.

En la esfera del Derecho Constitucional vuelven a aparecer regulados los aspectos relativos al honor en el artículo 20 de la Constitución de 1940, cuando se prohíbe de manera expresa toda discriminación por motivo de sexo, raza, color o clase, y cualquiera otra lesiva a la dignidad humana. Como se ha mencionado el honor y la dignidad son conceptos íntimamente relacionados e interdependientes.

Después de esta Constitución fue que comenzó a percibirse la necesidad de la regulación del derecho al honor con carácter sistémico, como una problemática del ordenamiento jurídico en general, y no como cuestión de una rama del Derecho en particular. Sin embargo, la década del cincuenta del siglo XX en Cuba trajo un significativo retroceso en el reconocimiento y materialización del derecho al honor.

El golpe de Estado de 10 de marzo de 1952 y la sustitución de la Constitución de 1940 por los Estatutos Constitucionales, no fueron el marco propicio para avanzar en materia de derechos humanos, mucho menos en el campo particular del derecho al honor.

El triunfo guerrillero del primero de enero de 1959 trajo muchas aspiraciones y realizaciones en materia de garantías. Transformaciones en las relaciones de propiedad, la educación, la cultura, el acceso de la población a los lugares públicos, y la lucha contra la pobreza, consolidaron el honor nacional y personal de los cubanos.

Pero la situación de provisionalidad institucional y jurídica, que se extendió desde el principio hasta la década del setenta, donde sobrevivieron normas anteriores con otras de carácter emergente, no creó en el ámbito jurídico formal ni teórico doctrinal un espacio de desarrollo y actualización del derecho al honor como derecho fundamental. En materia constitucional se mantuvo en esencia lo regulado en la Constitución de 1940, ahora como Ley Fundamental de 7 de febrero de 1959; mientras que en el Derecho Penal continuaron aplicándose las regulaciones del Código de Defensa Social, particularmente en lo relativo a los delitos contra el honor.

No debe olvidarse, sin embargo, que el empeño por construir una sociedad sustentada en valores morales diferentes, donde la fuerza de la influencia política tuvo un gran peso, los conceptos sobre la moral, el honor y la dignidad sufrieron modificaciones. Cambió el contenido de estos conceptos y la percepción social sobre como asumirlos, muchos de estos cambios fueron, a juicio de este autor, positivos, mientras otros no tanto.

## **2.2 El derecho al honor en el actual ordenamiento jurídico cubano y su relación con los medios de comunicación: valoraciones**

No es hasta la década del setenta del siglo XX, como se ha dicho, que se realiza un esfuerzo decisivo en Cuba para conformar un ordenamiento jurídico, entendido a los efectos del presente trabajo como el sistema de normas, categorías e instituciones, definiciones y principios, que dan unidad estructural y funcional al Derecho en el orden formal y sustantivo; cuya estructura jurídico-formal dimana de una jerarquía piramidal encabezada por la Constitución.<sup>106</sup>

En cuanto al reconocimiento del derecho al honor la Constitución de la República de Cuba, de 24 de febrero de 1976, no lo regula de manera explícita. Sin embargo, sería un error considerar que no está implícito en el articulado de la misma. El propio preámbulo reproduce una frase martiana, acogiendo el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre como ley primera de la nación.<sup>107</sup>

Por el lugar de su ubicación, en el preámbulo de la Carta Magna, y por su forma de redacción, la frase aludida es más una declaración política que una norma jurídica; si tiene gran vuelo ideológico no expresa una adecuada potencialidad de aplicación normativa. La materialización de la frase depende más de la voluntad política de las autoridades que de la implementación de mecanismos jurídicos constitucionales y administrativos exigibles.

La Constitución de la República de 1976, sin las reformas de 1992, reconoce en los artículos 44, 64 y 123 de forma explícita algunos elementos del derecho al honor. En el artículo 44 del mencionado texto se plasma que “El trabajo en la sociedad socialista es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano.”<sup>108</sup> Aquí lo concibe como efecto o atributo del derecho al trabajo, no como un derecho en sí mismo.

El artículo 64 plantea “La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano.”<sup>109</sup> La formulación de este precepto es similar a la anterior, el honor es enfocado como derecho a defender la patria, en el mismo sentido que dicha defensa es un deber. El honor no se concibe aquí como un derecho en sí mismo, sino como forma de expresar otro derecho, que además tiene la categoría de deber, el de la defensa de la patria.

El artículo 123, al listar los objetivos de los tribunales, dejaba enunciado de forma explícita que uno de ellos era “amparar la vida, la libertad, la dignidad, el honor, el patrimonio, las relaciones

---

<sup>106</sup> Constitución de la República de Cuba de 1976, reformada en 1978, 1992 y 2002.

<sup>107</sup> *Ibidem*, p. 13.

<sup>108</sup> *Constitución de la República de Cuba*, de 24 de febrero de 1976, p. 12. (versión en formato digital)

<sup>109</sup> *Ibidem*, p. 16.

familiares y demás derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.”<sup>110</sup> Este era el artículo de la Constitución de la República que de forma más clara regulaba el derecho al honor, aunque fuera indirectamente, pues no se plasmaba en el capítulo referido a los derechos, deberes y garantías fundamentales.

Otra objeción que pudiera hacerse a la redacción del precepto enunciado es que no puede precisarse con claridad si la intención del legislador era declarar el honor como un derecho o como un “interés legítimo del ciudadano”. No obstante, las deficiencias técnico formales que pudieran haberse señalado, el autor no cree oportuno que este artículo fuera suprimido de la Constitución de la República de Cuba en la reforma de 1992, sin haber plasmado de forma explícita el derecho al honor, en el capítulo correspondiente a los derechos, deberes y garantías fundamentales.

Con la supresión de la referida norma se deja sin amparo constitucional uno de los derechos que muchas constituciones modernas contienen de manera explícita. Hay que reconocer que el artículo 123 fue transferido textualmente al artículo 4 de la Ley No. 82 “De los tribunales populares”, de 11 de julio de 1997; sin embargo, resulta cuestionable la regulación de derechos fundamentales en normas de inferior jerarquía, cuando ese derecho no está preceptuado a nivel de la Carta Magna.

En Cuba, a diferencia de los textos constitucionales antes comentados, en los que se manifiesta una abundante y variada forma de constitucionalizar el derecho al honor, no se regula de forma explícita el mismo, aunque sí está reflejado en algunos de sus preceptos.

Si la plasmación del derecho al honor en el texto no garantiza su cumplimiento, por haber una diferencia entre Constitución formal y Constitución material, su omisión tampoco garantiza que se vaya a cumplir un precepto al que ni se ofrece el amparo legal para poder exigirlo, mediante los diversos mecanismos y procedimientos de control constitucional que confieren las leyes.

Retomando el enunciado concepto de ordenamiento jurídico, el autor considera que en otras ramas del Derecho la situación de regulación del derecho al honor en Cuba ha tenido resultados más felices. Un ejemplo positivo muestra el Derecho Penal, que ha seguido una trayectoria ascendente en la protección del patrimonio moral, desde su primera plasmación sistemática en el Código Penal español de 1879.

La Ley número 62 de 1987, Código Penal vigente, recoge en su Título XII los delitos contra el honor. El antecedente inmediato de esta regulación es la Ley número 21 de 1979, la que ya

---

<sup>110</sup> *Ibidem*, p. 30.

incorporaba el delito de difamación como uno de los tipos penales configuradores de los delitos contra el patrimonio moral de las personas.

Lo que la Ley Penal cubana recoge como delitos contra el honor, en muchos países latinoamericanos se incluye dentro de la regulación de los delitos contra las personas. Al regular en un título particular estos tipos de delitos, y teniendo en cuenta las características jurídicas especiales del bien protegido, el legislador cubano ha superado en su labor codificadora a los colegas de la región, a juicio de varios autores cubanos.<sup>111</sup>

Esto no quiere decir que la Ley Penal sustantiva tenga una regulación perfecta desde el punto de vista teórico doctrinal y técnico formal, pues a ésta los mencionados autores le señalan que:

“...en el futuro la labor legislativa debería presidir la idea , en cumplimiento de los principios de legalidad, igualdad y certeza, de ajustar con mayor acierto jurídico estos tipos penales, en particular los de difamación y calumnia, atendiendo a que parte de su objetividad y finalidad jurídica la posee y da estructura a otros delitos como el desacato que prevé el artículo 144 y el de difamación de las instituciones y organizaciones de los héroes y mártires, regulado en el artículo 204 del Código Penal.”<sup>112</sup>

Los referidos autores señalan que estas no son las únicas deficiencias del Código arriba mencionado, y enuncian otras como la no incorporación de todos los delitos contra el honor en este Título, y su dispersión en otros, como los casos de los artículos 113, 144 y 204. Además, se cuestiona que al honor se le dé una doble connotación: como bien jurídico y como circunstancia modificativa de la responsabilidad penal (artículos 52-ch, 53-ñ y 320.2).

Como se ha dicho, los delitos contra el honor se regulan en el Título XII de la Ley No. 62 de 1987 (Código Penal vigente). La Ley retoma una figura delictiva de incorporación reciente a esta materia: la difamación, proveniente de la anterior Ley No. 21 de 1979. Mientras se mantienen la calumnia y la injuria, llegadas a Cuba del Código Penal español, y actualizadas en el Código de Defensa Social, se profundiza, con la regulación del nuevo delito, en la protección del patrimonio moral de las personas.

La difamación se considera cometida, según refiere el artículo 318.1, cuando “ El que, ante terceras personas, impute a otro una conducta, un hecho o una característica, contrarios al honor,

---

<sup>111</sup> Edmundo Larramendi Domínguez, Elia Esther Rega Ferrán, Mayda Goite Pierre, entre otros.

<sup>112</sup> Colectivo de autores: *Derecho Penal Especial. Tomo II*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005, p. 170.

que puedan dañar su reputación social, rebajarlo en la opinión pública o exponerlo a perder la confianza para el desempeño de su cargo, profesión o función social...”<sup>113</sup>

La particularidad del delito de difamación es que con él se protege el honor objetivo, mientras la tradición en la legislación penal cubana protegía solo el llamado honor subjetivo. Aquí se considera y valora la utilidad que tiene para la sociedad preservar la fe en las cualidades de quienes desempeñan un cargo, profesión o función social, por lo que el honor en este caso está asociado a esta actividad de gran significación social. Tanto el sujeto activo como el pasivo son sujetos generales, aunque por la redacción de la hipótesis de la norma parece que el pasivo se refiere a un sujeto especial.

La conducta antijurídica está conformada por la realización de imputaciones o acusaciones, designando en todo caso la persona contra la que va dirigida la imputación. La conducta imputada debe ser igualmente precisa, no basta con acusaciones vagas o genéricas. La revelación infamante tiene que ser hecha ante un tercero, sin que sea necesaria la presencia del ofendido. Este supuesto expresa una publicidad de las acusaciones vejaminosas y por ello la exteriorización de la voluntad delictiva a través de la palabra o la escritura.

Para que se configure el delito de difamación es necesario que lo que se impute por el sujeto comisor sea una conducta, un hecho o una característica. Esta conducta, hecho o característica puede haber acontecido en el pasado o en el presente, pero su revelación tiene que atacar directamente la estima y reputación de que goza el sujeto pasivo ante la sociedad; y como consecuencia debe “...quedar expuesto a perder la confianza de la comunidad en virtud de la probidad exigida para su cargo, profesión o función social, todo lo que pudiera originar con entidad suficiente un reproche o repulsa del ente social en cuyo entorno se realiza el ataque al bien jurídico.”<sup>114</sup>

Seguidamente se impone una sanción penal que oscila entre los tres meses y un año, o multas entre cien y trescientos pesos, o ambas. En este aspecto se aprecia la alta estimación que le confiere el Código al honor objetivo.

La doctrina, al valorar el elemento subjetivo de la difamación, acepta los diferentes grados de responsabilidad, que van desde el dolo genérico, pasando por la culpa hasta llegar a la imprudencia. Otro elemento asociado al anterior está enfocado a si existe o no la posibilidad de reparación del afectado, habiendo consenso entre los autores de que por lo extraordinariamente

---

<sup>113</sup> Ley No. 62/87 *Código Penal*, Editora del Ministerio de Justicia, La Habana, 2003, p. 134.

<sup>114</sup> Colectivo de autores: *Derecho Penal Especial. Tomo II*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005, p. 183.



sensible del bien atacado ésta solo puede ser moral, al amparo del artículo 70 del Código Penal vigente.

Los apartados dos, tres y cuatro del artículo 318 ponen límites a la aplicación de la figura básica recogida en el apartado primero. En ellos, sucesivamente, se exonera de responsabilidad al inculcado si puede probar la certeza de las acusaciones; se rechaza la admisión de pruebas por parte del inculcado si este no tenía otro designio que denigrar a la víctima; y si el imputado no prueba la veracidad de sus acusaciones, o estas son falsas, o se retracta, el tribunal lo consigna así en la sentencia, y debe dar a la víctima la debida constancia del hecho.

Algunos penalistas cubanos<sup>115</sup> han alertado que la difamación puede entrar en concurso con los delitos previstos y sancionados en el artículos 144.1.2, de denuncia o acusación falsa, y con el 154.1, de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. La propuesta de solución a este concurso es aplicar la variante de determinación de las particularidades del sujeto pasivo, en el primer caso, y de aplicación del principio de especialidad, en el segundo.

En cuanto a la regulación de los delitos de calumnia e injuria la Ley número 62 de 1987 difiere sustancialmente de la definición que se ha dado en la tradición jurídica cubana, y en el actual Código Penal español. Mientras el Código patrio define la calumnia en su artículo 319 como divulgación a sabiendas de “...hechos falsos que redunden en descrédito de una persona...”<sup>116</sup> la normativa penal española, en su artículo 205, lo conceptualiza como la “imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o de temerario desprecio hacia la verdad.”<sup>117</sup>

Los autores cubanos antes mencionados reconocen que el Código Penal patrio se aparta de la doctrina mayoritaria en la formulación del delito de calumnia. En este delito el sujeto activo puede ser cualquier persona, y la acción antijurídica consiste en divulgar hechos falsos que redunden en la pérdida del crédito público de que goza una persona. En la Ley Penal cubana se protege tanto el honor objetivo como el subjetivo.

Para la distinción de la ofensa al honor subjetivo y objetivo los autores cubanos refieren:

“Esto implica que la acción ha de tener un significado objetivamente ofensivo, es decir, ha de considerarse socialmente que deshonra, desacredita o menosprecia a otra persona. Cuando la calumnia se vierte o profiere ante el propio ofendido, es el honor en sentido subjetivo, su

---

<sup>115</sup> Edmundo Larramendi Domínguez, Elia Esther Rega Ferrán, Mayda Goite Pierre, entre otros.

<sup>116</sup> Ley No. 62/87 *Código Penal*, Editora del Ministerio de Justicia, La Habana, 2003, p. 134.

<sup>117</sup> Serrano Gómez, Alfonso Y Serrano Maillo, Alfonso: *Derecho Penal. Parte Especial*, Editorial DIKINSON, Madrid, 2006, p. 296.

autoestimación o el concepto de la propia valía el que se coloca en peligro; mientras que cuando la imputación se verifica a espaldas del destinatario de la misma, es el honor objetivo de este el vilipendiado y agraviado, esto es, el concepto público que merece en el entorno social.”<sup>118</sup>

Una condición básica y elemento constitutivo del delito de calumnia es que el hecho imputado ante tercera persona sea falso, ya sea porque el hecho no ocurrió, o porque la víctima no es la que lo realizó. Esta contradicción entre lo que pasó realmente, o lo que no pasó, y lo afirmado por el sujeto activo, es fundamental; por ello, de demostrarse que es cierta la imputación hecha por el presunto calumniador, la conducta pierde su tipicidad, por no serlo el hecho que le dio origen, constituyéndose un supuesto de inadmisibilidad de la querella.

En la valoración del elemento subjetivo del delito de calumnia es fundamental la voluntad del agente comisor de atacar la integridad moral y con ella el honor de la víctima; las expresiones del artículo 319.1 “a sabiendas” y “divulgue hechos falsos”, sugieren una actuación consciente y voluntaria de este, tendente a desacreditar y hacer perder la reputación, el honor, que ostenta la víctima. En este caso se hace clara la mala fe del sujeto activo del delito.

En el artículo 319 se prevé dos rangos sancionadores, uno general, cuya pena oscila de seis meses a dos años de privación de libertad o multa de doscientas a quinientas cuotas. Mientras en el apartado segundo se concibe una atenuación de la pena para el culpable que reconoce la falsedad de sus imputaciones y se retracta de ellas ante el Tribunal; en este caso la pena oscila de tres meses a un año, o multa de cien a trescientas cuotas. Se estipula además que el Tribunal debe dar a la víctima la constancia de la retractación.

El Código Penal español concibe la calumnia, a diferencia del cubano, como una modalidad agravada de la injuria, pues los hechos que se tipifican como delitos responden a un especial rechazo por parte de la sociedad, lo que proviene de la peligrosidad social del hecho.

En cuanto a la pena por calumnia el rango sancionador que prevé el Código Penal español para su figura agravada (con publicidad) es similar al estipulado por el Código Penal cubano, sin la atenuación del 319.2: “prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses.”<sup>119</sup>

No obstante, debe reconocerse que en el caso de la Ley Penal de Cuba, ni en la difamación ni en la calumnia se exige, como elemento constitutivo de la figura agravada, que los hechos divulgados sean constitutivos de delitos, como si lo comprende la mencionada Ley española. El agravamiento de la pena en la normativa penal cubana va determinado básicamente por el conocimiento del

---

<sup>118</sup> Colectivo de autores: *Derecho Penal Especial. Tomo II*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005, pp. 187 y 188.

<sup>119</sup> Serrano Gómez, Alfonso Y Serrano Maillo, Alfonso: *Derecho Penal. Parte Especial*, Editorial DIKINSON, Madrid, 2006, p. 296.

agente comisor de la falsedad del hecho imputado, y no por la gravedad de la imputación, como parece ser la razón del agravamiento de la sanción penal en el Código español.

La injuria, como delito contra el honor, aparece regulada en el Código Penal cubano en el artículo 320.1., donde se estipula que “El que, de propósito, por escrito o de palabra, por medio de dibujos, gestos o actos, ofenda a otro en su honor, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas.”<sup>120</sup>

El enfoque de los autores cubanos<sup>121</sup> en cuanto a la injuria es que éste es un delito de conducta genérica contra el honor, y que se diferencia de la difamación y de la calumnia de que lo atacado es el honor subjetivo, el concepto y estima que tiene la persona de sí mismo, y no el honor de que goza el sujeto ante la sociedad, en cuyo caso sería el honor objetivo.

En el caso del delito de injuria se requiere de tres elementos: “el primero objetivo, representado por las expresiones proferidas o acciones ejecutadas; el segundo, de marcado signo subjetivista, representado por el *animus injuriandi*, elemento subjetivo del tipo; y el tercero, relacionado con la valoración de la magnitud de la ofensa que sirve de medida para los efectos punitivos.”<sup>122</sup>

Como puede apreciarse en los tres casos señalados de delitos contra el honor, la protección del patrimonio moral de las personas en Cuba está parcialmente garantizada, a partir de que el Código Penal vigente lo establece, aunque en las disposiciones complementarias del Título XII estipule que los delitos de calumnia e injuria solo son perseguibles en virtud de querrela, y que en la difamación se exija la denuncia de la parte ofendida; máxime cuando el derecho al honor no está reconocido como derecho fundamental, con identidad propia, en la Constitución de la República, y en el resto del ordenamiento jurídico no tiene la amplitud regulatoria que debería.

Asumiendo el análisis de la regulación del derecho al honor en el ordenamiento jurídico cubano, en otra rama del Derecho que tiene presencia es en la Civil. La Ley número 59 de 1987, Código Civil de la República de Cuba, regula en su Libro Primero, Título Segundo, Sección Cuarta, los llamados derechos inherentes a la personalidad. En este aspecto establece en su artículo 38 que:

“La violación de los derechos inherentes a la personalidad consagrados en la Constitución, que afecte el patrimonio o el honor de su titular confiere a éste o a sus causahabientes la facultad de exigir:

a) el cese inmediato de la violación o la eliminación de sus efectos, de ser posible;

---

<sup>120</sup> Ley No. 62/87 *Código Penal*, Editora del Ministerio de Justicia, La Habana, 2003, p. 135.

<sup>121</sup> Edmundo Larramendi Domínguez, Elia Esther Rega Ferrán, Mayda Goite Pierre, entre otros.

<sup>122</sup> Colectivo de autores: *Derecho Penal Especial. Tomo II*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005, pp. 187 y 191.

- b) la retractación por parte del ofensor; y
- c) la reparación de los daños y perjuicios causados.”<sup>123</sup>

La Ley Civil sustantiva reconoce el derecho al honor, pero por vía indirecta, pues remite a los derechos inherentes a la personalidad consagrados en la Constitución, en cuyo articulado no aparece ninguno que consagre de forma expresa el derecho al honor; luego ella asume el honor como un atributo que puede ser afectado, junto al patrimonio, de cualquier titular de los derechos constitucionales.

Esta formulación no deja claro si el honor es reconocido como un derecho por el Código Civil o si es un simple atributo que debe ser afectado para conceder el derecho del titular a emplear la facultad de exigir cualquiera de los medios para el cese de violaciones de derecho y sus formas de reparación, previstos en los incisos a, b y c del propio artículo 38. Una forma de superar esa ambigüedad es plasmar de forma amplia, y a la vez precisa, el derecho al honor en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico cubano.

Un ejemplo de la trascendencia práctica que tiene una adecuada regulación del derecho al honor es la Sentencia 697 de nueve de noviembre de 2002<sup>124</sup>, pronunciada por la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, considerada hasta hoy la primera y única emitida por los tribunales cubanos en la materia. El caso se suscita cuando un profesional de las Ciencias Médicas presenta a casación una sentencia del Tribunal Provincial de Ciudad Habana, que había decidido una demanda suya contra una periodista que supuestamente había omitido información sobre la participación de dicho profesional médico en una entrevista relativa a un premio que éste había obtenido.

Aunque en dicha Sentencia se reconoce por primera vez, fuera de la jurisdicción penal, la posibilidad de protección civil del derecho al honor en Cuba, y el resultado final de la *litis*, contenido en la sentencia, parece correcto, lo que constituye un paso de avance; la argumentación jurídica del caso parece más resultado de la experiencia de los jueces y de su sentido de justicia, que de una adecuada interpretación de la legislación aplicable al caso. A lo anterior se suma una pobre utilización de las reglas de ponderación en caso de derechos en colisión, cuando uno de esos derechos es el honor y el otro pertenece al catálogo de derechos asociados a los medios de comunicación.

---

<sup>123</sup> Ley No. 59/87 *Código Civil*: Editora del Ministerio de Justicia, La Habana, 2003, p. 20.

<sup>124</sup> Sentencia 697 de 9 de noviembre de 2002, de la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba.

Para solo hacer una referencia a como se ha solucionado esto en otras latitudes, en el ordenamiento jurídico español se consagra el derecho al honor, con identidad propia, en el artículo 18 de la Constitución, a la vez que se protege en el Código Penal en el Libro II, Título XI, mediante el castigo de los delitos de calumnia e injuria.

Por si esto fuera poco, y dándole un carácter verdaderamente sistémico a la institución, el Código Civil español acoge medios de protección para la reclamación en favor del honor, mientras que para fortalecer este derecho en sede Civil se aprobó el 5 de mayo de 1982 la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Otra carencia que tiene el ordenamiento jurídico cubano en materia de protección del derecho al honor frente a los medios de comunicación es la ausencia de regulación jurídica de los derechos adscriptos de respuesta y rectificación. La doctrina contemporánea ha presentado la regulación de dichos derechos como la principal garantía de protección del derecho al honor frente a posibles vulneraciones de los medios de comunicación; la recepción legislativa de dichos derechos se ha extendido a países tan diversos como Francia, Alemania, España y México; y más recientemente se han instrumentado en las leyes de prensa, de medios, o de responsabilidad de medios de países como Venezuela, Ecuador, Argentina y Brasil.

Se puede apreciar que dentro del gremio de periodistas cubanos se ha percibido la necesidad de regular estos derechos. Ejemplo de lo planteado se evidencia en el Código de Ética del Periodista, aprobado en 2008 por la UPEC, ratificado y ampliado en el II Pleno del Comité Nacional de dicha organización el 11 de enero de 2014 (Anexo No. 2). Este Código en su artículo 13 dispone:

“El periodista debe rectificar públicamente los errores difundidos que así lo requieran y sean imputables a su trabajo. La dirección del órgano de prensa tiene derecho a decidir sobre si procede o no la rectificación pública y en qué forma realizarla.”<sup>125</sup>

Aunque significa un paso de avance, que muestra la sensibilización de los profesionales del periodismo con la necesidad de regular los derechos referidos, es extremadamente limitado. En primer lugar, restringe su aplicación a los afiliados a la UPEC; es un Código de Ética, no una disposición normativa que cuente con el respaldo coactivo del Estado; técnicamente está mal concebido, pues no se enfoca como un derecho que le asiste al afectado en su honor por la información errónea divulgada, sino solo un deber ético del periodista. La competencia sobre la decisión final relativa a la publicación o no de la rectificación se deja en manos de la dirección del

---

<sup>125</sup> Código de Ética del Periodista, consultado en <http://www.cubaperiodistas.cu/upec>, el 5 de abril de 2017.

órgano, convirtiéndola en una “obligación” cuestionable, por lo que la plenitud de la garantía se ve socavada.

De similar manera ocurre con el derecho de respuesta, al respecto refiere el artículo 25 del mencionado Código:

“El periodista puede ejercer el derecho de réplica sobre alusiones a su trabajo o persona publicadas en la prensa. Tiene, además, el derecho de publicar la respuesta en el mismo órgano de prensa donde se origina la polémica o, de lo contrario, en cualquier otro medio de comunicación del país.”<sup>126</sup>

Una limitación de este tipo de “respuesta” es que solo la puede ejercer el periodista, en relación a alusiones hechas a su trabajo o persona. No aclara si las alusiones hechas a su persona solo se limitan a cuestiones relativas a su desempeño profesional, o se refiere a cualquier tipo de alusión personal, lo cual parece poco lógico.

Ya en la realidad cubana se han suscitado hechos con los medios de comunicación donde se percibe la necesidad de una adecuada regulación de los derechos de respuesta y rectificación. Un ejemplo de ello es un artículo de opinión publicado en el periódico Trabajadores del 11 de mayo de 2015, titulado *Cementerio de libros* (Anexo No. 3.1). En el mismo el periodista combina datos y valoraciones personales sobre la inadecuada gestión de un almacén de libros por la Universidad de Pinar del Río, utilizando una única fuente de información: el almacenero del lugar.

Dicho artículo suscitó en la web del propio periódico Trabajadores, bajo el título *Cementerio de libros en la Universidad de Pinar del Río*, una amplia crítica a la dirección de la mencionada Universidad (Anexo No. 3.2), que incluyó ofensas a su Rector, al Consejo de Dirección, a los administrativos de la institución y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas; pidiendo para dichos funcionarios un proceso penal.

La respuesta de la Universidad, aunque se envió al otro día, nunca fue publicada de manera íntegra; solo se publicaron tres fragmentos en el periódico Trabajadores del primero de junio de 2015 (Anexo No. 3.3), cuatro ediciones después, donde continuaba predominando las valoraciones del periodista. Se violaron aquí los requisitos de inmediatez e integralidad de publicación de la respuesta, ampliamente reconocidos en la doctrina y en la legislación comparada. Como plantea Javier Cremades en relación a la responsabilidad del medio: “...su

---

<sup>126</sup> Código de Ética del Periodista, consultado en <http://www.cubaperiodistas.cu/upec>, el 5 de abril de 2017.

obligación se reduce a publicar o divulgar la rectificación con una relevancia semejante a aquella, sin comentarios ni apostillas.”<sup>127</sup>

Otra situación similar se presentó con una carta publicada en la página de opinión del periódico Guerrillero del 21 de abril de 2017, titulada *Inconformidad con diploma de graduación* (Anexo No. 4.1), la que generó una respuesta inmediata del Rector de la Universidad de Pinar del Río, que se publicó tres ediciones después, el 12 de mayo de 2017 (Anexo No. 4.2). En este caso se aprecia, al igual que en el anterior, el incumplimiento de los requisitos de la respuesta y la rectificación, que incluyen la publicación inmediata e íntegra de la respuesta o rectificación, sin comentarios ni apostillas.

Los directivos de ambos medios defendieron sus posiciones, planteando que tenían hasta sesenta días para publicar las respuestas, plazo que al parecer toman del inciso r) artículo 52, del Decreto Ley 67 de *Organización de la Administración Central del Estado*, de 19 de abril de 1983<sup>128</sup>; éste está concebido para regular la estructura y funcionamiento de los órganos y organismos de la Administración Central del Estado, y no para la actividad de los medios de comunicación. A lo anterior hay que adicionar que ese plazo no se corresponde con el que recomiendan en la actualidad la doctrina y el derecho comparado para el ejercicio de los derechos de respuesta y rectificación.

Esto demuestra que, pese a su realización material en favor del derecho al honor, el ordenamiento jurídico cubano presenta carencias en su reconocimiento, por lo que no goza de identidad propia, y de la amplitud y profundidad que requiere en dicho ordenamiento, sin la instrumentación de garantías sustantivas y procesales, como los enunciados derechos adscriptos de respuesta y rectificación. El ejemplo de otras naciones, sin que implique una imitación mecánica, puede servir de inspiración para hacer las transformaciones técnico jurídicas requeridas, a favor de un funcionamiento armónico de nuestro derecho y del sistema político de la sociedad.

### **2.3 El derecho fundamental al honor: presupuestos para su garantía en Cuba**

Como se ha explicado, en el campo jurídico se emplea idénticamente, o al menos en sentido semejante, los términos derechos constitucionales, derechos humanos y derechos fundamentales. Sin embargo, el autor considera más correcto el empleo del término derechos fundamentales, en lo relativo a su objeto de investigación.

---

<sup>127</sup> Cremades, Javier: *Los límites a la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español*. Editorial La Ley-Actualidad, Madrid, 1998, p.135.

<sup>128</sup> Decreto-Ley No. 67 de Organización de la Administración Central del Estado, de 19 de abril de 1983.



El autor asume que no todos los derechos constitucionales tienen el carácter de fundamentales; del mismo modo en que todos los derechos son humanos, incluso si el objeto de protección fueran los animales o la “madre” tierra, pues estos derechos solo tienen sentido jurídico en una dimensión antropocéntrica, preservando algo para el bien del Hombre.

Valdés Díaz concibe los derechos subjetivos de la personalidad “...como el poder jurídico o el conjunto de facultades conformadoras de una unidad que un ordenamiento jurídico otorga a una persona, a la que por ello se le permite un determinado comportamiento o se le concede la oportunidad de exigir de otra una prestación o una conducta debida, siempre para la consecución de ciertos fines lícitos.”<sup>129</sup>

Parte de la doctrina cubana se refiere a una posición teórico doctrinal que “...concibe el honor desde un punto de vista cultural, como el resultado del juicio de los miembros de la comunidad sobre el comportamiento de una persona con relación a sus deberes o como derecho coincidente con la dignidad propia de la condición humana, en virtud de la cual todos los seres humanos gozan de la facultad de ser respetados por los demás.”<sup>130</sup>

Una interesante posición relativa a la definición de los derechos fundamentales es la asumida por el citado Pérez Royo, quien los define como “...los derechos naturales democráticamente constitucionalizados acompañados de las notas distintivas de eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, indisponibilidad para el legislador, contenido esencial, control judicial y control de constitucionalidad...”<sup>131</sup>

La potencialidad de la definición de Pérez Royo estriba en poder identificar los requisitos de fundamentalidad de un derecho para poder considerarlo en el catálogo de los derechos fundamentales. Pero esta postura también tiene sus limitaciones, pues restringe el carácter de fundamentales solo a aquellos derechos cuyas garantías aparecen positivadas en el ordenamiento jurídico.

Para Villabella Armengol los derechos fundamentales son aquellos dentro de los mismos derechos constitucionales y humanos, que además de positivarse han logrado que se les instrumenten vías garantistas seguras para su defensa e implementación.<sup>132</sup>

---

<sup>129</sup> Valdés Díaz, Caridad Del Carmen: *Derecho Civil Parte General*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005, p. 134.

<sup>130</sup> Colectivo de autores: *Derecho Penal Especial. Tomo II*, Editorial Félix Varela, La Habana: 2005, p. 171.

<sup>131</sup> Pérez Royo, Javier: *Curso de Derecho Constitucional*, MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES S.A. (Cuarta Edición), Madrid, 1997, p. 278.

<sup>132</sup> Villabella Armengol, Carlos: *Los derechos humanos. Consideraciones teóricas de su legitimación en la Constitución cubana* en Prieto Valdés, Martha *Selección de textos constitucionales. Primera Parte*, ENPES, La Habana, 1991, p. 91.



Las garantías formales no deben ser entendidas como requisitos previos, para reconocer la fundamentalidad de un derecho, sino presupuestos de su mayor realización, y particularmente de su protección. A los efectos de esta investigación se consideran derechos fundamentales aquellos que son inherentes a la condición humana, y que expresan las conquistas del hombre, como parte del progreso de la humanidad.

A los efectos de la protección del derecho al honor frente a los medios de comunicación se considera esencial el planteamiento de Pérez Hernández y Prieto Valdés, cuando expresan:

“La inclusión de los derechos en el texto constitucional no puede considerarse una concesión de facultades que hace el Estado a los individuos; ha de ser una expresión del alcance que tiene el hecho de que sea el pueblo el titular de la soberanía y del resultado de conquistas democráticas.”<sup>133</sup>

Este planteamiento supone asumir como presupuesto de una adecuada protección del derecho al honor frente a los medios de comunicación su carácter de derecho fundamental; como expresión de la voluntad del titular de la soberanía, el pueblo, que en su condición de ciudadano sería el máximo interesado en garantizar su consideración y estima frente a la sociedad.

También supondría una conquista democrática, que pondría al ordenamiento jurídico cubano a la altura de los más avanzados del mundo, plasmando con rango constitucional un derecho tan sensible a la condición humana, expresión del reconocimiento de la dignidad del individuo.

La regulación explícita del derecho al honor en la Constitución, sería expresión del compromiso del Estado por proteger, con carácter supremo, la consideración y estima de los ciudadanos e instituciones; haciéndolo prevalecer sobre conductas potencialmente vulneradoras de la condición humana, como la divulgación de informaciones erróneas o inexactas, o la emisión de opiniones unilaterales, que contribuyan a formar estados de opinión injustos sobre dichos ciudadanos e instituciones.

Claro que la regulación explícita del derecho al honor en la Constitución no supone su prevalencia ilimitada sobre otros derechos de igual rango, como el derecho a la información, pues no existen derechos fundamentales superiores a otros con carácter absoluto. Sin embargo, esta plasmación si supondría la posibilidad de aplicar reglas de ponderación e inaplicación en caso de colisión, algo

---

<sup>133</sup> Pérez Hernández, Lissette y Prieto Valdés, Martha: *Los derechos fundamentales. Algunas consideraciones doctrinales necesarias para su análisis*, en Pérez Hernández, Lissette y Prieto Valdés, Martha (compiladoras), *Temas de derechos constitucional cubano*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2000, p. 303.

imposible de realizar si fuere considerado un derecho ordinario, supuesto en el que estaría condenado de antemano a resistir todo tipo de vulneraciones.

Pero, aunque no es adecuado condicionar el reconocimiento de fundamentalidad de un derecho a la positivación de determinadas garantías formales, estas son expresión del compromiso de una sociedad con la realización de un derecho fundamental. También constituye un marco legal adecuado para la mayor realización de dicho derecho en el plano material.

A tono con lo anterior, se coincide con las citadas Pérez Hernández y Prieto Valdés, cuando plantean:

“No basta con el simple reconocimiento legal de los derechos. Su ejercicio reclama el establecimiento de condiciones, instituciones y mecanismos que propicien la realización efectiva. En este sentido, es válido afirmar que el ejercicio y disfrute de los derechos requieren de garantías.”<sup>134</sup>

Las autoras mencionadas proponen una clasificación de garantías de los derechos fundamentales que son plenamente válidas para la propuesta que se realiza.<sup>135</sup> Por ello se considera que para la adecuada protección del derecho al honor, como derecho fundamental, frente a los medios de comunicación, es necesario concebir garantías en dos sentidos: para el ejercicio real del derecho, y para su defensa. En el ordenamiento jurídico cubano ambos tipos de garantías son insuficientes o nulas.

La postura de la constitucionalista española Balaguer Callejón en su obra *El derecho fundamental al honor*, junto a la posición de Pérez Royo sobre los requisitos de fundamentalidad de los derechos, la de Robert Alexy sobre la ponderación de derechos en colisión, y las de Carmona Díaz de León relativas a los derechos de respuesta y rectificación como garantías del derechos al honor frente a los medios de comunicación, se consideran las bases teóricas foráneas que fundamentan los presupuestos de esta propuesta.

A los anteriores se suman los aportes de los autores cubanos Villabella Armengol, Pérez Hernández y Prieto Valdés sobre la pertinencia de la constitucionalización de los derechos fundamentales, y las pautas de Álvarez Tabío Albo para solucionar los enfrentamientos entre los derechos de la personalidad y las libertades de expresión e información.

---

<sup>134</sup> Pérez Hernández, Lissette y Prieto Valdés, Martha: *Los derechos fundamentales. Algunas consideraciones doctrinales necesarias para su análisis*, en Pérez Hernández, Lissette y Prieto Valdés, Martha (compiladoras), *Temas de derechos constitucional cubano*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2000, p. 304.

<sup>135</sup> *Ibidem*.

La protección del derecho al honor frente a los medios de comunicación en Cuba debe concebirse bajo los siguientes presupuestos:

*1-Reconocimiento constitucional del derecho al honor.* Supone su explícita plasmación en el capítulo contentivo de los derechos, deberes y garantías fundamentales. Ello supone entenderlo como facultad inherente de todo hombre a ser considerado y estimado por la sociedad, así como su derecho a la autoestima; sin admitirse vulneraciones ilegítimas a esta consideración derivadas de divulgación de informaciones erróneas o imprecisas, o de opiniones unilaterales.

Como plantean las mencionadas autoras, esto permite la realización de la dignidad plena del hombre para el desarrollo de su personalidad.<sup>136</sup> Esta garantía debe ser extensiva a las personas jurídicas cuyo reconocimiento del honor es inherente al fin para el que han sido constituidas.

*2-Condicionamiento material para la realización del derecho al honor.* En el caso concreto de Cuba supondría la creación un órgano estatal como agente regulador, o la asignación de esta función a instituciones ya existentes, estatales o no (ICRT, ICAIC, UPEC, etc.), pero con mandato estatal para supervisar lo dispuesto en materia de protección del derecho al honor frente a los medios de comunicación, previo la apertura de la resolución del conflicto a la vía judicial. Este presupuesto implica también aportar recursos que propicien el ejercicio de dicho derecho.

*3-Adopción de leyes de desarrollo para la protección del derecho al honor.* Este presupuesto supone concebir en leyes, como las leyes de prensa, de responsabilidad de medios, o de protección civil del honor, las pautas regulatorias de la protección del derecho al honor frente a posibles vulneraciones de los medios de comunicación. Implica la regulación de los contenidos propios de cada derecho implicado en las situaciones de potencial vulneración (derecho al honor, libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la información y derechos adscriptos de respuesta y rectificación); así como las condiciones jurídicas para su ejercicio, y los límites que el legislador impondrá a dichos derechos.

Otra idea de la teoría de los derechos fundamentales que este autor considera válida, a los efectos de su objeto de investigación, es la composición que propone Robert Alexy para las normas de derecho fundamental. Este plantea que dichas normas se encuentran formadas por reglas, principios y valores.

Sobre el carácter de las reglas y principios como elementos estructuradores de las referidas normas expone:

---

<sup>136</sup> *Ibidem.*

“Tanto las reglas como los principios son normas porque ambos dicen lo que debe ser. Ambos pueden ser formulados con la ayuda de las expresiones deónticas básicas del mandato, la permisión y la prohibición. Los principios, al igual que las reglas, son razones para juicios concretos de deber ser, aun cuando sean razones de un tipo muy diferente. La distinción entre reglas y principios es pues una distinción entre dos tipos de normas.”<sup>137</sup>

Pero, ¿qué valor real tiene para el derecho al honor la distinción entre reglas y principios como tipos diferentes de normas de derecho fundamental? La respuesta a esta interrogante parte de la propia argumentación de Alexy.

Dicho autor defiende la idea de diferenciar las reglas y los principios como tipos distintos de normas de derecho fundamental; en primer lugar, por los grados diferentes de generalidad que expresan, atribuyendo a las reglas comportamientos debidos específicos (se cumplen o no), mientras que a los principios le atribuye grados de cumplimiento más generales (se cumplen en diferentes niveles). Esto es lo que él llama “mandatos de optimización”.<sup>138</sup>

En base a los planteado por Alexy, se considera que, en el ordenamiento jurídico cubano, para la protección del derecho al honor, frente a posibles vulneraciones de los medios de comunicación, es preciso concebir la existencia de normas reglas, normas principios y normas valores.

Las normas reglas deben regular, con sentido preciso, que se permite, que se prohíbe y que se ordena en materia de derecho al honor, en su relación con los derechos asociados a los medios de comunicación. Contar con este tipo de normas en la Constitución y en las leyes de desarrollo es fundamental para la regulación de los derechos adscriptos de respuesta y rectificación, sobre los que se abundará en el próximo epígrafe.

Por su parte las normas principios y normas valores deben expresar determinados grados de realización del derecho a que se aspira, lo cual es sumamente importante para poder aplicar la ponderación y las reglas de inaplicación ante situaciones de colisión de derechos de naturaleza potencialmente contradictoria, como el derecho al honor y los derechos asociados a los medios de comunicación (libertad de prensa, libertad de expresión y derecho a la información).

A los presupuestos generales para concebir el derecho al honor como derecho fundamental, debe agregarse otros presupuestos derivados, ampliados y contextualizados a Cuba, y provenientes de

---

<sup>137</sup> Alexy, Robert: *Teoría de los derechos fundamentales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 83.

<sup>138</sup> *Ibidem*, pp. 86 y 87.

las posturas teóricas de Pérez Royo y Balaguer Callejón sobre las garantías de los derechos fundamentales<sup>139</sup>:

*1-Eficacia directa.* Quiere decir que basta con su plasmación constitucional para que sea aplicado, aún si no existieran leyes de desarrollo, sustantivas o adjetivas. Su mero enunciado normativo en la Constitución obliga a las autoridades a aplicarlo, y a los tribunales a garantizarlo, sin que la ausencia de procedimientos explícitos pueda alegarse para no observar su cumplimiento.

*2-Vinculación de los órganos y organismos de poder a todos los niveles.* En relación con el anterior, hace alusión a que los órganos y organismos de poder o autoridades que ejercen funciones, sean ejecutivas, legislativas o judiciales, y a todos los niveles (nacional, provincial, municipal) se encuentran obligados a cumplir y hacer cumplir los derechos fundamentales, en particular el derecho al honor en situación de vulneración; cada uno desde la esfera de sus respectivas competencias. Este planteamiento trae una segunda lectura, que complejiza la perspectiva de los derechos fundamentales, más allá de la tradicional división metodológica en derechos de libertad, derechos de prestación y derechos de solidaridad.

En principio supone una obligación de protección por las autoridades, frente a agresiones de las propias autoridades y de terceros. De tal manera, quien sea titular de un derecho fundamental, sea de naturaleza esencialmente libertaria o prestacional, siempre tendrá el derecho de exigir a los órganos y organismos de poder acciones concretas para su protección: a las autoridades ejecutivas protección administrativa, sea policial, de facilitación de recursos o atención especializada; a las autoridades legislativas la elaboración de leyes de desarrollo, sustantivas o adjetivas, que permitan garantizar el derecho fundamental mediante la creación de los respectivos derechos adscriptos; y a las autoridades judiciales la impartición de justicia ante las vulneraciones del propio Estado o de terceros.

*3-Reserva de ley.* Supone que las regulaciones al ejercicio de los derechos fundamentales, y como parte de ellos el derecho al honor, deben ser decididas por el órgano de Estado con más alta legitimidad para ello: el Parlamento, o por quién ejerza la máxima función legislativa. Solo mediante ley se pueden configurar el alcance y los límites de los derechos fundamentales, y nunca mediante reglamento administrativo.

Esta intangibilidad legislativa garantiza una conexión relativamente directa entre la voluntad de los titulares de los derechos fundamentales y los legisladores, evitando al máximo las

---

<sup>139</sup> Pérez Royo, Javier: *Curso de Derecho Constitucional*, MACIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES S.A., (cuarta edición), Madrid, 1997 y Balaguer Callejón, María Luisa: *El derecho fundamental al honor*, Editorial Tecnos S.A., Madrid

arbitrariedades típicas de los vaivenes políticos de los funcionarios ejecutivos electivos; o la desconexión tradicional entre los ciudadanos y los funcionarios administrativos de carrera que, acceden al cargo por concurso o designación.

Se ha planteado que en un sistema sustentado en la unidad de poderes no procede observar este requisito de fundamentalidad, pues es exclusivo de la “división” de poderes. A juicio de este autor ese planteamiento no tiene fundamento, pues hasta en los sistemas de más alta “concentración” de facultades siempre se aprecia una división de funciones, en que la facultad de emitir leyes se atribuye a órganos colegiados, mientras que los reglamentos se reservan a quienes detentan potestades administrativas o ejecutivas. La reserva de ley va dirigida precisamente a evitar las decisiones usualmente unilaterales de las autoridades administrativas y ejecutivas.

*4-Indisponibilidad legislativa para la regresión.* Sostiene que los derechos fundamentales siempre estarán sujetos al principio de progresión, que gozarán de una tendencia legislativa al desarrollo de nuevas garantías, nunca a una regresión en lo conquistado por la humanidad. De este planteamiento se deriva que ninguna ley, aunque sea emitida por el Parlamento o por quien detente la función legislativa, y mucho menos un reglamento administrativo, puede orientarse a debilitar las garantías iusfundamentales alcanzadas por leyes anteriores. En el caso particular del derecho al honor, este planteamiento supone concebir los derechos adscriptos de respuesta y rectificación como expresión de progresión, entendidos como garantías formales de protección ante posibles vulneraciones.

*5-Contenido esencial mínimo intocable.* Este requisito de fundamentalidad plantea que todo derecho fundamental tiene un núcleo de protección, que incluso en las situaciones más extremas no puede ser sacrificado. Como es sabido, todo derecho puede ser restringido o limitado (en dependencia de la posición teórica que sea asumida-interna o externa-) en ciertas condiciones, y bajo determinadas previsiones constitucionales. Pero incluso en esas condiciones y previsiones el contenido esencial mínimo debe respetarse, so pena que sea vulnerado el Estado de Derecho. En el caso del derecho al honor, la consideración y estima, entendida como condición inherente al ser humano, siempre debe ser respetada, incluso en caso de limitaciones, e independientemente del contenido concreto que dé lugar a tal consideración y estima.

*6-Tutela judicial efectiva.* Este requisito está estrechamente vinculado a los anteriores, y en cierta medida los integra. Plantea que los derechos fundamentales siempre podrán ser recurridos en vía judicial, pues de lo contrario no gozan de verdaderas garantías. Incluso la más plena realización material del derecho no es por sí sola una plena garantía integral, pues carece de previsión de

defensa ante posibles vulneraciones. En el caso particular del derecho al honor se aprecia su protección frente a los medios de comunicación, lo que se explicará en el próximo epígrafe.

Debe precisarse que esta tutela judicial efectiva en Cuba, en las actuales condiciones, puede ser ejercida por los tribunales ordinarios, a través de un proceso especial de tutela concebido al efecto, y con la representación para el reclamante del fiscal que atiende los derechos ciudadanos; esto pudiera perfeccionarse de cara a una reforma constitucional y legislativa, pudiéndose instrumentar las salas constitucionales de los tribunales a todos los niveles (municipal, provincial y nacional), con la garantía de la doble instancia revisora.

*7-Control de constitucionalidad.* Vinculado al anterior aparece el requisito del control de constitucionalidad, ya sea por el modelo difuso, concentrado, mixto o múltiple. Esto supone que debe existir la posibilidad de declarar inconstitucional una ley o disposición jurídica cualquiera, cuyo contenido, de aplicarse, vulnere inevitablemente derechos fundamentales. No tiene mucha importancia, a los efectos de este análisis, determinar qué órgano estaría autorizado por la Constitución para declarar la inconstitucionalidad: si todo el sistema de tribunales, el máximo órgano jurisdiccional, un tribunal constitucional, una sala constitucional o un órgano político. Lo significativo es que el ordenamiento jurídico de la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad, evitando así las vulneraciones actuales o futuras a los derechos fundamentales, y en particular al derecho al honor.

Lo trascendente de esta propuesta de requisitos de fundamentalidad es que enumera de forma precisa las características que deben verificarse en un ordenamiento jurídico determinado para poder considerar la existencia formal y material de derechos fundamentales, y en particular para la protección del derecho al honor. Las mismas son trascendentes como presupuesto para garantizar el derecho al honor frente a los medios de comunicación en Cuba, siempre que puedan instrumentarse.

#### **2.4 Los derechos de respuesta y rectificación, y la ponderación: presupuestos específicos para garantizar el derecho al honor frente a los medios de comunicación**

Como se ha planteado, en esta investigación se asume una postura dualista<sup>140</sup> sobre el contenido transmitido por los medios de comunicación. A tales efectos, se reconoce la posibilidad metodológica de dividir dichos contenidos en informaciones y opiniones: las primeras se refieren a hechos de trascendencia pública, los cuales deben orientarse por las máximas de la verdad

---

<sup>140</sup> Carmona Díaz de León, Eugenia Paola: *El derecho de rectificación en México*, Tesis presentada para obtener el grado de Doctora en Derecho, UNAM, México D.F., 2010, P. 23.

objetiva; mientras las opiniones refieren puntos de vista, juicios generalmente emanados del pensamiento y las valoraciones de otros sujetos sobre determinados hechos y personas.

También se reconoce la posibilidad de que los hechos o las opiniones transmitidas por los medios estén viciadas de defectos: los primeros por omisiones, errores, falsedades, defectos o inexactitudes, las segundas por parcialidad. La divulgación de hechos omisos, errados, falsos, defectuosos o inexactos puede llevar a vulneraciones ilegítimas al honor.

En tal sentido, el ordenamiento jurídico cubano debe prever instituciones que, amparadas en la doctrina de los derechos adscriptos, garanticen enfrentar las referidas vulneraciones ilegítimas al honor. Se considera que las dos “instituciones” que más se avienen a estas características, y que son garantía jurídica formal, son los derechos de respuesta y rectificación.

Como se ha planteado, estos derechos le “...asiste(n) a toda persona física o jurídica que se siente lesionada por una información publicada en cualquier medio de difusión –sea por considerarlos inexactos, o porque su divulgación le cause perjuicio– de enviar al citado medio, para su inmediata publicación, un escrito replicando esas alusiones...”<sup>141</sup>

En estas ideas se identifican claramente dos tipos de derechos:

1-El derecho de rectificación, orientado a corregir, rectificar, o enmendar informaciones o datos emitidos por el medio de prensa, los que se presumen falsos, errados, imprecisos, incompletos; y que producto de esos vicios de veracidad pueden contribuir a formar estados de opinión que perjudiquen el honor de personas e instituciones. Se sustenta en el principio de información veraz, y en el derecho a la información. Se deriva de la divulgación mediática de expresiones potencialmente deshonrosas o de la divulgación mediática de informaciones potencialmente deshonrosas.

2-El de respuesta, orientado a ofrecer un punto de vista diferente, relativo a una opinión o juicio de valor emitido o divulgado por un medio, del que es titular quien se vea perjudicado en su honor por la referida divulgación. Este derecho faculta a su titular para exigir al medio la publicación de la respuesta a la opinión divulgada previamente, de forma rápida, gratuita, en caracteres similares y en el mismo lugar en que fue publicada la opinión original. Se sustenta en el principio de opinión contrastada, e igualmente en el derecho a la información. Se deriva de la divulgación mediática de opiniones potencialmente deshonrosas.

---

<sup>141</sup> Álvarez Tabío Albo, Ana María: *Los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen como límites a las libertades de información y de expresión*, Tesis presentada para obtener el grado de Doctora en Ciencias Jurídicas, Universidad de La Habana, La Habana, 2008, p. 109.



Para ambos derechos deben establecerse un grupo de requisitos generales, como condiciones previas para su configuración objetiva.<sup>142</sup>

1-Las informaciones u opiniones deben emitirse a través de un medio masivo de comunicación (A los efectos de esta investigación periódico, radio o televisión).

2-Las informaciones u opiniones tienen que tender, por lo menos potencialmente, a afectar el honor de una persona o institución. Para autores como Nuvolone este presupuesto debe contar con dos condiciones: una de carácter objetivo y otra de carácter subjetivo. La primera, se configura cuando los hechos o afirmaciones atribuidas a una persona sean lesivas a su dignidad; la segunda, cuando los actos, opiniones o afirmaciones atribuidas a dicha persona sean consideradas por dicha persona como contrarias a la verdad.<sup>143</sup>

3-La referida afectación al honor de una persona o institución debe derivarse de la divulgación de informaciones que se presuman falsas, erradas, imprecisas o incompletas (vicio de veracidad); o de la divulgación de opiniones unilaterales, no contrastadas, sin la expresión de puntos de vistas diferentes sobre determinadas características o cualidades de personas o instituciones (vicio de contrastación de fuentes).

Es importante señalar que los derechos adscriptos de respuesta y rectificación no constituyen restricciones a la libertad de expresión, ni al derecho a la información. Al respecto, se coincide con Javier Cremades cuando plantea: “...No se trata de una limitación al derecho a la información porque no obliga al medio de comunicación a desdecirse de lo informado anteriormente, sino que su obligación se reduce a publicar o divulgar la rectificación con una relevancia semejante a aquella, sin comentarios ni apostillas.”<sup>144</sup>

Para una adecuada instrumentación de los derechos de respuesta y rectificación, como garantías del derecho al honor, frente a los medios de comunicación en Cuba, se recomiendan los siguientes presupuestos específicos:

*1-Instrumentación de los derechos adscriptos de respuesta y rectificación como garantías del derecho al honor.* Se debe configurar el reconocimiento de los derechos de respuesta y rectificación, como derechos que desarrollan y garantizan el derecho al honor, a la vez que delimitan los derechos asociados a los medios de comunicación (libertad de expresión y prensa, y

---

<sup>142</sup> Sobrao Martínez, Francisco: *El derecho de rectificación en el periodismo*, Universidad de Murcia, Murcia, 2015, pp. 239-254.

<sup>143</sup> Nuvolone, Pietro: *Reati di stampa*, A. Giuffrè, Milano, 1951, p. 24.

<sup>144</sup> Cremades, Javier: *Los límites a la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español*, Editorial la Ley-Actualidad, Madrid, 1995, p. 255.

derecho a la información). Estos derechos deben aparecer regulados explícitamente en la Constitución de la República, junto al derecho al honor, y configurarse en leyes de desarrollo, pudiendo disponerse en una Ley de prensa, Ley de responsabilidad de medios, o Ley de protección al honor, que son las variantes empleadas en los ordenamientos jurídicos foráneos.

Este presupuesto debe sustentarse en un grupo de requisitos materiales<sup>145</sup>, como son:

- a) Que una persona jurídica o natural se considere injustamente perjudicada en su honor, por cualquier texto o dibujo inserto en una publicación periódica.
- b) Que lo publicado pueda provocar objetivamente perjuicio en el honor por cualquier texto o dibujo publicado en una publicación periódica.
- c) Que el perjuicio injusto en el honor se derive de la divulgación de hechos erróneos, inexactos o incompletos, o de opiniones no contrastadas.

*2-Instrumentación de una acción de respuesta o rectificación.* Esto supone la plasmación en alguna Ley de desarrollo (Ley de prensa, Ley de responsabilidad de medios, o Ley de protección civil del derecho al honor) de una acción de rectificación o respuesta, en la que debe tenerse en cuenta los requisitos formales propuestos por Sobrao Martínez para su efectivo ejercicio.<sup>146</sup>

- a) Requisitos de escritos de rectificación o respuesta:

- Que proceda de persona legitimada activamente.
- Que se refiera concretamente al artículo en que fue injustamente perjudicada una persona en su honor.
- Que no contenga conceptos contrarios a las leyes o a, las buenas costumbres, ni ofensas contra terceras personas ni contra el periódico a que se dirige la rectificación.

- b) Condiciones del ejercicio de los derechos de respuesta o rectificación:

- Entregar el escrito de réplica en la agencia o redacción del periódico, por sí o mediante persona que le represente. Podrá exigir que se le firme y selle un duplicado de la misma.
- Igualdad tipográfica entre respuesta o rectificación y texto que la ha motivado. Valido para la radio o video difusión en cuanto a espacio y tiempo de duración de la respuesta o rectificación.
- Inserción íntegra del texto original de la respuesta o rectificación, sin comentarios ni apostillas.

---

<sup>145</sup> Sobrao Martínez, Francisco: *El derecho de rectificación en el periodismo*, Universidad de Murcia, Murcia, 2015, pp. 239-254.

<sup>146</sup> *Ibidem*, pp. 239-254.

- Gratuidad de publicación de la respuesta o rectificación.

- Celeridad de publicación de la respuesta o rectificación.

c) Requisitos procesales de la acción de respuesta o rectificación.

- Se interpone cuando el director del medio no publica en 72 horas, o en el número o emisión inmediata posterior a la recepción de la petición de respuesta o rectificación por el ofendido o su representante. O cuando no se publica cumpliendo los requisitos establecidos para reconocer dichos derechos.

- Se interpone ante el Tribunal ordinario de primera instancia.

- Se interpone observando los requisitos de un proceso sumario, con plazos abreviados y formalidades simplificadas (suficiencia de petición verbal por el afectado en su honor, sin necesidad de representación letrada y con predominio de la oralidad)<sup>147</sup>

- Resolución del asunto en un plazo no mayor 72 horas por el juez, con ejecutoriedad inmediata de la sentencia.

- Sentencia que incluye la publicación de la respuesta o rectificación, en el número o emisión inmediatamente posterior a la sentencia, con el uso de similares caracteres tipográficos o características de emisión, en el mismo espacio en que se publicó el artículo o mensaje, de manera gratuita para el titular del derecho de respuesta o rectificación.

- Independencia entre el resultado del proceso y otros que pudieran iniciarse en la vía penal o civil por el mismo hecho, al amparo de la legislación existente.

- Vinculación de la sentencia para todos los órganos y organismos de poder del Estado, los directivos del medio implicado y el periodista cuyo trabajo generó la acción de respuesta o rectificación.

- Pago de los costes procesales a cargo del medio que generó el ejercicio de la acción.

Para una adecuada resolución de las posibles colisiones entre el derecho al honor y los derechos asociados a los medios de comunicación por parte del órgano jurisdiccional, una vez presentado a trámite el asunto litigioso, se propone el empleo de las técnicas o reglas de ponderación. Se

---

<sup>147</sup> Mariño Castellano, Ángel, Cutié Mustelier, Danelia y Méndez López, Josefina: *Reflexiones en torno a la protección de los derechos fundamentales en Cuba. Presupuestos para su perfeccionamiento*, en Pérez Hernández, Lissette y Prieto Valdés, Martha (compiladoras), *Temas de derechos constitucional cubano*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2000, p 336-344.

asumen los fundamentos generales que sobre la misma aporta Robert Alexy<sup>148</sup>, ya abordados en el primer capítulo.

Sin embargo, se considera no aplicable al objeto de investigación abordado la concepción de una precedencia incondicionada en favor del derecho al honor, o de los derechos asociados a los medios de comunicación. Esto supone que ninguno de dichos derechos debe prevalecer con carácter absoluto, en toda circunstancia, sobre el otro.

Para resolver con la ponderación la colisión entre el derecho al honor y los derechos asociados a los medios de comunicación se necesitan unos requisitos a tener en cuenta por el juzgador. En este sentido se asumen los planteados por Álvarez Tabío Albo,<sup>149</sup> aunque adecuados al objeto investigado:

*-Trascendencia y/o interés público de la información.* Se coincide con la autora cuando señala que este es el parámetro fundamental para entrar a considerar si existen o no colisiones, pues lo que se informa o expresa debe tener conexión con asuntos de interés general, ya sea por razón o motivo de la materia o de la persona involucrada. Aquí debe tenerse en cuenta el carácter público o privado de los sujetos y/o de los hechos que son objeto de la comunicación y que provocan la posible colisión de derechos.

La regla en este caso es que cuando se trate de asuntos de interés general, y además el titular del derecho es una persona pública, por ejercer funciones o cargos públicos, o es reconocido ampliamente por la comunidad con motivos de sus éxitos, su profesión, sus actos, u opiniones, o se vea implicado en asuntos o controversias de relevancia pública; dicho titular debe soportar cierto riesgo de afectación, cierto sacrificio de su derecho al honor, el que cederá ante los derechos asociados a los medios de comunicación.<sup>150</sup> En caso de no cumplirse estos requisitos prevalecerá el derecho al honor.

*-Ausencia de expresiones vejatorias innecesarias para la función comunicadora.* Este límite queda fijado en el uso de expresiones injuriosas que para nada se relacionen con el evento noticioso o la valoración que del mismo se haga, en los insultos, en la expresiones vejatorias, despectivas, superfluas, la burla ofensiva, en los exabruptos gratuitos, el menosprecio o la exteriorización de sentimientos personales adversos que alejan al acto comunicativo del

---

<sup>148</sup> Alexy, Robert: *Teoría de los derechos fundamentales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.

<sup>149</sup> Álvarez Tabío Albo, Ana María: *Los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen como límites a las libertades de información y de expresión*, Tesis presentada para obtener el grado de Doctora en Ciencias Jurídicas, Universidad de La Habana, La Habana, 2008, p. 95.

<sup>150</sup> *Ibidem*, p. 96.

cumplimiento de la función comunicadora.<sup>151</sup> Estas expresiones siempre harán ceder, al menos en lo relativo a su contenido vejatorio, los derechos asociados a los medios ante el derecho al honor.

*-La veracidad de la información.* Este se refiere a lo que Álvarez Tabío Albo asocia con libertad de información, y aquí se asume como divulgación de informaciones; no comprendiendo en este requisito las opiniones, pues son las informaciones las que deben ser verdaderas, o por lo menos ser obtenidas de forma honesta y diligente. En todo caso en que la información sea claramente falsa, imprecisa, o errónea; y además se haya obtenido sin la diligencia requerida, el derecho al honor debe prevalecer sobre los derechos asociados a los medios de comunicación.

*-La contrastación de opiniones.* Aunque este requisito no es abordado por Álvarez Tabío Albo, se considera necesario que en el caso de las opiniones se propicie la posibilidad de que el medio pueda publicar la opinión diferente de la persona cuyo honor pueda ser afectado. La violación de este requisito podría configurar una prevalencia del derecho al honor frente a los derechos asociados a los medios de comunicación, aunque en este caso debe valorarse el cumplimiento de los otros requisitos.

## **Conclusiones parciales del capítulo 2**

-En la tradición jurídica cubana el derecho al honor solo ha tenido fuerte presencia en el derecho penal, sobre todo desde el Código Penal español, extensivo a Cuba en 1879, perfeccionándose en el Código de Defensa Social de 1936, y ampliándose en los Códigos Penales de 1979 y 1987.

-El ordenamiento jurídico cubano actual presenta carencias en la regulación del derecho al honor y su protección frente a posibles vulneraciones de los medios de comunicación, no tiene explícita consagración constitucional, limitando su protección al amparo del artículo 38 del Código Civil, lo cual imposibilita una rápida respuesta o rectificación ante la divulgación de informaciones u opiniones atentatorias del honor por dichos medios.

-Una adecuada consagración constitucional del derecho al honor, concibiéndolo como derecho fundamental, basado en su eficacia directa, vinculación de los órganos y organismos que participan en el ejercicio del poder a todos los niveles (nacional, provincial y municipal), reserva de ley, indisponibilidad legislativa para la regresión, contenido esencial mínimo intocable, tutela judicial efectiva, y control de constitucionalidad, propicia crear las condiciones jurídicas adecuadas para su protección frente a posibles vulneraciones de los medios de comunicación.

---

<sup>151</sup> *Ibidem*, p. 98.

-La instrumentación de los derechos adscriptos de respuesta y rectificación, como garantías de protección del derecho al honor en Cuba, frente a posibles vulneraciones de los medios de comunicación debe sustentarse en un grupo de requisitos generales, materiales y formales para su ejercicio efectivo:

a) Como requisitos generales debe tenerse en cuenta que las informaciones u opiniones deben emitirse a través de un medio masivo de comunicación, que dichas informaciones u opiniones tienen que tender, por lo menos potencialmente, a afectar el honor de una persona o institución y que la referida afectación al honor de una persona o institución debe derivarse de la divulgación de informaciones que se presuman falsas, erradas, imprecisas o incompletas (vicio de veracidad); o de la divulgación de opiniones unilaterales, no contrastadas, sin la expresión de puntos de vistas diferentes sobre determinadas características o cualidades de personas o instituciones (vicio de contrastación de fuentes).

b) Como requisitos materiales deben tenerse en cuenta que exista una persona jurídica o natural que se considere injustamente perjudicada en su honor, por cualquier texto o dibujo inserto en una publicación periódica, que lo publicado pueda provocar objetivamente perjuicio en el honor, y que el perjuicio injusto en el honor se derive de la divulgación de hechos erróneos, inexactos o incompletos, o de opiniones no contrastadas.

c) Desde el punto de vista formal, para el ejercicio de la respuesta o rectificación debe tenerse en cuenta los requisitos de escritos de respuesta o rectificación, las condiciones del ejercicio de los derechos de respuesta o rectificación y los requisitos procesales de la acción de respuesta o rectificación, así como el empleo de la ponderación para resolver judicialmente las colisiones.

## CONCLUSIONES FINALES

**Primera:** El derecho al honor es una institución de carácter histórico y contenido variable, consistente en la titularidad sobre la consideración y estima a que toda persona es acreedora. Su protección se ha circunscrito al derecho penal, pero se ha impuesto en la actualidad como un derecho fundamental, que debe ser protegido ante la progresiva irrupción de los medios masivos de comunicación y sus posibles vulneraciones, provocadas por las colisiones propias del despliegue de los derechos asociados a la prensa (libertad de prensa, libertad de expresión, y derecho a la información).

**Segunda:** En Cuba su protección es singularmente necesaria, por las carencias propias de un ordenamiento jurídico que no le da consagración constitucional, a la vez que no cuenta con leyes de desarrollo que lo garanticen. Esto ha generado la divulgación de informaciones erróneas, imprecisas, incompletas, y falsas, o de opiniones no contrastadas, que han vulnerado ilegítimamente el honor de personas o instituciones, sin que los afectados cuenten con mecanismos legales adecuados para su protección.

**Tercera:** La protección del derecho al honor, ante la actuación lesiva de los medios de comunicación en Cuba, debe enfocarse en concebirlo como un derecho fundamental, garantizado mediante la tutela de los derechos adscriptos de respuesta y rectificación. Como derecho fundamental debe sustentarse en su eficacia directa, vinculación de todos los órganos y organismos de poder del Estado, reserva de ley, indisponibilidad legislativa para la regresión, contenido esencial mínimo intocable, tutela judicial efectiva, y control de constitucionalidad.

**Cuarta:** La instrumentación de los derechos adscriptos de respuesta y rectificación, como garantías del derecho al honor frente a posibles vulneraciones de los medios de comunicación, debe concebirse a partir de su constitucionalización, e implementación mediante leyes de desarrollo que posibiliten exigir a los medios la publicación de las respuestas y rectificaciones en condiciones similares a la publicación que las originó; así como la configuración de una acción judicial sumaria, para el caso de negativa a publicar dicha respuesta o rectificación, por el director del medio u otro directivo; y la resolución posterior del fondo de la litis, sustentando en este caso la decisión del órgano jurisdiccional en las reglas de ponderación para derechos en colisión.

## RECOMENDACIONES

1-Que en el anunciado proceso de reforma de la Constitución se tenga en cuenta este estudio, a fin de considerar los presupuestos que aquí se aportan para la posible plasmación constitucional del derecho al honor, y los derechos adscritos de respuesta y rectificación como garantías. Estos derechos deben estar basados en los principios de eficacia directa, vinculación de los órganos y organismos de poder a todos los niveles, reserva de ley, indisponibilidad legislativa para la regresión, contenido esencial mínimo intocable, tutela judicial efectiva, y control de constitucionalidad.

2-Que esta investigación se tenga en cuenta para futuros trabajos legislativos, con el objetivo de regular el ejercicio de los derechos adscritos de respuesta y rectificación, a partir del diseño e implementación de una posible Ley de Prensa, Ley de Responsabilidad de Medios, o Ley de Protección Civil del derecho al honor.

3-Que en el diseño legislativo de las referidas leyes se tenga en cuenta la pertinencia de configurar una acción de respuesta y rectificación por vía jurisdiccional, con las características de un proceso sumario, donde se conciban los presupuestos relativos a la ponderación de derechos en colisión, como regla de solución de posibles conflictos entre el derecho al honor y los derechos asociados a los medios de comunicación (libertad de prensa, libertad de expresión y derecho a la información)

4-Que sea puesta a disposición la presente investigación como soporte bibliográfico, como herramienta de consulta y análisis para los especialistas y demás interesados en la temática, particularmente con fines docentes y para futuras investigaciones en la materia.



## BIBLIOGRAFÍA

### Doctrina

1. Abramovich, Víctor y Curtis, Christian: *Los derechos sociales como derechos exigibles*, 2da edición, Trotta, Madrid, 2004.
2. Aguilera Fernández, A.: *La libertad de expresión del ciudadano y la libertad de prensa o información (posibilidades y límites constitucionales)*, Comares, Granada, 1990.
3. Aguirre Nieto, Marisa: *El derecho a la información como ciencia*, en *Derecho a la información*. Bel Mallen, Ignacio, Loreto Carredoira y Alfonso (coordinadores), Ariel, Madrid, 2003.
4. Alberdi Aráoz, Juan Bautista: *Obras selectas*, t.XVII.
5. Alexy, Robert: *Teoría de los derechos fundamentales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.
6. Alfonso X el Sabio: *Las Siete Partidas (El Libro del Fuero de las Leyes)*, Edición Real-versión digital-, Madrid, 1807.
7. Álvarez Tabío Albo, Ana María: *Los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen como límites a las libertades de información y de expresión*, Tesis presentada para obtener el grado de Doctora en Ciencias Jurídicas, Universidad de La Habana, La Habana, 2008.
8. Apreza Salgado, Socorro: *Veracidad y pluralismo informativo en el medio televisivo: una tarea pendiente*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1994.
9. Apreza Salgado, Socorro: *Veracidad y pluralismo informativo en el medio televisivo: una tarea pendiente*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1994.
10. Aragón Reyes, Manuel (coordinador): *Temas básicos de derecho constitucional*, Civitas, Madrid, 2001. Tomos I-III.
11. Aragón Reyes, Manuel: *El derecho al honor de las personas jurídicas y sus posibles colisiones con el derecho de información*, consultado de <https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/5568>, el 16 de junio de 2017.
12. Asensi Sabater, José (coordinador): *Ciudadanos e instituciones en el Constitucionalismo actual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.
13. Azurmendi, Ana: *Derecho de la Información: guía jurídica para profesionales de la comunicación*. 2ª. Edición, Euns, Pamplona, 2001.
14. Badeni, Gregorio: *Tratado de Derecho Constitucional*, Tomo 1, 2da. Edición, La Ley, Buenos Aires, 2006.
15. Balaguer Callejón, María Luisa: *El derecho fundamental al honor*, Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1992.
16. Balaguer Callejón, María Luisa: *La regulación de los Consejos Audiovisuales en el ordenamiento jurídico español*, en *Revista Teoría y Realidad Constitucional*, No. 25, Primer semestre 2010, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, UNED, Madrid, 2010.
17. Betancourt, Ángel C.: *Código Penal*, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Co., Habana, 1922.
18. Blas Guerrero, Andrés y García Cotarelo, Ramón: *Teoría del Estado y Sistemas Políticos. Parte General Teoría del Estado (I)*, s/f.
19. Bobbio, Norberto: *El futuro de la democracia*. 2ª. Reimpresión a la 2ª. Edición en español, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1997.
20. Burgoa Orihuela, Ignacio: *Las garantías individuales*. 27ª. Edición, Editorial Porrúa, México, 1995.

21. Calaza López, Zonia: *Delimitación de la protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen*, en Revista de Derecho UNED, No. 9, 2011, Madrid.
22. Carbonell Sánchez, Miguel (compilador): *El principio constitucional de igualdad. Lecturas de introducción*, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México D.F., 2003.
23. Carbonell Sánchez, Miguel: *Los derechos fundamentales en México*, UNAM, México D.F., 2004.
24. Carmona Díaz de León, Eugenia Paola: *El derecho de rectificación en México*, Tesis presentada para obtener el grado de Doctora en Derecho, UNAM, México, 2010.
25. Castro Alfin, D.: *Los males de la imprenta. Política y libertad de prensa en la sociedad dual*, Centro de Investigaciones sociológicas, Madrid, 1998.
26. Castro Fariñas, J.A.: *De la Libertad de Prensa*, Fragua, Madrid, 1971.
27. Código de Ética del Periodista, consultado en <http://www.cubaperiodistas.cu/upec>, consultado el 5 de abril de 2017.
28. Colectivo de autores: *Derecho Penal Especial. Tomo II*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005.
29. Concepción Rodríguez, José Luis: *Honor, intimidad e imagen*. Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1996.
30. Cremades, Javier, *Los límites a la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español*, Editorial la Ley-Actualidad, Madrid, 1995.
31. Desantes Guanter, J. M.: *Fundamentos del Derecho de la Información*, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Madrid, 1977.
32. Duhalde, Eduardo Luis, y Alén, Luis Hipólito: *Teoría jurídico-política de la comunicación*. 3ª. Reimpresión a la primera edición, Eudeba, Buenos Aires, 2005.
33. Duverger, Maurice: *Instituciones Políticas y derecho constitucional*. 2ª. Reimpresión, tr. Eliseo Aja, et.al., Editorial Ariel, México D.F., 1992.
34. Echevarría Espinosa, Esteban: *Dogma Socialista*, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1940.
35. Eliades, Analía: *El derecho de rectificación o respuesta en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación*. Consultado en internet el 20 de diciembre de 2016 en: [http://file:///D:/Maestría%20en%20Derecho%20Constitucional%20Alie/El%20Derecho%20al%20honor%20materiales%20junio%202015/Derechos%20de%20respuesta%20y%20rectificación/eliades\\_rectificacion.pdf](http://file:///D:/Maestría%20en%20Derecho%20Constitucional%20Alie/El%20Derecho%20al%20honor%20materiales%20junio%202015/Derechos%20de%20respuesta%20y%20rectificación/eliades_rectificacion.pdf)
36. Elliot, Deni, ed.: *Responsible Journalism*. Beverly Hills, Sage Publications, Los Ángeles, 1986.
37. Escobar Roca: *Estatuto de los periodistas. Régimen normativo de la profesionalización y organización de las empresas de comunicación*, Tecnos, Madrid, 2002.
38. Espina, A.: *El cuarto poder. Cien años de periodismo español*, Aguilar, Madrid, 2007.
39. Farías García, P.: *Libertades públicas e información (un esbozo histórico)*, Eudema Universidad, Madrid, 1988.
40. Favoreu, Louis: *Le principe de constitutionnalité. Essai de définition d'après la jurisprudence du Conseil Constitutionnel*, en AAVV, Mélandes Einsenmann, Ediciones Cujas, París, 1975.
41. Favoreu, Louis: *Legalidad y constitucionalidad. La constitucionalización del derecho*, en Cuadernos del Instituto de Estudios Constitucionales, núm. 59, Bogotá, 2000.
42. Ferrajoli, Luigi: *Derechos y garantías. La ley del más débil*. Tr. Perfecto Andrés Ibáñez, et.al., Trotta, Madrid, 1999.

43. Fioravanti, Mauricio: *Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones*. Tr. Manuel Martínez Neira. 2ª. Edición, Trotta, Madrid, 1998.
44. Fix Fierro, María Cristina: *El derecho al honor como límite a la libertad de expresión*, consultado el 23 de agosto de 2016 en: [www.juridicas.unam.mx](http://www.juridicas.unam.mx)
45. Fix Zamudio, Héctor: *Metodología, docencia e investigación jurídicas*. 5ª. Edición, Editorial Porrúa, México, 1996.
46. García Belaunde, Domingo: *De la Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal Constitucional*. 4ta. Edición, Editora Jurídica Grijley E.I.R.L., Lima, 2003.
47. García Belaunde, Domingo: *El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de Cuba (1940-1952)*, Editora Jurídica Grijley E.I.R.L., Lima, 2002.
48. García Fajardo, J.C.: *Comunicación de masas y pensamiento político*, Editorial TECNOS, S.A., Madrid, 1992.
49. García-Pelayo, Manuel: *Derecho constitucional comparado*, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1984.
50. Gomis Sanahuja, L.: *El medio media. La función política de la prensa*, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1974.
51. Gutiérrez Goñi, Luis, *Derecho de rectificación y libertad de información (contenidos constitucional, sustantivo y procesal de la LO 2/84 de 26 de marzo)*, J.M. Bosch Editor, Madrid, 2003.
52. Gutiérrez Goñi, Luis: *Derecho de rectificación y libertad de información (contenidos constitucional, sustantivo y procesal de la LO 2/84 de 26 de marzo)*, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2003.
53. Habermas, Jürgen: *Facticidad y Validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de la teoría del discurso*. Tr. Manuel Jiménez Redondo, Trotta, Madrid 1998.
54. Habermas, Jürgen: *Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública*. Tr. Antonio Doménech. 9ª. Reimpresión a la 1ª. Edición en español, Madrid, 2006.
55. Heller, Hermann: *Teoría del Estado*. Tr. Luis Tobío. 13ª. Reimpresión a la 1ª. Edición en español, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1990.
56. Herrero-Tejedor Algar, F.: *Responsabilidad de los periodistas. El reportaje neutral*. Cuadernos de Derecho Judicial. Número 12/1993.
57. Jiménez De Asúa, Luis: *Derecho Penal*, Editorial Reus (S.A.), Madrid, 1924.
58. *La Constitución de los Estados Unidos de América, con nota explicativa*, Departamento de Estado de los Estados Unidos, 1999.
59. Lara Peinado, Federico y Lara González, Federico: *Los primeros Códigos de la humanidad*, Editorial TECNOS, Madrid, 2001.
60. López de Ramón, María: *La construcción histórica de la libertad de prensa*, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2014.
61. López Díaz, Elvira: *El derecho al honor y el derecho a la intimidad: jurisprudencia y doctrina*, Editorial Dykinson, Madrid, 1996.
62. López Guerra, Luis y otros: *Derecho Constitucional. Volumen I. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.
63. Loreti, Damián M.: *El derecho a la información*. 2ª. Reimpresión, Paidós, Buenos Aires, 1999.
64. M. Rosental, P. Iudin: *Diccionario Filosófico*, Editora Política, La Habana, 1981.
65. Mariño Castellano, Ángel, Cutié Mustelier, Danelia y Méndez López, Josefina: *Reflexiones en torno a la protección de los derechos fundamentales en Cuba*.

- Presupuestos para su perfeccionamiento*, en Pérez Hernández, Lissette y Prieto Valdés, Martha (compiladoras), *Temas de derechos constitucional cubano*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2000.
66. Martín de la Guardia, R.: *Cuestión de tijeras. La censura en la transición a la democracia*, Síntesis, Madrid, 2008.
67. Martínez Terrero, José: *Teorías de la comunicación*, Universidad Católica Andrés Bello, Guayana, 2006.
68. Martínez, José Agustín: *Código de Defensa Social vigente en la República de Cuba*, Jesús Montero Editor, La Habana, 1939.
69. Matilla Correa, Andry (compilador): *El Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba de Joaquín Infante. Aproximaciones histórico-jurídicas a propósito de su bicentenario*, Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y Archivo Nacional de la República de Cuba, La Habana, 2012.
70. McQuail, Danis: *Introducción a la teoría de la comunicación de masas*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1985.
71. Muñoz Machado, S.: *Libertad de prensa y procesos de difamación*, Ariel, Barcelona, 1987.
72. Novoa Monreal, Eduardo: *Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de derechos*, Siglo XXI Editores, México, 1989.
73. Nuvolone, Pietro, *Reati di stampa*, Milano, A. Giuffrè, 1951.
74. Ochoa Olvera, Salvador: *Derecho de Prensa. Libertad de expresión, libertad de imprenta, derecho a la información*, Montealto, México D.F. 1998.
75. Pahuamba Rosas, Baltazar y Zavala Gallardo, Erick (Coordinadores): *Aplicación de los derechos humanos*, Editorial Novum, México D.F., 2014.
76. Palacios, Alfredo: *El delito de opinión y la tradición argentina*, Buenos Aires, 1939.
77. Pérez Hernández, Lissette y Prieto Valdés, Martha, *Los derechos fundamentales. Algunas consideraciones doctrinales necesarias para su análisis*, en Pérez Hernández, Lissette y Prieto Valdés, Martha (compiladoras), *Temas de derechos constitucional cubano*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2000.
78. Pérez Luño, A. Enríque: *Los Derechos Fundamentales*, Editorial TECNOS, Madrid, 1994.
79. Pérez Royo, Javier, *Curso de Derecho Constitucional*, MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES S.A. (Cuarta Edición), Madrid, 1997.
80. Pérez Royo, Javier: *Curso de Derecho Constitucional*, MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES S.A. (Cuarta Edición), Madrid, 1997.
81. Pichardo Viñals, Hortensia: *Documentos para la Historia de Cuba. Tomo I*, Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 2000.
82. Pizarro, Ramón Daniel: *Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación. 2ª. Edición* Hammurabi, Buenos Aires, 1999.
83. Prieto Valdés, Martha: *Selección de textos constitucionales. Primera Parte*, ENPSES, La Habana, 1991.
84. Rallo Lombarte, Artemi: *Pluralismo informativo y Constitución*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.
85. Ramírez, M.: *El derecho a la información. Teoría y Práctica*, Libros Pórtico, Zaragoza, 1995.
86. Reig, Ramón: *Medios de comunicación y poder en España. Prensa, radio, televisión y mundo editorial*, Paidós, Madrid, 1998.
87. Rivera, Julio César (h): *La constitucionalidad del derecho de rectificación o respuesta*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2004.

88. Rubiales Moreno, F.: *Periodistas sometidos: los perros del poder*, Almuzara, Madrid, 2009.
89. Sánchez de Albornoz, Claudio: *España: un enigma histórico*, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1957.
90. Santos Vijande, Jesús María: *Protección jurisdiccional, civil y penal, del honor, la intimidad y la propia imagen*, Colección Cuadernos Aranzadi del Tribunal Constitucional. Primera Edición, Editorial Aranzadi S.A. Navarra, 2005.
91. Sartori, Giovanni: *Homo videns. La sociedad teledirigida*. Tr. Ana Díaz Soler. 8ª. Reimpresión a la 1ª. edición, Taurus, México, 2000.
92. Serra Ruíz, Rafael: *Honor, honra e injuria en el Derecho medieval español*, Universidad de Murcia, Murcia, 1999.
93. Serrano Gómez, Alfonso Y Serrano Maillo, Alfonso: *Derecho Penal. Parte Especial*, Editorial DIKINSON, Madrid, 2006.
94. Sobrao Martínez, Francisco, *El derecho de rectificación en el periodismo*, Universidad de Murcia, Murcia, 2015.
95. Soriano, Ramón: *Las libertades públicas. Significado, fundamentos y estatuto jurídico*, Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1990.
96. Suárez Villegas, Juan (ed.): *Medios de comunicación y autocontrol, Entre la ética y el derecho*, MAD., Madrid, 1999.
97. Valdés Díaz, Caridad Del Carmen: *Derecho Civil Parte General*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005
98. Villabella Armengol, Carlos M.: *Selección de Constituciones Iberoamericanas*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2002.
99. Villabella, Carlos Manuel: *Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano ¿Un nuevo paradigma?*, Grupo Editorial Mariel, México D.F., 2014.
100. Villanueva, Ernesto: *Régimen jurídico de las libertades de expresión e información en México*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 1998.

### **Bibliografía del autor sobre el tema**

1. Pérez Véliz, Alie y Crespo Hernández, Olga: *Democracia y derechos fundamentales. Aproximaciones críticas desde Cuba*, Editorial Letra Viva, Coral Gables, 2016.
2. Pérez Véliz, Alie: *Antecedentes históricos del derecho al honor: especial referencia al caso cubano*, en Matilla Correa, Andry y Pérez Veliz, Alie (coordinadores): *Estudios Jurídicos. Homenaje al profesor doctor Eurípides Valdés Lobán*, Ediciones Loynaz, Pinar del Rio, 2016.
3. Pérez Véliz, Alie: *El derecho al honor en Cuba. Fundamentos para su reforma*, en *Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, Núm. 35, julio-diciembre 2016, Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), México D.F., 2016.

### **Legislación y tratados**

1. «Declaración Universal de Derechos Humanos», en *Instrumentos Jurídicos Internacionales*, t. I, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1991.
2. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (Reimpresión en los Talleres Gráficos de la Asamblea Nacional), Caracas, 2005
3. Constitución de la República de Cuba, de 24 de febrero de 1976.
4. Convención Americana Sobre Derechos Humanos.  
[https://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_b-32\\_convencion\\_americana\\_sobre\\_derechos\\_humanos.htm](https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm)

5. Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación.  
[www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/i\\_ilocor\\_sp.htm](http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/i_ilocor_sp.htm)
6. Decreto-Ley No. 67 “De organización de la Administración Central del Estado”, aprobado por el Consejo de Estado de la República de Cuba el 19 de abril de 1983.
7. Ley de 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa de la República Francesa.
8. Ley de las XII Tablas, Editorial TECNOS S.A., Madrid.
9. Ley No. 59/87 Código Civil, Editora del Ministerio de Justicia, La Habana, 2003.
10. Ley No. 62/87 Código Penal, Editora del Ministerio de Justicia, La Habana, 2003.
11. Ley No. 82-652 de 29 de julio de 1982 Sobre la comunicación audiovisual de la República Francesa.
12. Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen (BOE-A-1982-11196)

### **Jurisprudencia**

1. Sentencia 15/93 del Tribunal Constitucional de España, de 1993.
2. Sentencia 139/95 del Tribunal Constitucional de España, de 1995.
3. Sentencia 183/95 del Tribunal Constitucional de España, de 1995.
4. Sentencia 697 de la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, de 9 de noviembre de 2002.

## **Anexo No. 1**

### **Sentencia del Tribunal Constitucional de España 15/1993, de 18 de enero de 1993**

La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Presidente, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Vicente Gimeno Sendra, don Rafael de Mendizábal Allende y don Pedro Cruz Villalón, Magistrados, ha pronunciado

#### **EN NOMBRE DEL REY**

la siguiente

#### **S E N T E N C I A**

En el recurso de amparo núm. 1.681/89, interpuesto por don Joan Valls Piqué, representado por don Ignacio Corujo Pita, sustituido posteriormente por don Juan Corujo Lopez-Villamil y finalmente por don Luis Suárez Migoyo, bajo la dirección letrada de don José Poch i Villamayor, contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 8 de junio de 1989, que declara no haber lugar al recurso de casación contra la dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 14 de abril de 1986, que condena al recurrente en amparo como autor responsable de un delito de injurias graves por escrito y con publicidad. Han comparecido el recurrente y el Ministerio Fiscal y ha sido ponente el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, quien expresa el parecer de la Sala.

#### **I. Antecedentes**

1. El 4 de agosto de 1989 tuvo entrada en el registro de este Tribunal un escrito de don Ignacio Corujo Pita, Procurador de los Tribunales, que en nombre y representación de don Joan Valls Piqué, interpone recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 8 de junio de 1989, que declara no haber lugar al recurso de casación contra la dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 14 de abril de 1986, que condena al recurrente en amparo como autor responsable de un delito de injurias graves por escrito y con publicidad.

2. Los hechos en los que se fundamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:

a) Con fecha 25 de abril de 1984 se publica en la sección de "cartas al director" llamada "Vd opina" del bisemanario "Igualada", dirigido por el ahora recurrente en amparo una carta firmada por don Josep Juan Martí, cuya identidad se desconoce, en la que bajo el título "El regidor Crema-Banderas" se dice que el Concejal de Igualada don José Ramón Gumá, como Presidente de la Agrupación Sardanista de Igualada, se jactó públicamente en su discurso pronunciado a los postres de la comida conmemorativa del X Aniversario de la proclamación de Igualada como ciudad Pubilla de la Sardana, de haber quemado banderas españolas.

Consta en los antecedentes que el ahora recurrente en amparo publicó la carta por estar de acuerdo con su contenido, y que no quiso revelar su autor en ejercicio del secreto profesional.

b) El Sr. Ramón Gumá denunció la referida información como un posible delito de calumnias, compareciendo después en las diligencias como querellante particular. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona dicta Sentencia, de 14 de abril de 1986 en la que se condena al ahora recurrente como autor de un delito de injurias graves con publicidad a la pena de dos meses



de arresto mayor y treinta mil pesetas de multa, "dado que en la carta que el procesado autorizó publicar por estar de acuerdo... se evidencia un animus iniurandi no desplazado por el alegado animus narrandi o animus criticandi puesto que el ejercicio del derecho a la crítica o censura no puede incidir en el campo de lo punible, y en el presente caso al atribuir a un Concejal de un ayuntamiento unas manifestaciones jactándose de haber quemado banderas nacionales no permite albergar dudas de la intencionalidad cuando ello no se constató... y si bien es cierto que con arreglo al art. 20 de la C.E. es legal el derecho de censura y crítica periodística de la actuación pública de cuantas personas ejerzan funciones de esta clase no menos cierto es que el ejercicio de este derecho en un régimen de libertad... no puede llegar a la difamación".

Interpuesto recurso de casación por el recurrente en amparo, por quebrantamiento de forma e infracción de ley, es desestimado por la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 8 de junio de 1989, razonando que no se produce el vicio alegado de no haber resuelto la Sentencia impugnada el hecho de que la información era cierta, ya que afirma "que no se constató", que por otra parte no puede realizar una nueva valoración de la prueba por no ser pruebas documentales que puedan ser revisadas en casación, y reiterando la valoración contenida en la Sentencia de la audiencia de que la libertad de información no abarca estos supuestos en los que se informa sobre la comisión de un delito, considera que dado que no se ha constatado que se produjera la jactancia de haber quemado banderas nacionales el tenor de la carta "dista mucho de un texto informativo y esclarecedor, para entrar en el área de lo vejatorio, deshonoroso o vilipendiador".

3. La demanda considera que las referidas resoluciones judiciales vulneran los arts. 20, 25 y 120 de la C.E., en cuanto que el animus iniuriandi se basa en que no se constató que el Concejal se hubiera jactado de haber quemado banderas nacionales; afirma que no se niega que en el discurso del querellante se hablase de la quema de banderas ocurrida años atrás, sino simplemente que no se constató que se hubiera jactado de dicha acción. Considera que habida cuenta del derecho de crítica de la acción política y de la libertad de expresión y del valor preponderante de dicha libertad, ésta debe ser protegida cuando se refiere a asuntos que son de interés general por las personas y materias implicadas, y que en estos supuestos se produce un conflicto entre derechos cuya dimensión constitucional convierte en insuficiente el criterio subjetivo del animus iniuriandi, criterio que se asentaba en la prevalencia absoluta del derecho al honor, y que ahora es necesario integrar con el derecho a la información, lo que no se ha realizado en el presente supuesto. Concluye solicitando el otorgamiento del amparo y la nulidad de la Sentencias impugnadas, así como su suspensión.

4. La Sección Segunda, por providencia de 15 de septiembre de 1988 acordó tener por interpuesto el recurso de amparo, y, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.3 de la LOTC conceder un plazo común al Ministerio Fiscal y al recurrente para alegar lo que estimen pertinente en relación a la carencia de contenido constitucional de la demanda [50.1 c) LOTC] y a la eventual extemporaneidad del recurso (44.2 LOTC).

El Ministerio Fiscal considera que se trata de un conflicto que hace referencia al derecho a la información veraz, en el que las Sentencias impugnadas no analizan suficientemente dicha veracidad, la de la Audiencia Provincial no contiene ninguna referencia a ella, salvo que el querellante la niegue. La del Tribunal Supremo, afirma textualmente en su Antecedente 2: "A excepción de uno de los testigos aportados por la acusación particular que manifestó no haber oído nada de banderas, los demás testigos reconocen que el denunciante habló sobre este tema; existen solamente diferencias sobre si existió jactancia en las manifestaciones y sobre si el



denunciante manifestó que había participado en aquellos hechos" elemento que es de esencial importancia para la resolución de este tipo de conflictos. Por lo que concluye que no es manifiesta la carencia de contenido de la demanda y que puede ser admitida a trámite si se acredita fehacientemente la fecha de notificación.

El recurrente por su parte acredita la presentación no extemporánea del recurso e insiste en su contenido constitucional en cuanto supone un conflicto entre derechos fundamentales, resuelto por los Tribunales ordinarios en perjuicio de la libertad de expresión e información.

5. La Sección Segunda, por providencia de 26 de noviembre de 1989, acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, la solicitud de remisión de los antecedentes judiciales obrantes en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Provincial de Barcelona, así como el emplazamiento de quienes fueron parte en el proceso. Acordó igualmente la apertura de la correspondiente pieza de suspensión.

6. Tramitada la pieza de suspensión, y tras las alegaciones del recurrente en amparo y del Ministerio Fiscal, se dicta el Auto de la Sala Primera de 18 de diciembre de 1989 en el que se resuelve suspender la ejecución de la pena privativa de libertad y denegar la suspensión de la ejecución de la pena de multa y el pago de la indemnización, condicionado este último pronunciamiento a la prestación de una caución.

7. La Sección Segunda, por providencia de 11 de junio de 1990, acordó acusar recibo de las actuaciones, y conceder un plazo de diez días al solicitante en amparo para que participe el objeto y medios de la práctica de prueba pretendida. Con fecha 2 de julio y por nueva providencia se admite la prueba documental propuesta que es incorporada y se inadmite la testifical en aplicación del art. 44.1 b) de la LOTC al versar sobre los hechos que dieron lugar al proceso. Con fecha 16 de julio la Sección dicta otra providencia dando vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y al recurrente para que, en el plazo común de veinte días, formularan las alegaciones que estimasen procedentes.

El recurrente da por reproducidos los argumentos expuestos y remite para la resolución del conflicto a las SSTC 104/1986, 159/1987 y 121/1989.

El Ministerio Fiscal comienza señalando en sus alegaciones que el recurso de amparo se dirige en realidad contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, y, por otra parte que el art. 25 de la C.E. no es objeto de alegaciones, por lo que hay que limitar el análisis a la posible quiebra del art. 20.1 C.E., y en concreto a su apartado 4, libertad de comunicar información veraz. Para el Ministerio Público la cuestión a resolver gira alrededor de veracidad de la información, y considera sorprendente la ausencia de pronunciamiento expreso en las Sentencias impugnadas relativo a la veracidad o no de los hechos. La Sentencia de la Audiencia Provincial se centra en la perspectiva del animus iniuriandi, perspectiva que considera insuficiente con base en la STC 107/1988, ya que no se presta auténtico interés a la veracidad o no de lo publicado ni se valora la posible concurrencia de la libertad de información como causa excluyente de la antijuricidad, por lo que no existe la necesaria y casuística ponderación a que se refiere la STC 104/1986, lo que obliga a este Tribunal a realizar su propia ponderación tomando como base a la STC 107/1988. En relación al problema de a quién corresponde la carga de la prueba de la veracidad y considera que es a quien difunde la noticia y considera que en este caso, y en aplicación de la doctrina contenida en la STC 6/1988 lo ha hecho en forma suficiente para que la información pueda ser considerada veraz, por lo que concluye solicitando la estimación del recurso.

8. Por providencia de 12 de enero de 1993, se fijó para la deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 18 del mismo mes y año.

## **II. Fundamentos jurídicos**

1. Es ya reiterada jurisprudencia de este Tribunal (por todas SSTC 105, 171 y 172/1990), la que afirma que en el conflicto entre las libertades reconocidas en el art. 20 de la C.E. y otros bienes jurídicamente protegidos, entre los que se encuentra el derecho al honor, los órganos judiciales no deben estimar preponderante en todo caso uno de los derechos, sino que deben, habida cuenta de las circunstancias del caso, ponderar si la información se ha llevado a cabo dentro del ámbito protegido constitucionalmente, o por el contrario si ha trasgredido ese ámbito, señalando igualmente que son elementos de primer orden a considerar la materia de la información, su interés público y su contribución a la formación de una opinión pública libre, la persona objeto de la información, ya que las personalidades públicas o que voluntariamente adoptan ante un hecho concreto tal condición deben soportar un cierto mayor riesgo de lesión en sus derechos de la personalidad que las personas privadas, y el medio de información, en particular si ha sido difundida por un medio de comunicación social. Todo ello partiendo del superior valor del derecho a la información en la medida en que, al contribuir a la formación de una opinión pública libre y plural, supone uno de los elementos esenciales del Estado de derecho y contribuye a la plena realización del conjunto de derechos fundamentales.

Hemos también afirmado (por todas STC 197/1986) que el reconocimiento constitucional de las libertades de expresión y de comunicar y recibir información ha modificado profundamente la problemática de los delitos contra el honor penalmente sancionables, ya que la dimensión constitucional del conflicto convierte en insuficiente el criterio subjetivo del animus iniuriandi para el enjuiciamiento de este tipo de delitos puesto que el valor superior o de eficacia irradiante que constitucionalmente ostentan la libertad de expresión y de información, traslada el conflicto a un distinto plano en el que no se trata de establecer si su ejercicio ha ocasionado lesión penalmente sancionada al derecho al honor, sino de determinar si el ejercicio de esas libertades actúa o no como causa excluyente de la antijuricidad. Existen en consecuencia dos perspectivas que es necesario integrar, la que enjuicia la conducta del sujeto en relación al honor y la que la valora en relación a la libertad de información o expresión, y sólo de la ponderada valoración de las circunstancias fácticas del supuesto desde ambas ópticas puede ser resuelto de manera constitucionalmente adecuada el conflicto de derechos fundamentales presente en este tipo de casos, teniendo en cuenta que el juicio sobre la adecuación de esta ponderación a los postulados constitucionales compete en última instancia a este Tribunal.

El recurrente en amparo y el Ministerio Fiscal coinciden en afirmar que en el presente supuesto la ponderación realizada, tanto por la Audiencia Provincial de Barcelona, como por el Tribunal Supremo no es correcta desde el punto de vista constitucional. El recurrente centra sus alegaciones en el hecho de que el conflicto ha sido valorado exclusivamente desde la existencia o no de animus iniuriandi. El Ministerio Fiscal por su parte señala la insuficiencia con la que ambas Sentencias han procedido al análisis de uno de los elementos esenciales para la solución de este tipo de conflictos: la veracidad de la información.

Una lectura atenta de las resoluciones judiciales impugnadas nos lleva a concluir que, en efecto, el conflicto ha sido resuelto de forma prácticamente exclusiva desde la consideración del supuesto

animus iniuriandi del recurrente derivado de la publicación de la carta en el medio de comunicación del que es director sin contrastar adecuadamente, ni la veracidad de la información recogida en ella, sobre la que la Sentencia de la Audiencia se limita a afirmar escuetamente que "no se constató", ni la trascendencia pública de la noticia para contribuir a la formación de una opinión pública libre, elementos que hubieran podido llevar a una distinta valoración penal de la conducta del ahora recurrente, en cuanto que podrían excluir su antijuricidad al encontrarse protegidas por el ejercicio de un derecho fundamental preferente, como lo es el de comunicar libremente información veraz. Siendo función de este Tribunal constatar que la ponderación se ha llevado a cabo de forma acorde al diferente valor que se debe otorgar en el caso concreto a ambos derechos constitucionales y siendo negativa la respuesta, hay que concluir que las referidas Sentencias han desconocido el derecho fundamental invocado por el recurrente.

2. Ahora bien, al igual que sucede en cada ocasión de las ya muy numerosas en las que el Tribunal Constitucional ha sido llamado a decidir sobre la preferente aplicación de los derechos en conflicto en un caso concreto, este desconocimiento no significa sin más el otorgamiento del amparo; tratándose de una errónea delimitación del contenido de un derecho fundamental que impidió la necesaria ponderación entre el derecho al honor y el derecho a comunicar libremente información veraz, de acuerdo a un ya copioso cuerpo jurisprudencial (entre otras SSTC 104/1986, 107/1988, 185/1989) hemos de pronunciarnos sobre el fondo de la cuestión planteada. Esta ponderación debe de partir del hecho de que el conflicto se plantea entre el derecho a comunicar libremente información veraz, en cuanto que se refiere a un hecho concreto noticiable - la supuesta jactancia de un Concejal del Ayuntamiento de Igualada en una determinada reunión pública sobre el hecho de haber quemado banderas españolas-, susceptible como tal de comprobación, y al que es aplicable el límite de la veracidad, a diferencia de lo que sucede con el conflicto entre la libertad de expresión (entre otras SSTC 107/1988 y 6/1988) y el derecho al honor de la persona objeto de la información.

La jurisprudencia de este Tribunal ha ido configurando una serie de criterios o pautas para resolver estos conflictos. Entre ellos se ha destacado especialmente el de la veracidad de los hechos y el de la relevancia de la información, ya que, si bien existe una dimensión preferente de la libertad de expresión sobre el derecho al honor en cuanto que es garantía y condición necesaria del pluralismo político y de la formación de la opinión pública (entre otras muchas SSTC 104/1986 y 165/1987), sin embargo "para indagar si en un caso concreto el derecho a la información debe prevalecer será preciso y necesario constatar con carácter previo la relevancia pública de la información y la veracidad de los hechos y afirmaciones contenidas en esa información" (STC 171/1990).

No se puede negar en primer lugar que el hecho objeto de la información tiene relevancia a nivel local, en cuanto que se trata de unas manifestaciones públicas de un Concejal del Ayuntamiento que pueden resultar de interés para la opinión pública. Desde este punto de vista es evidente que el hecho puede ser considerado noticioso o noticiable a nivel local y por tanto contenido de la libertad de información (entre otras SSTC 105/1983 y 6/1988). Es más, las circunstancias que rodean al caso, y en especial el tratarse de unas declaraciones públicas de una persona también pública, hacen que tengamos que concluir que nos encontramos ante uno de los supuestos en los que la libertad de información actúa en grado preferente frente al derecho al honor de la persona que es objeto de la referida información (entre otras SSTC 107/1988 y 51/1989). Tal punto de vista parece no ser negado por las Sentencias impugnadas, ya que no hay en ellas una expresa negación de este aspecto, sino que se limitan a afirmar que debe prevalecer el derecho al honor

dado la existencia de un supuesto animus iniuriandi deducido a su vez de la "no constatación" de que se hubiera producido la jactancia sobre el hecho de la quema de las banderas españolas.

El problema se traslada por tanto al segundo de los elementos exigibles para que se produzca la primacía del derecho a la información: su carácter veraz. Para ello hay que tener en cuenta que, como ha establecido la STC 8/1988 y ha reiterado con posterioridad la STC 105/1990, cuando la Constitución requiere que la información sea veraz no está, tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas, o sencillamente no probadas en juicio, cuanto estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador a quien se puede y se debe exigir que lo que trasmita como hechos haya sido contrastado con datos objetivos, privando así de la garantía constitucional a quien defraudando el derecho de todos a la comunicación actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado. El ordenamiento no presta su tutela a tal conducta negligente ni menos a quien comunica como hechos simples rumores, o lo que es peor, meras insinuaciones insidiosas.

En consecuencia se hace preciso analizar no tanto si lo publicado en el medio de comunicación del recurrente responde a la verdad entendida ésta como constatación absoluta y plena de lo afirmado, sino más bien si, al autorizar su publicación, el recurrente ha obrado de acuerdo a los estándares mínimos de diligencia y profesionalidad que le son exigibles para que la información pueda ser considerada veraz.

Pues bien, no hay duda de que la información publicada merece ese calificativo, y a esta conclusión se llega mediante el análisis de dos circunstancias presentes en el pleito.

En primer lugar por la mera lectura de la prueba testifical realizada, a tenor de la cual, y según se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo resulta probado "que en la cena que se celebró en conmemoración del X aniversario de Igualada como ciudad Pubilla de la Sardana, hubo manifestaciones por parte del denunciante don José Ramón Gumá sobre los hechos que habían ocurrido diez años antes, y en los que se había producido la quema de banderas nacionales. A excepción de uno de los testigos aportados por la acusación particular, que manifestó no haber oído nada de banderas, los demás testigos reconocen que el denunciante habló sobre este tema, existiendo solamente diferencias sobre si existió jactancia en la manifestación y sobre si el denunciante manifestó que había participado en aquellos hechos". A pesar del resultado de dicha testifical, de por sí sólo suficiente para afirmar la veracidad de la información, en el sentido que la jurisprudencia de este Tribunal ha otorgado al término, sin embargo, las dos Sentencias ahora recurridas adoptan un punto de vista distinto al considerar que el hecho de que no se hubiera probado de forma suficiente la jactancia en las afirmaciones en el acto del juicio equivale de forma automática a la no veracidad de la información, y, en consecuencia a que la libertad de información no pudiera actuar como causa de exclusión de la antijuricidad del atentado al honor, conclusión que no puede ser compartida por este Tribunal.

Hay además un segundo elemento que tampoco ha sido valorado de forma adecuada, y que contribuye también a reafirmar la veracidad de la información. Se trata del hecho de que el recurrente en amparo no es el autor del escrito. Por el contrario ha quedado acreditado como hecho que se trata de una carta al director publicada en la sección "Vd. opina" del Bisemanario local "Igualada", y sobre la que el recurrente asume la responsabilidad únicamente en la medida en que como director de la publicación decide no revelar su autor, en aplicación de la cláusula del secreto profesional previsto igualmente en el art. 20 de la C.E. Es evidente que los directores de los medios informativos no adquieren la misma responsabilidad por la publicación de los escritos elaborados por los profesionales que en ellos trabajan que por los contenidos de los enviados por los lectores a las secciones destinadas a recoger opiniones e informaciones en principio ajenas a la

línea editorial de los medios. Ello no quiere decir que en estos supuestos los directores no puedan asumir responsabilidades, pero sí al menos que la diligencia profesional exigible a efectos de veracidad disminuye en relación al contenido de las informaciones elaboradas por los profesionales del medio. Pero es que, además, en el supuesto concreto que estamos enjuiciando, resulta patente la diligencia del ahora recurrente en amparo para constatar la veracidad de la información, ya que también ha resultado probado que autorizó su publicación como consecuencia de haber estado presente en el acto y en consecuencia tener una constancia directa de que los hechos narrados en la carta eran veraces.

3. En definitiva, tratándose de la difusión de una información que reúne las condiciones de veracidad exigidas por el Texto constitucional y que hace referencia a hechos de indudable interés público, es evidente que nos encontramos ante un conflicto de derechos constitucionales que debe ser resuelto a favor de la libertad de información, y que en la medida en que, tanto la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, como la del Tribunal Supremo no lo entendieron así, deben ser anuladas como forma de restablecimiento del derecho a comunicar libremente información veraz del recurrente.

## **F A L L O**

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional por la AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

Ha decidido

1º. Reconocer al recurrente el derecho a comunicar información veraz.

2º. Restablecerlo en su derecho mediante la anulación de las Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 8 de junio de 1989 y de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de abril de 1986, declarando concluso el procedimiento penal seguido contra el recurrente.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado"

Dada en Madrid, a dieciocho de enero de mil novecientos noventa y tres.

## **Anexo No. 2**

### **Código de Ética del periodista de la Unión de Periodista de Cuba**

#### **Introducción**

Al asumir la profunda aspiración martiana que preside la Carta Magna del país: “Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”; herederos de una tradición profesional en la que confluyen la vocación patriótica, revolucionaria y socialista, y las más elevadas responsabilidades éticas; identificados con los ideales de independencia de los pueblos, el desarrollo económico, social y cultural, el progreso, la paz y la amistad; solidarios con los colegas de todo el mundo que defienden sus derechos profesionales y alientan el ejercicio de un periodismo en favor del ser humano y su riqueza espiritual; conscientes de que el cumplimiento de nuestra función social exige actuar con celo profesional, consagración, responsabilidad y valentía para asegurar el derecho del pueblo a recibir una información ágil, exacta y completa sobre todos aquellos hechos que constituyen noticia o temas de interés, lo que implica, además, el deber de analizar, explicar y profundizar en los acontecimientos y emitir criterios que contribuyan a la orientación de la opinión pública; comprometidos con los valores de la familia y el respeto a la integridad moral de las personas, los periodistas de Cuba adoptamos el presente

**Código de Ética:**

Relacionados

Sobre las relaciones profesionales, laborales y sociales

Reglamento del Código de Ética

#### **CAPÍTULO 1**

##### **Principios generales de actuación**

**ARTÍCULO 1.** El periodista tiene el deber de defender e impulsar el contenido de los Estatutos de la Unión de Periodistas de Cuba y otros documentos rectores.

**ARTÍCULO 2.** El periodista tiene el deber de informar y expresar sus criterios con veracidad, agilidad y precisión.

**ARTÍCULO 3.** El periodista tiene derecho a obtener toda aquella información de utilidad pública, así como a realizar las acciones necesarias a ese fin.

**ARTÍCULO 4.** El periodista debe enfrentarse a aquellos actos de entidades o personas que obstaculicen el acceso a la información de utilidad pública o constituyan presiones que limiten en cualquier forma el cumplimiento de su deber profesional y social. En caso de diferendo, para defender su derecho se apoya en la dirección del órgano de prensa, en la Unión de Periodistas de Cuba, o dirigirse a cualquier instancia política, estatal o de la administración pública. También podrá denunciar tales actos en su órgano de prensa si la dirección del medio estuviese de acuerdo.

**ARTÍCULO 5.** En los escenarios mediáticos surgidos con el desarrollo de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con mayores posibilidades de generar contenidos, el periodista debe reforzar su desempeño ético y responsabilidad profesional en la creación, selección y difusión de los crecientes flujos de información interactiva que circula en red.

**ARTÍCULO 6.** El periodista en su órgano de prensa no puede hacer uso de los medios de comunicación y de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones en función de intereses personales o familiares con fines lucrativos, ilícitos o inmorales.

**ARTÍCULO 7.** El periodista no puede utilizar los medios de comunicación para desacreditar o difamar a personas e instituciones, ni para exaltar inmerecidamente a personas naturales o jurídicas. No es ético en el ejercicio de la profesión el triunfalismo, el hipercriticismo y la manipulación de la información.

**ARTÍCULO 8.** El periodista debe mantener una conducta laboral, social y moral consecuente con los principios y normas de nuestra sociedad.

**ARTÍCULO 9.** El periodista contribuye con su trabajo a promover los mejores valores nacionales, el cabal conocimiento de las leyes y el perfeccionamiento constante de nuestra sociedad socialista.

**ARTÍCULO 10.** El periodista defiende los principios de la Unión de Periodistas de Cuba expuestos en sus Estatutos y el presente Código de Ética, y exige que se promuevan, de manera democrática, las opiniones e inquietudes sobre la organización en sus asambleas de periodistas, plenos nacionales y congresos, que son los escenarios adecuados para ello.

**ARTÍCULO 11.** El periodista debe fomentar y cuidar las relaciones fraternales y de respeto mutuo entre colegas y entre los órganos de prensa, así como abstenerse de expresiones públicas que las denigren o menoscaben.

**ARTÍCULO 12.** El periodista tiene el derecho de exigir a la dirección del órgano de prensa respeto hacia su labor, en particular reclamar explicación cuando por aquella se retenga o decida no publicar un trabajo y, además, exigir que no se modifique, sin su consentimiento, el sentido de su trabajo y que si se hace se retire su firma.

**ARTÍCULO 13.** El periodista debe rectificar públicamente los errores difundidos que así lo requieran y sean imputables a su trabajo. La dirección del órgano de prensa tiene derecho a decidir sobre si procede o no la rectificación pública y en qué forma realizarla.

**ARTÍCULO 14.** El periodista tiene el deber de cumplir la línea editorial y política informativa del órgano de prensa en que trabaja y, a su vez, el derecho a participar en la elaboración, ejecución y evaluación de ambas.

**ARTÍCULO 15.** El periodista debe acudir a las fuentes necesarias para lograr una información veraz y completa.

**ARTÍCULO 16.** El periodista no podrá publicar directamente declaraciones o datos proporcionados por las fuentes con la advertencia explícita de que sirvan de antecedentes para la labor periodística y no para su publicación.

**ARTÍCULO 17.** El periodista se abstendrá de divulgar en todo o en parte cualquier documento o material de trabajo clasificado expresamente con un grado de reserva, según la legislación sobre el Secreto Estatal vigente en Cuba.

**ARTÍCULO 18.** El periodista tiene la obligación de no revelar la identidad de las fuentes que hayan solicitado permanecer anónimas.

**ARTÍCULO 19.** El periodista no puede utilizar las relaciones profesionales como medio de lucro o para obtener prebendas en beneficio propio o de otras personas.

**ARTÍCULO 20.** El periodista debe superarse cultural y profesionalmente. La superación es un derecho y un deber, por lo tanto, los afiliados con responsabilidades de dirección deben propiciar la superación y la capacitación de sus colegas subordinados.

## **CAPÍTULO 2**

### **Sobre las relaciones profesionales, laborales y sociales.**

**ARTÍCULO 21.** El periodista incurre en acto de plagio si suscribe, como propios, aquellos trabajos periodísticos que en todo o en parte hayan sido tomados de otros colegas o autores en cualquier tipo de medio. El periodista incurre en acto de plagio si suscribe, como propios, aquellos trabajos periodísticos que en todo o en parte hayan sido tomados de otros colegas o autores en cualquier tipo de medio.

**ARTÍCULO 22.** El periodista debe utilizar los espacios de los órganos de prensa de forma tal que no resulte lastimada la moral o la dignidad personal de otros periodistas, o que se denigre o rebaje la autoridad pública de cualquier órgano de prensa del país.

**ARTÍCULO 23.** El periodista, en caso de debates, críticas o polémicas, debe abstenerse en su trabajo profesional de emplear un lenguaje o tono irrespetuoso y ofensivo.

**ARTÍCULO 24.** El periodista en cargo de dirección debe tomar en cuenta las inquietudes, críticas e iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad y el nivel informativo de los medios y no puede valerse de sus atribuciones para ejercer acciones arbitrarias que perjudiquen moral o materialmente a sus colegas.

**ARTÍCULO 25.** El periodista puede ejercer el derecho de réplica sobre alusiones a su trabajo o persona publicadas en la prensa. Tiene, además, el derecho de publicar la respuesta en el mismo órgano de prensa donde se origina la polémica o, de lo contrario, en cualquier otro medio de comunicación del país.

**ARTÍCULO 26.** En los medios de comunicación, el periodista no debe hacer publicidad, promoción o propaganda comercial disfrazadas de periodismo. Para evitar interpretaciones erróneas o confusiones entre los públicos, el periodista utilizando su firma o seudónimos no debe publicar textos, fotografías u otro material gráfico y audiovisual con un carácter publicitario que no especifique claramente su naturaleza, es decir, haga una distinción formal y rigurosa entre periodismo y publicidad. Se exceptúan aquellas publicaciones especializadas y espacios en la prensa radial, escrita, televisada, digital o cinematográfica que tengan un perfil promocional.

## **DISPOSICIONES FINALES**

**PRIMERA.** El presente Código de Ética fue aprobado por el IX Congreso de la UPEC, el 14 julio de 2013, fecha de su puesta en vigor.

**SEGUNDA.** Este Código se complementa con su correspondiente Reglamento, que norma la estructura y procedimientos de las comisiones de Ética, así como la aplicación de las medidas disciplinarias.





La columna del lunes

## La injusta penalización del salario

Juanita Perdomo Larezada

Las erogaciones monetarias sin respaldo productivo van poco a poco camino de ser borradas de las estadísticas nacionales, como relevante saldo de la joven Resolución 17 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, regulatoria de las formas y los sistemas de pago en un elevado porcentaje del sector empresarial cubano.

A un año de su puesta en vigor como complemento de las medidas que otorgan mayor autonomía a la empresa estatal socialista, llevar a las nóminas dinero no sustentado en bienes y servicios, se considera hoy más que nunca, un pecado capital, por su innegable perjuicio y ruptura con las transformaciones que actualizan el modelo económico.

Verdaderamente, si nos atenemos a lo estipulado en la 17, presumiblemente solo su errónea aplicación conduciría a tan pernicioso indisciplina. Entonces sobreviene un lógico vendaval de análisis, inspecciones, directivos sancionados y hasta el reintegro por los trabajadores de lo ya cobrado, con su consiguiente disgusto.

Eso explica cuánto habrá que hacer para no rodar por ese abismo; por lo contrario, atenerse a las consecuencias si sucediera. Sin embargo, no suele ser lo mismo ni se exige igual si la relación se da en sentido inverso. Producción sin respaldo de salario, lo que implica una separación, a veces bien ancha y profunda, entre el valor creado y lo compensado.

En Matanzas acaba de ocurrir. Mientras la productividad del trabajo cerró en el primer trimestre en 118,8 %, el salario medio apenas alcanzó el 102, relación que satisfaría si la erogación hubiera ascendido a un 106 %, proporción ideal, dicen los economistas.

Que este sobrecumplimiento en la transformación de la materia prima y en la generación de servicios esté insuficientemente reflejado en el pago a los trabajadores, sugiere que los matanceros dejaron de beneficiarse en miles de pesos, a juzgar por los seis centavos ahorrados al gasto de salario por peso de valor agregado bruto, planificado en 41 centavos y ejecutado en solo 35.

Esta manifestación, para nada exclusiva del territorio yumurino, niega un principio elemental de la Resolución 17 y que justificó, entre otras razones, la derogación de su predecesora (la 9/2008), ganar en relación con el aporte individual o colectivo, propósito lejos de complacer, mucho menos a la población laboral que se desempeña en un sector que necesita despegar todo lo que pueda hacia la creación de riquezas y, en consecuencia, abrir puertas a los incrementos salariales en el presupuestado.

Las causas que provocan que la productividad crezca y que el ingreso no lo haga o lo haga con timidez, deben inquietar al movimiento sindical, muy en especial en la base, justo allí donde se crea el valor. Una mirada profunda apagaría la música que acompaña la letra de que la 17 "impacta" de manera positiva porque al bolsillo entró "más dinero", y este subió en relación con el año y el trimestre anteriores... cuando el monto es tan flaco que apenas se siente.

Que se favorezca la adecuada correspondencia entre el crecimiento de la productividad y el salario medio debe ser punto obligado en las asambleas de afiliados y de trabajadores, en las de representantes y, en lo esencial, en los consejos de dirección, que mes tras mes deben analizar el comportamiento de la 17.

¿Por dónde pudiera andar el distanciamiento entre estas dos categorías? Quizás en una incorrecta distribución monetaria, asociada, a priori, a errores metodológicos como la falta de estudios de organización del trabajo que optimicen el uso de la plantilla, o el irrespeto al derecho de incluir a los empleados en el beneficio de dos sistemas (a destajo y por resultados finales), por citar dos probables factores.

Al tratar de bucear en esta dicotomía, no pocos empresarios alegan pagar de acuerdo con la solvencia, lo cual es genuino, pero se sabe también que algunos manejan mal sus finanzas o aguantan demasiado la mano, so pretexto de protegerse de futuras contingencias o para sumarle pesos a lo que se repartirá al año siguiente, como estímulo a la eficiencia, el llamado mes 13.

Cualquier maniobra que se utilice no podrá ser en detrimento de los pilares de la 17, expresión de los Lineamientos del Partido y sòlida en el concepto de implementar sistemas con arreglo al trabajo, y apuntalados por diseños que respondan a ese elemental principio. Claro deberá quedar que si provechoso es que la productividad suba a las nubes, falta hacer además que el salario abandone el suelo.

Para que en ese punto confluyan ambas categorías, al sindicato no le queda otra alternativa que seguirle la pista a la distribución del dinero, un ejercicio de representación al estilo de un detective, necesitado de saber, llegado el caso, por qué se trabaja más y no se ingresa lo que corresponde. Dejar de pagar lo debido es otra forma de penalizar el salario.

## Cementerio de libros

La escasa seguridad y los problemas constructivos en uno de los almacenes de libros de la Universidad de Pinar del Río provocan que valiosos títulos sufran severos daños y algunos se pierdan completamente

Eduardo González Martínez

Comienza el período de lluvia y este lugar podría volverse un infierno o un cementerio. En los meses de mayo, junio o julio, ya no habrá quien proteja los libros, que, humedeciéndose, comenzarán a pudrirse fuera del almacén sin ventanas y con puertas de madera medio caídas. Dentro, quizá vivan igual suerte. Una muerte horrible, como suelen ser las agonías en la literatura.

Ahora, bajo el sol mañanero del tórrido clima cubano, por cualquier parte hay hojas de papel sueltas sobre la yerba. También carátulas de cotizados textos para estudios universitarios. Libros en la acera y a la intemperie o acumulados, unos sobre los otros, como las bajas en un campo de batalla en una fosa común. Incluso, de los árboles de flamboyán, cuelgan como frutos.

El escenario real maravilloso ante nuestros ojos corresponde a algunos locales habilitados por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca, para guardar los libros de sus carreras. Estos se ubican dentro de la antigua y popular área de festejos del Villamil, en la ciudad occidental, en la cual coinciden, además, instalaciones de Cupet y del Registro de la Propiedad.

El rostro serio, los gestos leves y las palabras de Rangel Rivera Torres, almacenero de la casa de altos estudios, explican que las penurias comenzaron hace unos meses. Retirar los custodios de allí hacia otro destino, por necesidades de la entidad, facilitó las libertades a quienes ahora se divierten con el desorden.

Este lugar entristece, llena de impotencia, como suelen hacer los cementerios. Quizás algún día venga a depositar flores sobre las tumbas que pueda identificar, entre tantas que yacen bajo el amontonamiento. No tienen inscripción que indique el precio, pero seguramente valdrán mucho, sobre todo, porque algunos de ellos escasean para los estudiantes.

Los nombres, por sí solos, indican su importancia, pues en su mayoría son muy



[fotos: Del autor]

reputados. Por aquí, yacen los restos de *La Investigación de la Comunicación de Masas*, de Mauro Wolf, casi una biblia para la carrera de Comunicación Social en Cuba. Por allá, la *Historia de la Filosofía*, de Nicolás Abbagnano, del cual, en mis años de estudios superiores, le tocaba un ejemplar a cada dos compañeros. En otro rincón apareció el *Panorama Histórico de la Literatura Cubana*, de Max Henríquez Ureña. Muchos dañados o semidestruídos.

Si llegara a tropezar dentro de los locales, caminando sobre la montaña de papel e ideas, usted podría caer de bruces sobre un colchón de libros. Quizás, sobre *Economía Política de la Construcción del Socialismo*, *Metodología de la Investigación Cualitativa* de Gregorio Rodríguez o *Metodología de la Investigación*, de Roberto Hernández Sampieri.

En la nave principal hay más orden, puertas y ventanas, pero ya se robaron el candado. A través de las celosías, manos inopinadas empujan las pilas de libros hacia el piso. Los otros locales, lo de la triste imagen onírica del

comienzo, son presa indefensa, sin ventanas o cerradura. Es fácil tomar lo que se quiera aquí, caminar sobre los libros o jugar a lanzarse sobre ellos. Nada, aunque sea simbólicamente, impide entrar a los almacenes improvisados.

Es costumbre, dice Rangel, que haya que empujar, nuevamente, cientos de textos al interior tras cada amanecer. La escena se remedará todos los días.

Quizás, nunca se debió llegar a esta situación. No habría que esperar a que, repetidamente, tantos títulos —conté más de 20 en solo poco tiempo— sean mutilados, las puertas destruidas, los candados robados. No cuando, dicen los apocalípticos, el libro impreso está amenazado de muerte. No si el sistema educacional cubano gasta tantos recursos para imprimir la bibliografía de sus estudiantes. No para que las páginas de *Crimen y Castigo*, el clásico de Fiódor Mijáilovich Dostoiévsky, sean restos en tierra de nadie.

Comienza el período de lluvia y este lugar podría volverse un infierno, un osario de páginas muertas, si alguien no hace algo.

## Anexo No. 3.2

### Comentarios generados en la página web del periódico Trabajadores por el artículo titulado *Cementerio de libros en la Universidad del Pinar del Río*, de 11 de mayo de 2015<sup>1</sup> (Efectos sobre la opinión pública)

#### 8 comentarios:

1. [pjmelián](#) dice:

[11 Mayo, 2015 a las 11:39](#)

Detesto este tipo de reportaje. Aunque 100% compartiendo el escozor del compañero González Martínez, hubiese preferido que se mostrase el estado previo de esta entidad y los pseudo responsables, pues los individuos mediocres pésimamente administrando el local tienen nombres y deben estar mezclados en la muchedumbre, que es la mejor madriguera y refugio de los incompetentes e incapacitados, y seguramente vociferando insensata y desfachatadamente los logros de la revolución, que su falta de talento administrativo y consciencia revolucionaria la ha, precisamente, conducido a esta hecatombe literaria. ¡ EL DELINCUENTE DEBE PAGAR POR SU FECHORÍA !

pjmelián

[Responder](#)

2. **guisver rolando** dice:

[12 Mayo, 2015 a las 15:37](#)

y entonces decimos que la culpa la tiene el bloque, quisiera que dentro de un tiempo este mismo reportero hiciera otro de quien es el culpable y que medidas tomaron... les adelanto que no pasara nada porque buscar a un culpable va hacer difícil, es lamentable como nuestro gobierno, el MES se esfuerza por que nuestros universitarios tengan esos textos y miran como terminan, seguro estoy que si hacen una encuesta hay centros educacionales, sede municipales que tienen déficit de textos que estan es esas fotos...

[Responder](#)

3. **laines** dice:

[13 Mayo, 2015 a las 9:05](#)

Estamos promoviendo la importancia de la lectura en nuestro país, rescatando en nuestros niños el interés por ella, a través de la feria del libro, de las noches de los libros, pero con estas imágenes que ejemplo le estamos dando me parece estar viendo las imágenes de Hitler quemando los libros, me dan pena estas imágenes, pensar que esas cosas estén pasando en nuestro país, donde están los responsables, porqué hemos permitido que esto haya llegado a este nivel de destrucción, si el local tenía problemas porqué no lo repararon a buscaron un mejor lugar donde guardar esa base material de estudio.

[Responder](#)

---

<sup>1</sup> Consultada en <http://www.trabajadores.cu/20150510/cementerio-de-libros-en-la-universidad-del-pinar-del-rio/>

4. **tf** dice:

[13 Mayo, 2015 a las 11:32](#)

bueno pero, y quién quitó los custodios? quién no llamó a la pnr y volvió a poner los custodios el primer día que robaron o rompieron la puerta? quién no audita o verifica los insumos o almacenes de la universidad? quién no atiende el problema político que encierra, en un país donde la educación es gratuita según proclamas y cuesta, dejar que se dilapide el patrimonio estatal y social?

esas preguntas tienen que tener una respuesta, y una sanción.

no puede ahora resolverse con guardias o movilizaciones políticas de estudiantes o trabajadores. alguien en algún sitio, es el responsable de tamaño desorden y atentado al conocimiento.

[Responder](#)

o **pedroso61** dice:

[15 Mayo, 2015 a las 13:41](#)

no me ha cogido de susto este tipo de problema pues se ve cotidianamente en mucha de las empresa de nuestro pais que lamentablemente dan al trasto con resultados iguales o peores que esto, pues no se escucha al que trabaja directamente donde se originan los problemas, solo tiene la potestad y solucion los dirigentes que vienen con sus novedosas teorias bajo el brazo para implantarlas sepan o no la esfera que van a dirigir. Nadie se imagina la gran cantidad de informacion, enseanzas, y aprendisaje que se esta perdiendo y que costaron dinero al estado, y asi sucede cada dia en la mayoria de los trabajos

[Responder](#)

5. **anonimo** dice:

[15 Mayo, 2015 a las 13:52](#)

El mayor responsable el rector y junto con el toda su camarrilla. Eso no tiene nombre en los 70 y pico botaron todos los libros de Matemática 7,8 y 9 grado en todo el país más otros . Luego habia que dar 10 libros por aula. Esto es malversación. por favor no le echen la culpa a los americanos ni al bloqueo.

[Responder](#)

6. **Tairys** dice:

[15 Mayo, 2015 a las 14:20](#)

Es bien difícil encontrar un culpable para tal indisciplina, pues ahora la Culpa es de la Vaca, esperemos que le den solución a tal situación. Quisiera saber cual es la opinión de los estudiantes de la Universidad que son los más afectados con esta situación.

[Responder](#)

7. [Rosa C: Báez @LaPolillaCubana](#) dice:

[16 Mayo, 2015 a las 16:02](#)

Como bibliotecaria, siento una profunda rabia y una infinita vergüenza: **Esto es como para denunciar en la PNR por destrucción de la propiedad social!** Como dice Melian, **que se sancione a los culpables y que tengamos respuestas ya!**

[Responder](#)

8. **profesorauniversitaria** dice:

[19 Mayo, 2015 a las 9:44](#)

Creo que nadie se escuda en las limitaciones reales que representa el bloqueo para los cubanos, este fue un incidente bastante lamentable para la dirección de la UPR. Como profesora del centro creo que debo anunciarles que ya se están tomando medidas desde la máxima autoridad. Se han realizado intercambios con todos los implicados en el asunto, donde ya se aclaró que la cobertura de bibliografía impresa de todas las carreras de la FCSH está garantizada, lo cual no justifica, no obstante, el estado de deterioro en que se encontraban algunos textos.

**Lo cierto es que la Universidad pinareña trabaja para solucionar este problema, el cual no dejamos de reconocer, nunca debió suceder. En tanto, como primera medida se decidió, recoger de inmediato los libros almacenados y ponerlos a buen resguardo y se prevé la reubicación permanente de un custodio en dicha instalación.**

Además, para esclarecer las causas se creó una Comisión Administrativa. De igual manera la UPR trabajará en conjunto con los medios provinciales y los corresponsales de los medios nacionales, así como con su Grupo de Comunicación Institucional para divulgar los resultados de estas investigaciones.

La Universidad reconoce los problemas de gestión que ocasionaron tan lamentable situación y manifiesta la voluntad de subsanarlos de inmediato y aplicar las medidas disciplinarias pertinentes.

[Responder](#)

**Escribir comentario**



## Anexo No. 3.3

### Artículo de seguimiento a *Cementerio de libros*

TRABAJADORES | nacional@trabajadores.cu

NACIONALES | 02

lunes 1º de junio del 2015



La columna del lunes

## Nada hay más importante

| Francisco Rodríguez Cruz

La prioridad que el Estado cubano concede al cuidado y formación de las niñas y los niños es una realidad palpable y fácil de corroborar, aunque nunca debemos conformarnos, y es imprescindible mantener un estrecho seguimiento de cómo las actuales transformaciones en las políticas económicas y sociales influyen en el bienestar de la infancia.

Pensemos simplemente en cuántos cientos de miles de trabajadores laboran en nuestro país en función de satisfacer las diversas necesidades de la niñez, incluso antes de que nazcan.

Casi todo en materia de la infancia parecería ya pensado, desde el amplio y universal programa de salud pública que tanto énfasis hace en la atención a las mujeres embarazadas y en los servicios pediátricos, hasta el complejo sistema educacional que comienza a incidir sobre niñas y niños desde las edades preescolares, ya sea en los círculos infantiles o por las llamadas vías no formales.

No debemos olvidar tampoco el diversificado entramado cultural y deportivo del país, o las opciones para la recreación que, aunque todavía resultan insuficientes y dispares en su alcance territorial o entre sectores poblacionales desfavorecidos socialmente, tienen en muchos casos como principal público destinatario a nuestros párvulos.

Todas esas personas que laboran en función de la calidad de vida espiritual de las niñas y los niños aportan tanto o más que quienes producen bienes materiales o servicios tangibles. Fabrican la base de los saberes y los afectos infantiles, de sus sueños, esperanzas y futuro.

En particular en el ámbito laboral, el nuevo Código de Trabajo que entró en vigor hace casi justamente un año, reitera con especial énfasis varios principios indeclinables en relación con la niñez y la juventud cuya observancia tenemos que vigilar cuidadosamente.

La prohibición del trabajo infantil y la protección especial a los jóvenes entre 15 y 18 años de edad que se incorporan al trabajo son asuntos muy sensibles sobre los cuales las autoridades pertinentes y también el movimiento sindical deben ejercer un mayor y efectivo control.

Con la ampliación y consolidación del trabajo por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal, muchas veces bajo modelos de organización y participación familiar, podrían estar emergiendo tendencias indeseadas o casos puntuales de niños o niñas y adolescentes que por trabajar, ya sea en apoyo de sus padres, parientes o de otras personas que les retribuyen por esa labor, descuidan sus deberes escolares y otras actividades formativas propias de su edad.

Esta preocupación no niega la importancia de que familiaricemos desde edades tempranas a la niñez y la juventud con la necesidad del trabajo, o de inculcar actitudes, forjar aptitudes y hábitos de laboriosidad entre nuestros infantes, valores cuyo rescate y fomento son esenciales en la sociedad cubana.

Los círculos de interés, los palacios de pioneros, los talleres vocacionales, el propio trabajo voluntario en las escuelas y la comunidad, entre otras iniciativas probadas que incorporan habilidades laborales con una perspectiva pedagógica o de participación ciudadana, son vías y métodos que debemos mantener, y algunos de ellos recuperarlos del olvido y la desidia, para fomentar el amor al trabajo.

Pero no sería admisible confundir esa orientación vocacional hacia las labores productivas con el descuido, ni por un minuto ni en un solo caso, de ese principio elemental de protección a la infancia que refrenda nuestra ley laboral, y que deben cumplir no solamente las entidades estatales, sino también las modalidades emergentes de empleo particular.

Otras iniciativas e instrumentos jurídicos en función de revisar, ampliar y consolidar los derechos de la niñez tienen que seguir en la mira de nuestras organizaciones de masas, legisladores e instituciones, como podría ser la demorada actualización del Código de Familia, para poder atemperarnos a nuevos compromisos internacionales y evidencias científicas y sociales en materia de protección a la infancia.

Todo lo que hacemos y hagamos en Cuba, en fin de cuentas, no solo debe buscar resultados económicos cuantificables, sino prodigar mayor bienestar material y espiritual, en una sociedad donde todavía repica aquel axioma de Fidel siempre vigente: nada hay más importante que un niño.

## Tras el rastro de los libros

Siguiendo las huellas de los cientos de textos de la Universidad de Pinar del Río, expuestos a las inclemencias del mal tiempo y el daño de las personas

| Eduardo González Martínez

Por estos días, los almacenes en mal estado que dieron origen al trabajo Cementerio de libros se encuentran vacíos y las áreas aledañas limpias de los textos desparramados por doquier.

Por fortuna para todos no llovió antes y se rescataron de la destrucción segura la mayoría de los ejemplares, entre los cuales estaban clásicos como *Crimen y Castigo* y *Macbeth*, así como *Metodología de la Investigación*, y *La Investigación de la Comunicación de Masas*.

Desde el día 12 de mayo la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca (UPR) creó una comisión para revisar el inoportuno escenario, cuyas respuestas Trabajadores esperó para completar el seguimiento al tema.

Los ejemplares en cuestión, hoy bajo responsabilidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, pertenecieron al Centro Universitario Municipal de San Luis antes de ser trasladados al lugar que dio pie a los hechos conocidos.

Ahora, tras los sucesos, cambiaron nuevamente su ubicación en la antigua área de festejos del Villamil hacia un local habilitado en el espacio de otros almacenes de la institución, todavía sin todas las condiciones adecuadas pero, al menos, con cuidado y custodia.

“Movimos camiones de libros en cuatro o cinco días para un local donde radicaba una planta de tratamiento de resina de pino, hasta ver qué solución se le da en el país a este tema de los libros en inventario de las universidades. Allí tampoco están completamente protegidos, pero el ambiente social es más tranquilo”, explicó Yorky Mayor Hernández, rector de la Universidad.

Las causas de lo ocurrido son varias. Los custodios fueron movidos a fines del 2014 para reforzar otros lugares sin

nada que minimizara posibles riesgos. El término de ociosos —se refiere a aquellos libros sin uso en almacenes— provocó un clima de “confianza” excesiva y en esta va implícito el peligro. También se evidenció la existencia de un problema organizativo y falta de control en distintos niveles que no permitió chequear la calidad del servicio a los estudiantes en el almacén.

“No accionamos como debíamos porque se nos transmutó que podían ser cosas de

Esto provocó el hastío de quienes se dirigieron en varias ocasiones de manera infructuosa a buscar los textos donde correspondía y terminaron, en muchos casos, estudiando por archivos digitales o materiales conseguidos por los profesores o el departamento de la carrera. Ellos exponen también sus deseos de que les sean entregados los libros una vez que terminen sus estudios o incluso les sean vendidos.

La UPR, explica el rector, se encuentra literalmente



Trabajadores de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca recogen los libros abandonados y desechan los que ya no sirven. | Foto: Del autor

niños, juegos. La Facultad no sabía la situación final. Quizás teníamos que haber ido allí con frecuencia”, añadió Mayor Hernández. Además, continúa, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas no interiorizó la responsabilidad con el lugar ni el alcance de las funciones del almacenero.

La dirección de la Universidad reconoce los problemas de gestión que ocasionaron tan lamentable situación y se tomaron medidas disciplinarias que van desde amonestación hasta cambios temporales de puesto laboral.

Las necesidades básicas de bibliografía están cubiertas en el almacén, consta en las encuestas, pero según indagó Trabajadores, en distintos años de la carrera de Periodismo, los estudiantes manifestaron la inestabilidad reinante en su entrega.

atestada de libros ociosos, pues acumula 1 millón 700 mil pesos en base material de estudio, de la cual los textos son mayoría. La cuantía es alta si se tiene en cuenta de que se calcula por el valor de costo de los libros (apenas entre 60 centavos y un peso).

Desde hace unos meses se buscaba solución y como posible recurso se pensó entregarlos a Materias Primas, que, por suerte, no pudo recibirlos.

“Tenemos algunos que pueden ser usados por la educación media, pero ellos no tienen dinero para pagar”, añade Mayor Hernández.

Una idea plausible que será aplicada —debió ser la primera opción— es la de entregar gratis una pequeña biblioteca a estudiantes y profesores. Esto, afirman en el centro, se gestaba previo a los incidentes mencionados y cuenta con la autorización requerida.

## Esta tarde, Mesa Redonda *Comenzando la semana*

El impacto del escándalo de corrupción que envuelve a la Fifa y la situación mundial de la infancia, en su Día Internacional, serán los temas principales de la Mesa Redonda de hoy, que también contará con su habitual sección La Esquina.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche, y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.



## ¿La niña pobre?



Por Yolanda Molina Pérez

**U**NA compañera de aula le preguntó: "¿En tu casa son tan pobrecitos que no tienen *microwave*?", y la niña llega portando la inquietud por la economía doméstica. La madre trata de explicar, pero es difícil hacer entender a una pequeña preadolescente, que los rangos establecidos por su grupo etario no son correctos.

En esa familia la tenencia de uno u otro artículo no es lo más importante, sin embargo, se sientan a la mesa juntos, ayudan con las tareas, se mantienen al tanto de las necesidades escolares y hay una excelente comunicación entre padres e hijos, como prueba el hecho de que confía la inquietud a su progenitora.

No presumen de modelos o perfectos, pero intentan apegarse a las cosas que la vida les ha mostrado son las más importantes, y al margen de posibilidades financieras para adquirir cualquier bien material, prevalece el interés por el bienestar de todos los miembros del clan.

En la casa no hay ostentación, pero tampoco carencias perentorias. No obstante, los raseros fijados por otros pueden revertirse en problemas hacia lo interno, porque no es un secreto que la aceptación del grupo prevalece sobre la de la familia y la crueldad con que pueden expresarse niños y adolescentes tampoco es algo desconocido.

Hay para quienes la acumulación de bienes materiales es el propósito de vida, y confunden la tenencia con la felicidad. Lamentablemente no son pocos y es hasta entendible: varias de las generaciones que hoy son padres sufrieron en su juventud o edades más tempranas los años recios del periodo especial y en un zafarrancho contra "el yo no tuve" intentan vengarse con saña y alevosía.

Si la acumulación de objetos les compensa, bien por ellos, pero transmitirlas esa cosificación a sus hijos es harina de otro costal. De buenas intenciones está empujando el camino al infierno, según reza un viejo proverbio, y en el afán de ponerlos a salvo de carencias, los van dejando desnudos de alma.

No digo que la pregunta formulada por la pequeña haya sido una réplica de un pensamiento adulto, pero sí es la percepción que tiene del entorno que la rodea. Quizás en unos años la cuantificación de las propiedades sea su patrón para elegir amistades.

La "pobre niña" que no tiene *microwave* sí es propietaria de numerosos libros, y lo mejor; ella los lee. Sus títulos de cabecera son *El diario de Ana Frank*, *Corazón* y *La Edad de Oro*. Es una excelente estudiante, le interesan los temas de ciencia ficción y los idiomas.

Aunque todavía no concluye la enseñanza Primaria, puede verse series, películas y documentales en inglés sin necesidad de subtítulos. También tiene responsabilidades hogareñas, acorde a su edad, por supuesto, pues está educada en el principio de que todos deben ayudar.

Maneja con destreza los cubiertos, sabe cómo atender a quienes llegan a su casa o llaman por teléfono. Ella como su familia no es perfecta, alguna que otra vez desobedece y requiere regaños, hay que regularle el tiempo frente a la computadora, ya que como casi todos los de su generación, se siente muy atraída hacia las nuevas tecnologías.

Y no suscribo que tener un *microwave* te haga carente de las virtudes que posee la niña, sino que es irrelevante a la hora de valorar su riqueza personal, porque ya lo dijo Martí de modo insuperable: "Quien tiene mucho adentro, necesita poca afuera".

Ojalá y todos los pequeños en Cuba gozaran de comodidades hogareñas, artículos y medios que eleven el confort y la calidad de vida, pero se cuentan por centenas y miles, las casas donde impera la austeridad, que no es lo mismo que la pobreza. Es prioritario transmitir a nuestros hijos esa percepción y no solo desde las palabras: hay que erigir tal enseñanza con el ejemplo cotidiano.

Tampoco es asunto de que quienes puedan adquirir determinados patrimonios carezcan de ellos por el qué dirán o, algo peor, una presunción falsa de ascetismo, sino que recordemos que al venir al mundo lo hacemos desnudos y al irnos no llevamos mucho en el fétetro, así que más vale dedicar cada minuto a gozar la vida que a intentar cosificarla, porque los mayores placeres se anidan en bienes intangibles como el amor, la sabiduría y la felicidad.

## ORILLA DEL ALMA

## Petición de mano



Por Leopoldo Montano Cortina\*

**D**URANTE la Campaña Nacional de Alfabetización, en la que tuve el privilegio de participar, me hermané con los campesinos, supe de sus sufrimientos y anhelos, participé en el laboreo de la tierra y de ellos disfruté de una tradición cultural que se construye diariamente.

Me contaron entonces que allá en Las Palizadas, perteneciente al pinareño municipio San Luis, un campesino nombrado Eduardo, propietario de una pequeña extensión de tierra que hacía producir solo, pues no tenía hijos varones, era padre de dos hermosas jóvenes, que celosamente cuidaba.

Las visitas a su casa eran pocas, y mucho menos si se trataba de hombres. Y cuando esto sucedía, la conversación entre el visitante y Eduardo transcurría en la puerta de la cerca que con cuatro pelos de alambre rodeaba su finca o en el techado de pajas de guano y sin paredes que había construido en la parte posterior de su casa. Por supuesto que en esas ocasiones, la esposa e hijas permanecían ocultas en la casa, tal era la paterna costumbre impuesta.

Todo hacía pensar que en esas circunstancias nadie se atrevería a cortejar a alguna de las hijas de Eduardo, pero la lógica más formal puede ser transgredida por el poder del amor.

Era Israel joven trabajador, honrado, conocido por todos los pobladores del barrio, quien estaba resuelto a convertir en su esposa a una de aquellas bellas muchachas. ¿Cómo se conocieron, en qué momento se enamoraron? Es y seguirá siendo un secreto.

Lo cierto es que decidido Israel a formalizar aquel noviazgo y contando con las credenciales que lo avalaban, se presentó un día ante Eduardo, quien, contrariado por haber tenido que detener sus habituales faenas en el campo, atendió al joven, según el protocolo, primero en la cerca, y, ante la insistencia de que algo

muy serio y responsable tenía que decirle, pasaron al fondo de la casa.

Bajo el techo de guano Eduardo le ofreció al visitante un taburete para que se sentara, mientras él permanecía de pie.

A pesar de la fresca brisa mañanera de un día cualquiera de diciembre, Israel sudaba copiosamente, y estrujaba sus manos una contra otra. El impaciente y celoso padre miró hacia la casa para cerciorarse de que las mujeres no se encontraban a la vista del joven, y dispuesto a terminar rápidamente la conversación le dijo:

—¿Qué le trae por aquí, Israel?

—Bueno, Eduardo, yo quiero pedirle algo muy serio y respetuosamente.

Eduardo se quitó el sombrero y pasó la mano muy lentamente por su cabeza, tratando de calmar un poco las ideas que se atormentaban en ella. Finalmente le dijo a Israel:

—Me parece que esta conversación reclama que acabe usted de decirme, sin más rodeos, lo que quiere decir, pues tengo poco tiempo y mucho trabajo.

Era claro el ultimátum, había que ir rápidamente al grano, pero Israel, temeroso no sabía cómo empezar, lo que sí sabía cómo podía terminar...

—Israel, lo conminó nuevamente Eduardo, no tengo todo el día para esto.

—Perdone Eduardo, ya decidido Israel a hablar, el asunto que me trae a su casa es que yo...

Yo quiero pedirle la mano... Ni la embestida de un toro hubiera tensado tanto los músculos del embravecido Eduardo. Frente a la palidez de Israel, resaltaba aún más la enrojecida cara del padre, quien, interrumpiendo bruscamente al joven, indagó:

—¿De qué mano me está hablando usted, Israel?

Para Israel en ese momento el cielo y la tierra se unieron y solo atinó a responder temblorosamente:

—Espérese, por lo que más usted quiera, Eduardo, si yo lo único que quería pedirle era la mano... la mano... de plátanos que tiene usted colgada en el bohío.

—Mira Israel, gruñó Eduardo, yo le voy a dar a usted mano de plátanos... Piérdase de todo esto, ¡Mira que venir a molestarme para eso!

Según contaban, el frustrado novio salió rápidamente de los límites de la finca, apremiado por el ladrillo de los feroces perros de Eduardo. Y se dice que no hubo quien le hablara nunca más de plátanos a Israel.

\*Profesor de la escuela militar Camilo Cienfuegos.

## BUZÓN ABIERTO

Por Ariel Torres Amador

### INCONFORMIDAD CON DIPLOMA DE GRADUACIÓN

La presente misiva la envían 45 graduados en licenciatura en Lenguas Extranjeras (Inglés con segunda lengua) a nombre de Addiel Arango Thomas, vecino de Rafael Morales número 388, entre Justo Legón y Lázaro Acosta, debido a errores en sus títulos universitarios.

"Resulta preocupante que el nombre de la carrera de nuestros diplomas de graduación no tenga correspondencia con el de la carrera vigente en la certificación de notas y el establecido en el plan de estudios.

"Nos dirigimos a ustedes pues en la casa de altos estudios Hermanos Saiz Montes de Oca no han sabido

darle solución ni respuesta a este error, desprecupándose del tema".

### ¿HASTA CUÁNDO LA REVENTA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN?

Manuel Ordaz Martínez, residente en calle número cinco entre Cuarta y Quinta del reparto Comandante Pinares, en el kilómetro uno y medio de la carretera a Viñales, plantea que su inquietud radica con lo que sucede en el rastro ubicado al fondo de la gerencia general de Cimex, pues allí existe un grupo de ciudadanos, apodados "Los Buitres", que se dedican a pasar sus días a la espera de la entrada de cabillas y cemento entre otros materiales, con el fin de acapararlos todos y después revenderlos a la población.

"Este asunto no es nuevo para nadie, pero ya va siendo hora de que el Gobierno le ponga freno a tantos inescrupulosos y tome medidas al respecto".

Manuel narra en su carta cómo el viernes 31 de marzo entró una rastra con cemento al rastro, y al preguntar al administrador le informó que seguramente lo venderían el sábado. Cuál sería su sorpresa al llamar nuevamente y enterarse por una trabajadora del lugar que todo el cemento se lo habían vendido a quienes descargaron la rastra.

"Espero se analice críticamente esta situación, pues resulta increíble que nadie vea, o quiera ver, cómo las cabillas las revenden a 150 pesos la tira (de 89 que valen) al igual que el cemento (el saco a 150 pesos) y el pueblo tenga que pagarlo a ese precio por no quedar más alternativa".

### DE BUENA FE

María Nereyda Triguero Veloz nos escribe esta semana para agradecer un gesto que según sus palabras casi no se ve en nuestra sociedad.

"El día 29 de marzo se extravió la cartera de mano de la anciana Caridad Veloz Hernández, vecina de Adela Azouy número 100, en un ómnibus perteneciente a la base de Transportes Escolares de Consolación del Sur. Dicha guagua, era la número 08, con chapa B080200, del chofer Alexey Díaz Márquez.

"Ya ella daba por perdida su cartera cuando este chofer se personó en su vivienda y le devolvió sus pertenencias de forma íntegra. Con este gesto podemos apreciar que no todo está perdido, pues aún quedan en nuestra sociedad muchos hombres y mujeres que llevan en sus hombros la dignidad y el decoro de todo un pueblo. A esos que como Alexey nos nutren cada día con sus ejemplos va dedicado este reconocimiento".



## La enemiga pública número uno



Por Ariel Torres Amador

**M**E la he encontrado muchas veces. Y aunque no pudiera decir que le simpatizo, pues ella no hace migas con nadie, sí aseguraría que la conozco bastante bien, quizás lo suficiente para llamarla sin escrúpulos por el nombre que merece, y rerarla a comparecer frente a la justicia y al sentido común.

Su rostro impávido, confuso cual "Mona Lisa", puede esconderse tras la más excitante, seductora y complaciente de todas las sonrisas, bajo un bosque pronunciado de bigotes y cejas tupidas, o cabezas lisas y amplias barrigas.

Lo cierto es que muy en el fondo, su silueta es burlona, cínica, mandataria de las insensibilidades y las malas interpretaciones, madre esquivo de los reglamentos y esposa de la indiferencia, los papeles, cuños y firmas excesivas.

La Burocracia, donde bureau significa escritorio, y el sufijo cracia, del griego (krátos), traducido como gobierno, dominio o poder, es un mal del que todavía no hemos logrado desprendernos. Muchos son los años que ha tenido para aplanarse y echar raíces profundas en nuestra cultura.

Tal es así, que un poco de "alimento" basta para que este monstruo tome vida propia, como lo advirtiera José Martí. Un ente que se hace imprescindible porque ha creado tantos trámites absurdos, que se necesitan cientos de miles de oficinistas llenando formularios y emitiendo certificados solicitados por otros oficinistas.

Que levante la mano o tire la primera piedra quien no haya dado "millones de carreras" en busca de una fir-

ma o sufrido el "peloteo" de algún burócrata.

Así, sin más explicaciones y mucho menos detalles, la burocracia te indica que "esto no es aquí"; "no te puedo ayudar"; "te falta un sello"; "debes remitirte nuevamente a esta o mas cual oficina". Para usted más complicaciones, para "ellos", una jornada laboral cualquiera.

Al final, a modo del permiso "A-38", como el de la famosa película animada de **Los doce trabajos de Asterix**, usted bien pudiera terminar frente a la primera oficina donde tocó, quizás para empezar nuevamente el mismo papeleo.

La interrogante está entonces en cómo combatirla. Evidentemente la solución debe residir en enfrentar responsabilidades para evitar el vil atropello al ciudadano común.

A modo de sugerencias, reducir la cantidad de pasos para culminar cualquier trámite y premiar a quienes logren el mejor diseño, así como instaurar fechas límites (cumplibles y sancionables) serían las estrategias perfectas.

Asimismo, divulgar los mecanismos utilizados por funcionarios públicos con alto reconocimiento de la población, y aplicar a ellos pagos por concepto de resultados cuantitativos y cualitativos.

A la par, alcanzar una participación más efectiva de los ciudadanos en el diseño y evaluación de los resultados de los procesos burocráticos, lo cual dará al traste con la aplicación de un complejo de medidas que permitan disminuir las tantas trabas rutinarias e ir eliminando ese mal de antaño, al que día a día nos toca combatir.

## ORILLA DEL ALMA

## Traído por los pelos



Por Luis Sexto

**Y**O me peino de memoria. Lo escribo, y recuerdo a mi amigo Juan Ángel Cardí, impetuoso humorista que cierta vez lo declaró refiriéndose a que yo no necesito espejo y hasta puedo prescindir del peine. Porque soy como dice el refrán que pintan la ocasión: calvo.

Calvo es una palabra maldita. Menos cuando se usa como apellido. Los apellidos se subordinan ante su palabra matriz. Y adquieren una personalidad con valor propio. Renuncian a la semántica. Si uno pronuncia el apellido Cabezon radie pensará en el fenómeno del mismo nombre. Ni reíría con malicia al conocer, en una lección de historia de América, las hazañas conquistadoras de Cabeza de Vaca.

Cuando, en cambio, opera como un adjetivo, y se pega con toda su depilada desnudez a un cráneo deslechado, equivale a un vocativo insultante dicho a gritos por ciertas personas—de pelo largo e ideas cortas, como sentenciaría el filósofo—que viajan desaholadamente en ómnibus y camiones.

El chiste a veces es más noble. Pero siempre traslada un clavo embozado. Recuerdo cuando pedí un cepillo para el cabello a Aramis Ferrera, fotógrafo de ojo fino y oficio mágico. Andábamos en una de esas giras en las que los periodistas adoptamos las costumbres de artistas y trabajadores de circo. Compartíamos la habitación. Nos preparábamos para comer. Y quise peinar-me antes. Sonrió con diente irónico, y me alcanzó el cepillo advirtiéndome:

—Cuidado no te lastimes el cerebro. Otro amigo—aunque con ánimo consolador—fue más agresivo. Me dijo que los calvos rendíamos una utilidad pública: servíamos los domingos de puntos de referencia en los estadios colmados.

Los únicos que ahora no dirán una frase burlona o condescendiente sobre los calvos son los barberos. La razón, obvia. Somos clientes que pagamos la tarifa oficial, incluso más, a cambio de menor trabajo. Quizás cuando la ley intervenga para enmendar la injusticia y rebaje la mitad del precio para las cabezas calvas,

esos cirujanos de la periferia empezarán a des-acreditarnos, y nos negarán disimuladamente el turno para poner nuestra miseria capilar bajo sus tijeras y su conversación. Aunque conozco a uno que defiende el mismo precio, incluso mayor, para los alopecicos. Figúrese, me replicó, con usted debo demostrarme más, sudar mi estrés, porque puedo caer en un deslizo. Tal vez haya que exigirse seguro antes de que se sienten bajo nuestros instrumentos.

Ser calvo viene siendo, a fin de cuentas, como una maldición bíblica. No dudo que algún contemporáneo de Abraham o Moisés haya querido dotar de una dosis de fantasía a aquella existencia apacible y aburrida de pastores, y concibiera una forma distinta y por ello audaz de hacer el amor. Y la Ley, horrorizada por tal quebrantamiento de la posición y la técnica estatuidas, lo condenara, junto con su descendencia según prevalea el código judaico, a exhibir la cabeza desamparada de toda sombrilla plica.

La humanidad, visto el asunto con rigor histórico, ha venido perdiendo pelo. Se observa en esa escala morfológica que de vez en cuando reproducen las revistas. Desde el primario homínido hasta el Homo Sapiens, el hombre dejó en su trayecto evolutivo estimables volúmenes de pelo.

Y parece que el desprendimiento proseguirá. ¿Por qué, si no, los escritores y dibujantes de ciencia ficción describen a los hombres de la posteridad, incluso a las damas, con la cabeza tan lisa como bala de cañón colonial? Dada por segura esa previsión, los calvos del presente somos los pioneros, los anticipadores del porvenir. En un futuro todavía incalculable, lo que gritarán las personas de pelo corto y de ideas también breves, a ciertos transeúntes, será una mofa insolita y contrastante en nuestro tiempo:

—¡Peludo...!

Todo, desde luego, no supone desolación. Los calvos también gustamos. Al menos por el atractivo de suscitarse el recuerdo, según se infiere de la anécdota protagonizada por mi mujer, a quien una vecina le preguntó qué me había visto de agradable para casarse conmigo. Zenaida tuvo lista una pregunta similar para contestarle (el esposo de la curiosa era cojo). Pero renunció a herir con la misma estocada, y respondió:

—Bueno, cuando nos casamos tenía pelo.

Y desde ese día sospecho que mi esposa me ama como yo me peino: de memoria.

## BUZÓN ABIERTO

Por Ariel Torres Amador

### RESPONDE UNIVERSIDAD

#### A ABDEL ARANGO

Aquí está la respuesta de la universidad Hermanos Saiz Montes de Oca a Abdel Arango Thomas, referida a la incomodidad con su diploma de graduación y el del resto de sus compañeros.

La presente réplica, firmada por el rector de la mencionada alta casa de estudios, Yorki Mayr Hernández, explica que durante el curso 2015 - 2016 se graduaron en la carrera de Licenciatura en Educación Lenguas Extranjeras (Inglés con segunda lengua) un total de 41 profesionales, a los que por error se les colocó en el título del nombre de la carrera Licenciatura en Educación en Lenguas Extranjeras.

"Inmediatamente después de la graduación atendi en mi oficina a un grupo de graduados que me manifestaron su opinión y preocupación al respecto. En aquel momento les expliqué que este problema sería revisado y resuelto si la preocupación era justa. Les expuse que se incorporaran a sus servicios sociales, pues su ubicación no peligraba por el error que pudiera existir en el nombre de la carrera".

La carta explica que a partir de ese instante se comenzó un proceso de revisión, y que ciertamente la preocupación de los graduados era real.

"Procedimos entonces a solicitar la impresión de los 41 títulos de dicha graduación junto con los de la graduación 2016 - 2017, pues la reproducción de estos títulos antes de esta fecha no nos pareció factible. Además, lo estipulamos así debido a que ninguno de los egresados había tenido problemas en su desempeño laboral y la contratación de los rotulistas para elaborar los títulos solo se hace en la etapa mencionada.

"Considero que se ofreció una respuesta oportuna y que la dirección de la Universidad no se mantuvo ajena al problema".

Al cierre, según informó el rector, a partir del lunes 15 de mayo los graduados de ese curso pueden pasar

por la secretaría general de la Universidad a recoger el título con las correcciones hechas y deberán presentar el título anteriormente entregado.

### FALTA DE RIGOR EN LA

#### DISTRIBUCIÓN DE PAPAS

Jaime Jesús Machuat Martínez, vecino de Ormani Arenado 124, entre Pedro Tellez e Isidro de Armas, en Pinar del Río, escribe para plantear una situación que considera empaña los esfuerzos por llevar alimentos a la población.

Refiere que en la placita conocida como "La Escalera", situada en Pedro Tellez, entre Rafael Morales y Ormani Arenado, hubo desorden a la hora de despachar las papas que oportunamente se informó serían por la libreta de abastecimientos.

"Las primeras vueltas se distribuyeron sin problemas, pero a mediados de abril llegó ese producto a la placita y se vendió liberado, porque esa era la indicación que le dieron al administrador, según me manifestó ese funcionario. Esto se hizo sin tener en cuenta que la papa es un alimento de amplia demanda y provocó que fuimos muchos los núcleos que no pudimos adquirirlas.

"¿Cómo es posible que un alimento tan codiciado no se venda en todas las ocasiones con el rigor que merece?, ¿acaso no se facilita así la reventa?".